

ÍNDICE

El BOE publica el acuerdo para que el aprobado sea norma general este curso. EL CONFIDENCIAL	Pág 2
Cataluña y Euskadi reducen al mínimo las repeticiones. EL PAÍS	Pág 2
El Gobierno permite que estudiantes puedan pasar de curso sin tener en cuenta el número de suspensos. EUROPA PRESS	Pág 3
El Gobierno quita el límite de suspensos que fijaba la Lomce para pasar de curso y obtener el título este año. EL MUNDO	Pág 4
Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla y León no flexibilizarán los criterios para pasar de curso y obtener el título. EL PAÍS	Pág 6
La patronal Escuelas Católicas tilda la orden de Celaá sobre la evaluación de este curso como "contraria a la ley". EUROPA PRESS	Pág 6
Italia reabrirá los colegios en septiembre y no en este curso. EL PERIÓDICO de Catalunya	Pág 7
La FP ve imposible dar clases prácticas a distancia: "No se puede aprender a conducir sin tocar el volante" EL DIARIO.es	Pág 8
La escuela concertada acusa a la ministra Celaá de "aprovechar" la pandemia para "acelerar" su reforma educativa. EUROPA PRESS	Pág 9
Los hijos no nacidos computarán para obtener la beca de guardería en Madrid. EL PAÍS Madrid	Pág 10
Suspense en enseñanza no presencial. LA VOZ DE GALICIA	Pág 10
El PP y Vox piden la devolución de la 'Ley Celaá' por su "demagogia" y falta de consenso. EUROPA PRESS	Pág 11
PP, Ciudadanos y Vox enmiendan a la totalidad la nueva ley educativa. EL PAÍS	Pág 12
La nota final de los estudiantes será la media de los dos primeros trimestres y "el trabajo y la actitud" del tercero. INFORMACIÓN de Alicante	Pág 13
Una sola gran asignatura de ciencia y otra de lengua ante la emergencia escolar. EL PAÍS	Pág 14
La Xunta flexibiliza la titulación en ESO pero se contiene en bachillerato. LA VOZ DE GALICIA	Pág 16
Las aulas no volverán a abrir este curso salvo para clases de refuerzo y alumnos de Infantil con padres trabajando. EUROPA PRESS	Pág 18
Los niños volverán a clase en septiembre, salvo excepciones. EL PAÍS	Pág 19
El Congreso amplía el plazo de enmiendas a la 'Ley Celaá' hasta el 6 de mayo. EUROPA PRESS	Pág 21
Los padres, desesperados por el anuncio de Sánchez de que no habrá vuelta al colegio hasta septiembre. EL MUNDO	Pág 21
La comunidad educativa celebra la vuelta a las aulas en septiembre pero pide concreción en la desescalada. EUROPA PRESS	Pág 22
La Comunidad Valenciana quiere examinar de Selectividad a cada alumno en su instituto. EL PAÍS	Pág 24
Educación propone que un solo profesor trabaje a la vez en dos aulas contiguas para la fase 2. ABC	Pág 25
Unanimidad en la comunidad educativa: nadie entiende por qué solo los menores de seis años podrán ir al colegio. EL DIARIO.es	Pág 26
"No resistiremos con parches. Gran parte de las escuelas infantiles va a desaparecer". EL PAÍS	Pág 27
Las familias reclaman más conciliación en los planes para la vuelta a clase. LA VANGUARDIA	Pág 29
El PP exige test a alumnos y profesores y distancia de seguridad para volver a las aulas tras el Covid19. EUROPA PRESS	Pág 30
Desescalada educativa. EL PERIÓDICO de Extremadura.	Pág 30
Millones de datos de alumnos y profesores están expuestos por la educación 'online'. EL PAÍS	Pág 31
La "normalidad" en Educación costaría 5.000 millones de euros. MAGISTERIO	Pág 33
China: reconversión de urgencia para 300 millones de alumnos. MAGISTERIO	Pág 35
La comunidad educativa pide claridad y garantías sanitarias en la vuelta a clase. MAGISTERIO	Pág 36
El BOE publica los cambios en la EVAU y el acuerdo sobre el tercer trimestre. EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN	Pág 37
Lecciones educativas desde una Europa confinada. EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN	Pág 38
El miércoles termina el plazo de enmiendas para la tramitación de la LOMLOE. EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN	Pág 40
Cataluña cambia los horarios escolares para acercarse al modelo europeo. EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN	Pág 41

17 sistemas de evaluación. ESCUELA	Pág 42
No habrá «vuelta al cole» hasta septiembre. ESCUELA	Pág 42
Así funcionarán las repeticiones «excepcionales» de Celaá. ESCUELA	Pág 44
Se amplía el plazo para tramitar enmiendas parciales a la LOMLOE. ESCUELA	Pág 47
Aprender, aprobar, pasar y repetir en los tiempos del COVID19	Pág 49
Educación, antídoto contra la brecha digital. ESCUELA	Pág 50

El Confidencial

EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES

El BOE publica el acuerdo para que el aprobado sea norma general este curso

La orden establece que la evaluación final de los aprendizajes del alumnado durante el curso 2019-2020 considerará en conjunto las evaluaciones de todo el curso

EFE. 24/04/2020

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes los acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación sobre el final de curso escolar y el inicio del próximo ante la situación generada por el coronavirus, que contemplan que la promoción será la norma general en todas las etapas y repetición, una medida muy excepcional. Asimismo, explica que las comunidades que han mostrado su disconformidad con estos acuerdos, pueden sumarse con posterioridad.

Según recoge la orden, su publicación responde "al deber y responsabilidad del Ministerio de ofrecer, con la mayor urgencia, las vías necesarias para que las administraciones educativas competentes que muestren su acuerdo puedan de forma inmediata organizar el desarrollo del tercer trimestre del curso escolar 2019-2020. De esta forma, se busca satisfacer los requerimientos y las expectativas de la comunidad educativa en el actual escenario de emergencia sanitaria y ante las consecuencias que esta crisis tiene en la vida de los estudiantes, sus familias y los docentes.

Para ello, "se recurre a los procedimientos de emergencia y urgencia que se prevén por la normativa vigente, pero en coordinación y colaboración con las comunidades autónomas, y siempre teniendo en cuenta el parecer que han expresado públicamente los miembros de la comunidad educativa", añade. Recuerda que las comunidades que han mostrado su disconformidad con algunas directrices del acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación del pasado 15 de abril son Castilla y León, País Vasco, Andalucía, Murcia y Madrid.

La orden establece que la evaluación final de los aprendizajes del alumnado durante el curso 2019-2020 considerará en conjunto las evaluaciones de todo el curso y que el aprobado será la norma general en todas las etapas, considerándose la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente argumentada. Añade que la titulación debe ser la práctica habitual para los alumnos de 4.º de ESO y de 2.º de Bachillerato y de FP, para lo cual las administraciones educativas adaptarán los criterios exigibles para obtenerla, pudiendo organizar pruebas extraordinarias de recuperación y titulación a las que podrán presentarse quienes así lo deseen.

Pese a no haberlo ratificado expresamente, las mayoría de las comunidades que rechazaron este acuerdo sobre fin de curso han asumido su contenido y han comunicado a sus docentes que primen los resultados de las dos primeras evaluaciones, aunque se remiten a "la normativa estatal" para fijar los criterios de titulación y promoción.

EL PAÍS

Cataluña y Euskadi reducen al mínimo las repeticiones

Los dos territorios dictan normas en línea con el acuerdo impulsado por el Gobierno

IGNACIO ZAFRA. VALENCIA 24 ABR 2020

Cataluña y el País Vasco han aprobado normas para la finalización de curso que facilitan al máximo que los alumnos pasen de curso, limitan las repeticiones a casos excepcionales y les permiten titularse y por tanto, en el caso de los de segundo de Bachillerato, presentarse a la Selectividad sin haber superado todas las materias. Tanto un territorio como otro dejan las decisiones en manos de los centros y equipos docentes, en línea con el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Educación y la mayoría de comunidades autónomas la semana pasada. Ambos Ejecutivos mostraron su apoyo al contenido del pacto anunciado por la ministra Isabel Celaá, pero dijeron que elaborarían sus propios planes, un gesto con el que remarcaban sus competencias educativas.

Cataluña sí aparece finalmente, sin embargo, como una de las comunidades que ha mostrado su conformidad con el pacto en el listado de autonomías que figura en la orden dictada este viernes por el Ministerio de Educación para regular el final de curso.

Tras la publicación de las instrucciones de Cataluña y Euskadi, ya son solo cuatro las comunidades (Madrid, Castilla y León, Andalucía y Murcia) abiertas a la opción de aplicar los estrictos límites de suspensos previstos en la Lomce. La ley educativa establece que, en general, no se puede pasar de curso con más de dos suspensos ni presentarse a la Selectividad con una materia pendiente. Entre estas cuatro comunidades, gobernadas por el PP, también existen, sin embargo, diferencias. Mientras Madrid ha anunciado que aplicará la Lomce, Murcia se ha mostrado dispuesta a asumir la orden que prepara el Gobierno. Castilla y León y Andalucía están esperando a leer el texto que publique el ministerio para tomar una decisión.

Carácter diagnóstico

Tanto en las normas vasca y catalana como en el acuerdo —basado en el consenso mayoritario alcanzado en la conferencia sectorial de educación celebrada el 15 de abril— se plantea la tercera evaluación con carácter diagnóstico y se recoge que el trabajo a distancia de los estudiantes solo podrá contar para bien. También coinciden en que la base de la evaluación serán las calificaciones de los dos primeros trimestres, y la evaluación final la realizarán los profesores de forma individualizada y global.

“Dadas las circunstancias en las que se ha desarrollado una parte del curso 2019-2020, los equipos docentes deberán garantizar que ningún alumno o alumna se vea obligado a repetir por razones asociadas a la dificultad que haya podido tener para acceder a la educación presencial”, señalan las instrucciones aprobadas por el Departamento de Educación del Gobierno vasco. Después de subrayar que la repetición debe ser “excepcional”, advierte de que si se produce “deberá realizarse un informe individualizado” que pruebe “que las causas de la repetición no están vinculadas a las situaciones de desigualdad puestas de manifiesto durante el confinamiento”, así como “el beneficio que el alumno obtiene con la misma”. La inspección educativa vigilará que así sea.

Las instrucciones aprobadas por la Generalitat de Cataluña señalan que dadas “las circunstancias excepcionales” generadas por la pandemia, los equipos docentes podrán permitir a los alumnos titularse a pesar de no haber “alcanzado todos los niveles competenciales” propios de la etapa educativa.

Los escenarios a los que dan lugar son muy parecidos al previsto en el acuerdo del ministerio y la mayoría de comunidades. Prescinden de la rigidez que implica que un número de asignaturas suspensas conlleve automáticamente a la repetición de curso o la imposibilidad de obtener el título o presentarse a las pruebas de acceso a la universidad. Introducen facilidades para recuperar materias suspendidas en trimestres anteriores, pero eximen de esa obligación a los alumnos desconectados. Y dejan la decisión final en manos de los equipos docentes, cuyos informes de evaluación individuales servirán de base para fijar los refuerzos que los alumnos tendrán que recibir a lo largo del curso siguiente

europapress.es

El Gobierno permite que estudiantes puedan pasar de curso sin tener en cuenta el número de suspensos

El Ministerio de Educación asegura que la orden respeta la ley y defiende una evaluación "global" tras la cancelación de las clases

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Los estudiantes de Primaria, Secundaria, Bachillerato y de Formación Profesional podrán promocionar y titular este curso, de forma excepcional, sin tener en cuenta el número de asignaturas suspensas, como confirma una orden del Ministerio de Educación y Formación Profesional publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La orden, que recoge los acuerdos alcanzados por el ministerio que dirige Isabel Celaá y las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación del pasado 15 de abril, establece que la repetición de curso debe ser "muy excepcional" para evitar que la pandemia del coronavirus, que mantiene suspendidas las clases presenciales desde el 16 de marzo, pueda "perjudicar" al alumnado afectado por el cambio a la enseñanza a distancia.

En ese sentido, la orden ministerial rmada por Celaá, que entra en vigor este sábado, permite a las comunidades autónomas competentes "exibilizar" los criterios de evaluación, promoción y titulación "sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de áreas pendientes".

Fuentes del Ministerio de Educación precisan a Europa Press que esta orden "no modifica el ordenamiento jurídico vigente" y pretende fomentar una evaluación "global" del alumnado ante las circunstancias "extraordinarias" de este final del curso, con más de ocho millones de estudiantes de enseñanzas no universitarias siguiendo las clases a distancia connados en sus hogares. "Los estudiantes promocionarán de curso y la repetición se considerará una medida de carácter excepcional, que se adoptará en todo caso de

manera colegiada por el equipo docente en función de la evolución académica del estudiante durante el periodo previo a la suspensión de la actividad lectiva presencial", señala la orden que establece las directrices para el tercer trimestre del curso actual.

En el documento, el Ministerio de Educación admite que cinco comunidades autónomas (Andalucía, Castilla y León, Euskadi, Madrid y Murcia) han mostrado "su disconformidad" con el acuerdo. En el caso de Euskadi, porque consideraba que invadía sus competencias. En las cuatro restantes, gobernadas por el Partido Popular y Ciudadanos, se reclamaba a Celaá que fijase un criterio común en toda España para la promoción y titulación este curso. Algunas de estas comunidades pedían que el Ministerio de Educación precisara el número mínimo de suspensos con los que un estudiante podría pasar de curso o conseguir su título este año.

Sin embargo, la ministra Celaá aseguró la semana pasada en una entrevista a Europa Press que esa decisión no le correspondía porque está establecido en la vigente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada en 2013 por el Partido Popular. "No hablamos de número de suspensos. Es de nuevo el concepto de un estado de emergencia que reacciona excepcionalmente ante una situación excepcional, de crisis en el tema no sólo sanitario sino social. Nosotros no hablamos de número de suspensos, las leyes están ahí", explicó Celaá en la entrevista.

FLEXIBILIDAD GENERAL PARA EVALUAR

La orden publicada este viernes en el BOE precisa que la evaluación del alumnado de Primaria y Secundaria "será integradora y colegiada, dando prioridad a la progresión y consecución de los objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondiente frente a la superación de los criterios de evaluación específicos de cada materia".

También se podrán exhibir los criterios de obtención del título de Bachillerato, "basándose en la evolución del alumno en el conjunto de las materias y su madurez académica en relación con los objetivos de la etapa, sin tener en cuenta las materias pendientes.

Además, se autoriza de manera general la ampliación en un año del límite de permanencia en Bachillerato de aquellos alumnos que se hayan visto afectados por las circunstancias de este curso escolar marcado por la irrupción de la pandemia y la suspensión de las clases en las aulas.

La misma "flexibilidad" se aplicará en la Formación Profesional Básica para conseguir del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, y en el caso de los títulos de grado medio y grado superior de Formación Profesional, la orden establece que se atiendan "a principios generales de adquisición de la competencia general del título y no de la superación de la totalidad de los módulos formativos".

Algo parecido se aplicará en las enseñanzas artísticas y deportivas, donde "los responsables educativos también podrán autorizar la modificación de los criterios de evaluación de los alumnos" y aplazar las pruebas específicas de acceso hasta "el momento en que las circunstancias sanitarias lo permitan". También se flexibilizarán las enseñanzas de idiomas, al igual que los programas del tercer trimestre de educación de adultos.

"IDENTIFICAR" A LOS DESCONECTADOS

Todas estas medidas tienen el objetivo de paliar la "brusca alteración del desarrollo del curso escolar" que ha provocado "la situación de emergencia sanitaria" en España, con especial atención al alumnado más vulnerable por las condiciones socioeconómicas familiares, y aquellos que han dejado de seguir las clases a distancia durante el conamamiento.

Por ello, la orden ministerial pide que los centros educativos identifiquen "al alumnado desconectado o no localizable" y preparen "planes específicos de recuperación del vínculo escolar y de refuerzo" para ayudar a reincorporar a estos escolares "a la actividad educativa tan pronto como sea posible".

La orden publicada este viernes en el BOE apremia tanto a la administración como a los centros a hacer "un esfuerzo especial para identificar al alumnado que carece de medios de conexión digital" y organizar "sus recursos de apoyo para favorecer en la medida de lo posible la adecuada atención al alumnado con necesidades educativas especiales"



El Gobierno quita el límite de suspensos que fijaba la Lomce para pasar de curso y obtener el título este año

Los sindicatos CSIF, Anpe, USO y USIE dicen que es una "ilegalidad", mientras el Ministerio de Educación defiende que "no modifica el ordenamiento jurídico vigente"

OLGA R. SANMARTÍN. Madrid. Viernes, 24 abril 2020

El Gobierno ha quitado "de forma excepcional" el límite de suspensos que fijaba la Lomce para pasar de curso y obtener los títulos académicos en la enseñanza no universitaria en este final de curso tocado por el coronavirus. Así consta en una orden ministerial que ha publicado el BOE, en la que se permite a las comunidades autónomas "flexibilizar" los criterios de promoción y titulación "sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de áreas pendientes". En otras palabras: sin tener en cuenta un límite de suspensos.

La Lomce, que sigue en vigor, y también los reales decretos que la desarrollan establecen que en la ESO no se puede pasar curso con más de tres suspensos y en Bachillerato con más de dos. También dice que para obtener el título de la ESO no se pueden tener más de dos asignaturas suspendidas siempre que no sean a la vez Lengua y Matemáticas y para lograr el título de Bachillerato se debe tener todo aprobado.

Pero la orden ministerial publicada este viernes señala, por el contrario, que, en Primaria, la ESO, Bachillerato y FP, las CCAA "podrán autorizar la modificación de los criterios de evaluación" y "podrán flexibilizar, de manera excepcional durante el curso 2019/2020, los criterios de promoción en todos los cursos, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de áreas pendientes" porque "la repetición se considerará una medida de carácter excepcional".

Añade que, en la ESO, Bachillerato y FP, etapas que conducen a título oficial, las CCAA también "podrán flexibilizar los criterios de obtención del título" y "no serán tenidas en cuenta limitaciones para obtener la titulación que afecten al número de áreas pendientes".

Los sindicatos de profesores CSIF, USO y Anpe, así como el sindicato de inspectores educativos USIE, han denunciado que esto es "una ilegalidad" y crea "inseguridad jurídica" en el profesorado, porque "una orden ministerial, de rango inferior, no puede modificar lo que dice una ley orgánica".

Marta Martín, responsable de Educación de Ciudadanos, considera que "es una orden envenenada que encaja en el marco de la dejación de funciones que viene haciendo el Gobierno en materia de educación y que incita a las comunidades autónomas a tomar determinaciones fuera del marco de su competencia". "Las comunidades autónomas no tienen competencia jurídica legal para hacer esas modificaciones a las que les está incitando el Estado. Si esto se hiciera, serían las comunidades autónomas las que incumplieran el marco jurídico", advierte.

PP: "IMPONEN LA LOMLOE"

El PP también está en contra porque considera que esta orden "impone la Lomloe [la reforma educativa del PSOE] por la puerta de atrás", sin pasar por el perceptivo trámite parlamentario.

El Ministerio de Educación defiende que las directrices recogidas en la orden "no modifican el ordenamiento jurídico vigente" y "respetan las competencias de las comunidades autónomas". Fuentes del Ministerio explican que "se trata de hacer una evaluación global del trabajo de cada alumno, respetando la ley pero adaptándola a la situación excepcional que estamos viviendo, sin ceñirse al corsé fijo de las asignaturas".

La orden se fundamenta en la situación de excepcionalidad creada por la evolución de la pandemia del coronavirus, que ha llevado a que se suspendan las clases presenciales en toda España. Se apoya en el acuerdo que el pasado 15 de abril suscribieron en la Conferencia Sectorial de Educación las 12 comunidades autónomas que firmaron el borrador propuesto por la ministra Isabel Celaá.

En el BOE queda de manifiesto la "disconformidad" del País Vasco, Andalucía, Murcia, Madrid y Castilla y León. Estas regiones se negaron a firmar la orden, como les pedía Celaá. El País Vasco porque consideró que el acuerdo no era vinculante y el resto de regiones precisamente porque estaban en contra de cómo el Ministerio había modificado los criterios de la Lomce en cuanto a promoción y titulación.

Madrid y Murcia, en sus instrucciones para finalizar el curso académico, dicen que se regirán por "la normativa vigente". Es decir, los alumnos que suspendan más asignaturas que las que establece la Lomce no podrán pasar de curso ni obtener el título.

Castilla y León y Andalucía todavía no han regulado cómo van a promocionar y titular sus alumnos, a la espera de la publicación de la orden ministerial. Fuentes de la Consejería de Educación castellanoleonesa explican que se "aplicará la normativa vigente en materia de promoción y titulación"; es decir, la actual ley educativa y los reales decretos que la desarrollan.

El País Vasco, por su parte, ha elaborado su propia normativa, ajena a las directrices ministeriales, en la que no se establece un límite de suspensos y en la que indica a los centros que tengan en cuenta como "base fundamental" los resultados del segundo trimestre, antes de la suspensión de la actividad docente presencial.

"Esta orden modifica el ordenamiento jurídico, porque se deja al albur de los profesores cómo titulan los alumnos al margen de la normativa vigente. A un alumno se le puede dar el título de Bachillerato con cuatro o cinco suspensos. Un estado de alarma no puede ser la excusa para saltarse la normativa", denuncia Nicolás Fernández Guisado, presidente de Anpe.

El problema, según recuerda CSIF, que estudia emprender acciones jurídicas contra esta orden, es que estos nuevos criterios van a dar lugar a un "agravio comparativo", porque en este curso del coronavirus los alumnos de Bachillerato van a obtener un título que les habilita para hacer la Selectividad y entrar en la universidad con varios suspensos cuando, en otras ocasiones, a los estudiantes se les ha exigido que tengan todo aprobado.

El sindicato USO advierte que "la promoción de curso generalizada supone en la práctica también un aprobado general, algo que rechaza una parte significativa del profesorado". "Esto afectará de manera especial a los alumnos que cambien de etapa, como es el caso de 6º de Primaria y 4º de ESO. El 2º curso de Bachillerato es el más importante a considerar, pues las calificaciones cuentan significativamente para la nota de acceso a la

universidad y determinará en muchos casos la elección de los estudios superiores y de universidad. En este aspecto, al ser la EBAU una prueba de ámbito nacional y con efectos en todo el Estado, era necesario garantizar condiciones de valoración iguales para todos los estudiantes", denuncia.

Felipe de Vicente, de la Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto (Ancaba), apunta que "modificar el criterio de asignaturas para pasar de curso no tiene encaje jurídico en un estado de alarma" y denuncia que el texto de esta orden no ha pasado por el Consejo Escolar del Estado.

EL PAÍS

Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla y León no flexibilizarán los criterios para pasar de curso y obtener el título

El Ministerio de Educación publica la orden que aplicarán la mayoría de autonomías para que todos los estudiantes promocionen salvo casos excepcionales

IGNACIO ZAFRA / ANA TORRES MENÁRGUEZ. 24 ABR 2020

Madrid, Murcia, Castilla y León y Andalucía -gobernadas por el PP y, en el último caso, en coalición con Ciudadanos- mantendrán los criterios de promoción y titulación que marca la ley educativa (Lomce), a diferencia del resto de autonomías que tras haber alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Educación, flexibilizarán los requisitos para no frenar la trayectoria académica de 8,2 millones de estudiantes afectados por el cierre de los centros por la pandemia de covid-19.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la orden del Ministerio de Educación que recoge el acuerdo educativo para la finalización del curso escolar consensuado con la mayoría de comunidades autónomas, que establece que todos los alumnos podrán pasar de curso y obtener los títulos de su correspondiente etapa educativa salvo casos "muy excepcionales". La norma contiene la lista de las 12 autonomías que han mostrado su "conformidad" con el contenido del acuerdo, entre las que finalmente figura Cataluña.

Las cinco comunidades que han rechazado suscribir el acuerdo también aparecen mencionadas en la orden. Se trata de Castilla y León, Andalucía, Murcia, Madrid y Euskadi. Pero de ellas, País Vasco y Madrid ya han decidido qué harán. Euskadi ha publicado sus propias instrucciones para el fin de curso, que encajan con el acuerdo alcanzado por el Gobierno y las otras 12 comunidades, al limitar al máximo la repetición y dejar la decisión final sobre qué sucederá con cada estudiante en manos de los centros y equipos docentes. El Gobierno vasco se mostró en sintonía con el texto consensuado la semana pasada en la conferencia sectorial de educación, pero dijo que el diseño del fin de curso entraba dentro de sus competencias. Madrid, por su parte, ha decidido seguir utilizando la actual ley educativa, la Lomce, mucho más restrictiva a la hora de promocionar y titularse.

Las otras cuatro comunidades descolgadas del acuerdo educativo, Madrid, Castilla y León, Murcia y Andalucía, gobernadas por el PP, reclamaron al ministerio que fijara un número máximo de asignaturas a partir del cual los alumnos no pudieran pasar de curso o titularse. La publicación de la orden se ha demorado una semana desde la celebración de la conferencia sectorial por las negociaciones mantenidas a varias bandas. Finalmente, ni el ministerio ni las comunidades que ya se habían sumado al pacto han aceptado la exigencia de incorporar un límite numérico de asignaturas que decidan la repetición, y la norma publicada mantiene el principio de que serán los equipos docentes quienes decidan de forma global qué debe suceder con el alumno, "sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de materias pendientes". La repetición solo deberá imponerse a aquellos casos en que los profesores consideren que resultará lo más útil para los alumnos.

Las cuatro comunidades que se han acogido a la Lomce funcionarán bajo condiciones mucho más rígidas para pasar de curso y titular —como norma general no se puede pasar de curso con más de dos suspensos en ESO y bachillerato, ni titularse y hacer la selectividad con una materia pendiente—. Seguir aplicando la Lomce puede provocar un mayor número de repeticiones, especialmente entre quienes tienen peores condiciones para seguir la docencia a distancia y por ello menos opciones de aprovechar la recta final del curso para recuperar los suspensos de los dos primeros trimestres.

europapress.es

La patronal Escuelas Católicas tilda la orden de Celaá sobre la evaluación de este curso como "contraria a la ley"

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) –

La patronal de centros concertados Escuelas Católicas tilda la orden ministerial sobre las directrices de evaluación de este curso como "contraria a la ley vigente y a la propia Constitución" porque "delega competencias" a las comunidades que son propias del Estado, asegura, "y genera graves diferencias territoriales".

En un comunicado, Escuelas Católicas acusa al ministerio de Isabel Celaá de "ahondar" estas desigualdades al delegar en las comunidades autónomas los criterios sobre promoción de curso y titulación en ESO y Bachillerato "sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de materias pendientes".

La patronal de centros educativos privados sostenidos con fondos públicos recuerda que la ley orgánica vigente establece que "no se podrá pasar de curso con más de tres materias pendientes en ESO o de dos en Bachillerato; y no se obtendrá el título de Bachiller sin haber aprobado todas las áreas". "Asimismo, según establece nuestra Constitución, corresponde exclusivamente al Estado fijar los requisitos para la obtención de títulos académicos oficiales; no es una materia delegable, ni tampoco es susceptible de modificación por la normativa dictada en el marco del estado de alarma", añaden desde Escuelas Católicas.

Esta patronal de centros educativo se muestra partidaria de que el tercer trimestre del curso, que se está desarrollando a distancia tras la suspensión de las clases por el coronavirus, "tenga una evaluación en general positiva, pero con una clara finalidad de refuerzo o mejora de nota que permita premiar el trabajo en casa de los alumnos".

Sin embargo, reclama que a la hora de evaluar este curso se apliquen "en todo el Estado" los criterios de promoción y titulación contenidos en la ley orgánica "tal y como señala la Constitución". Los estudiantes de Primaria, Secundaria, Bachillerato y de Formación Profesional podrán promocionar y titular este curso, de forma excepcional, sin tener en cuenta el número de asignaturas suspensas, como confirma la orden del Ministerio de Educación y Formación Profesional publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La orden, que recoge los acuerdos alcanzados por el ministerio que dirige Isabel Celaá y las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación del pasado 15 de abril, establece que la repetición de curso debe ser "muy excepcional" para evitar que la pandemia del coronavirus, que mantiene suspendidas las clases presenciales desde el 16 de marzo, pueda "perjudicar" al alumnado afectado por el cambio a la enseñanza a distancia. En ese sentido, la orden ministerial firmada por Celaá, que entra en vigor este sábado, permite a las comunidades autónomas competentes "flexibilizar" los criterios de evaluación, promoción y titulación "sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de áreas pendientes".

Fuentes del Ministerio de Educación precisan a Europa Press que esta orden "no modifica el ordenamiento jurídico vigente" y pretende fomentar una evaluación "de manera global" del alumnado ante las circunstancias "extraordinarias" de este final del curso, con más de ocho millones de estudiantes de enseñanzas no universitarias siguiendo las clases a distancia confinados en sus hogares.

elPeriódico de Catalunya

Italia reabrirá los colegios en septiembre y no en este curso

Giuseppe Conte afirma en una entrevista que la seguridad de los niños es lo primero y que ahora había un gran riesgo de contagio en los centros escolares

DOMINGO, 26/04/2020

El jefe del Gobierno italiano Giuseppe Conte ha prometido reabrir las escuelas en septiembre solo para no "poner en peligro ahora la salud de los niños", en una entrevista publicada este domingo por el diario 'La Repubblica'. "La escuela está en el centro de nuestros pensamientos y volverá a abrir en septiembre. Pero todos los escenarios preparados por un comité de expertos predijeron altos riesgos de contagio en caso de reapertura antes de esta fecha", advirtió el dirigente.

"Es la salud de nuestros niños lo que está en juego", continuó Conte. Las escuelas han estado cerradas desde principios de marzo debido a la epidemia de Covid-19 que ya se ha cobrado más de 26.000 vidas en Italia, el país más afectado en Europa. Conte también confirmó que el Gobierno estaba trabajando en un plan para comenzar a desconfinar a los italianos y reabrir las actividades industriales a corto plazo, a partir del 4 de mayo.



La FP ve imposible dar clases prácticas a distancia: "No se puede aprender a conducir sin tocar el volante"

La Administración cambia las prácticas en empresa por proyectos, pero los profesores advierten que muchas enseñanzas no se pueden dar a distancia

Pau Rodríguez. 27.04.2020

El sistema educativo en España se ha aferrado a las clases a distancia para no dar el curso por perdido. En Primaria y Secundaria, los profesores hacen propuestas didácticas a sus alumnos a la espera de cerrar un

curso en el que, salvo excepciones, nadie va a suspender; en la universidad, el debate se centra sobre todo en los modelos de evaluación a distancia. Pero, ¿y la Formación Profesional? Su naturaleza más práctica hace casi imposible buena parte de la docencia en estos momentos, lo que aumenta la inquietud entre alumnos y profesores. El Ministerio de Educación ha suspendido las prácticas en empresas, que se sustituirán por un proyecto sin que cuente para la nota final, pero el resto queda en manos de las comunidades autónomas.

Miguel Otero es uno de los 838.764 estudiantes españoles de Formación Profesional. En su caso cursa un Grado Medio en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas en A Illa de Arousa, en Galicia. "Un tercio del contenido que damos a la semana son horas de estar en el agua... No hay mucha alternativa", se lamenta. Desde que se suspendieron las clases, el pasado 13 de marzo, desconoce cómo se les va a evaluar si no pueden volver al instituto y enfundarse de nuevo el neopreno. "Hay profesores que a título personal nos han mandado trabajos, pero de una asignatura no hemos tenido noticia", comenta este joven.

Casi todos los grados de Formación Profesional tienen un elevado componente presencial. La docencia se imparte en clases, pero también en cocinas, obradores y talleres de todo tipo. Como el de Enric Farré, profesor de Mecanización y Mantenimiento de Maquinaria en el instituto Alfons Costafreda de Tàrraga (Lleida). "Yo me dedico a aplicar la teoría en el taller con los alumnos, no tiene más. Usamos tornos, fresadoras, cizallas, soldadura... Ahora les busco vídeos de Youtube para que vayan fabricando piezas, pero para nada es lo mismo", sostiene.

Proyectos en lugar de prácticas de empresa

Los estudios de FP constan de unas 2.000 horas de clase, entre primero y segundo, de las cuales entre 300 y 400 son prácticas de empresa. La llamada Formación en Centros de Trabajo (FCT) se lleva a cabo casi siempre en el tercer trimestre del último curso, es decir, ahora. En un decreto para flexibilizar las enseñanzas y facilitar así la titulación de los estudiantes pese a la epidemia, el Ministerio permite sustituir la estancia en las empresas por "una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral".

La evaluación del módulo correspondiente a esta parte de la formación, establece el texto, no requiere la participación del tutor de la empresa ni se tendrá en cuenta para calcular la nota media del expediente académico. Solamente se recogerá como apto o no apto. De esta forma, si no se pueden retomar finalmente las clases, el alumnado de segundo de FP podrá obtener el título igualmente.

Esta alternativa genera sin embargo algunas dudas entre el profesorado, que considera que las prácticas en centros de trabajo son indispensables sobre todo para aquellos alumnos que quieren saltar directamente al mundo laboral (no tanto para los que quieren seguir estudiando). "Entendemos la situación y no nos parece mal el proyecto compensatorio, pero esto no debe impedir que los estudiantes que quieran puedan realizar las prácticas en el futuro", expone José Reina, presidente de la Asociación de Profesores de Formación Profesional.

Este docente plantea que, aunque se le apruebe en junio, el alumnado que lo desee debe tener la oportunidad de realizar las prácticas en septiembre, con todas las garantías legales y de seguridad. En buena medida también porque en la FP se adquieren competencias profesionales concretas y reconocidas administrativamente sin las cuales puede ser complicado desempeñar según qué tareas. "Es como aprender a conducir solo con teoría, sin tocar el volante no se puede", resume David Vallverdú, profesor de Instalaciones Eléctricas y Sistemas Automáticos en un instituto de Valls (Tarragona).

¿Si no hay clases en julio... en septiembre?

Con la puerta cerrada a alargar el curso a julio, en principio también para los estudios de FP, las comunidades autónomas se plantean cómo solucionar también la situación de aquellos estudiantes que deben pasar de primero a segundo sin haber aprendido todo lo necesario este trimestre.

Un ejemplo muy evidente es el de Miguel, que está ahora en primero, y que cuenta cómo todas las inmersiones subacuáticas que se va a perder estas semanas le van a suponer un problema. "En segundo ya se trabajan soldaduras debajo del agua y reflotamientos, y deberíamos llegar a ello con unas tablas que no tendremos", se lamenta este joven, indignado porque nadie se haya planteado alargar las clases en verano como medida excepcional este año. "Nos negamos a asumir que ser la promoción del coronavirus implique ser la más inepta que ha salido del centro", protesta.

En Catalunya, el Departamento de Educación ha enviado una instrucción sobre evaluaciones en la que asume que habrá una parte de aprendizajes de FP que no se podrán lograr este trimestre. Estos contenidos, resume el documento, "tendrán que tenerse en consideración en la planificación del curso siguiente". "El equipo docente podrá incorporarlos, si es necesario, en los módulos profesionales del siguiente curso", incide el texto firmado por el conseller Josep Bargalló.

La FP Dual, congelada en la práctica

Si la FP ya suelen ser muy práctica, todavía lo son más los estudios que se llevan a cabo en la modalidad Dual, lo que significa que los estudiantes alternan toda la formación entre el instituto y una empresa. En estos casos, el Ministerio permite a las administraciones autonómicas extinguir los convenios y "realizar los cambios oportunos" en matrículas y evaluaciones, sin dar más detalle.

En Catalunya, una de las comunidades con más presencia de este tipo de formación junto con el País Vasco, se ha ordenado que las juntas de evaluación de los centros puedan reducir las horas de estada en la empresa hasta un mínimo de 660, que supone un tercio de las habituales. Para los que vayan a acabar el curso con

incluso menos horas realizadas, Educación plantea que se puedan convalidar por las prácticas de una FP ordinaria y pasarse a esta modalidad.

europapress.es

La escuela concertada acusa a la ministra Celaá de "aprovechar" la pandemia para "acelerar" su reforma educativa

Organizaciones del sector acusan al Gobierno de "autoritarismo" por no paralizar la tramitación de la ley durante el estado de alarma

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) –

Patronales, sindicatos y familias de la escuela concertada acusan a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, de "aprovechar" la pandemia del coronavirus para "acelerar" su reforma educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), y exigen al Gobierno que paralice su trámite parlamentario hasta que se levante el estado alarma.

El proyecto de la LOMLOE fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 3 de marzo, la semana anterior al decreto de estado de alarma, y se encuentra actualmente en trámite parlamentario, donde ha agotado el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad después de haber sido prolongado varias semanas por la interrupción de la actividad parlamentaria. Tanto Partido Popular como Vox y Ciudadanos pidieron al Congreso la devolución del texto al Gobierno dentro de ese plazo, pero el PP reclamó la semana pasada en la Mesa del Congreso una nueva ampliación del calendario para presentar enmiendas a la totalidad, algo a lo que se opuso el PSOE, aseguran desde la patronal Escuelas Católicas a Europa Press.

Escuelas Católicas es una de las organizaciones que forman la plataforma Concertados, integrada por colectivos representativos de estos centros de titularidad privada pero financiados con fondos públicos, y que este lunes ha pedido al Gobierno la paralización de la ley, que llevaba más de un año esperando para entrar en el Congreso y pretende derogar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) aprobada en 2013 por el PP. En un comunicado, la plataforma Concertados advierte que si el Ejecutivo no detiene el proyecto de ley "va a ser difícil continuar por las vías del diálogo y de la colaboración", porque considera su tramitación "un ejercicio de autoritarismo sin precedentes" en la situación "excepcional" actual. Además de Escuelas Católicas, la plataforma está integrada por Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA) y los sindicatos FSIE y USO.

"No es comprensible que el Ministerio de Educación trate de aprovechar una situación como esta para acelerar la tramitación de la LOMLOE, sustrayendo a la comunidad educativa el sano y democrático debate que debe preceder a la aprobación de toda ley", exponen en el comunicado, que llega un día antes de que la Mesa del Congreso estudie si ampliar el plazo para la presentación de enmiendas al articulado de la ley, que naliza el próximo 29 de abril.

Estas organizaciones de la escuela concertada afirman que la 'ley Celaá', como también se conoce a la reforma educativa, "no goza de consenso en la comunidad educativa". Entienden, además, que su tramitación durante el estado de alarma evitaría "posibles actuaciones públicas contrarias de una parte importante de la sociedad". "Ni es el momento ni son las formas de proceder para aprobar una nueva Ley de Educación", añaden desde la plataforma Concertados, que solicita la inclusión de las "cuestiones educativas" en los pactos que busca el Gobierno con el resto de los grupos políticos para la reconstrucción social y económica tras la pandemia. "Eso serviría para lograr una reforma consensuada, centrada en los problemas reales que tiene la enseñanza de este país y entonces, solo entonces, estaremos preparados para una ley educativa de todos y para todos", apostillan desde la plataforma.

EL PAÍS MADRID

Los hijos no nacidos computarán para obtener la beca de guardería en Madrid

La Comunidad amplía el criterio, cumpliendo la polémica promesa electoral de Díaz Ayuso

JUAN JOSÉ MATEO. Madrid 27 ABR 2020

Los hijos no nacidos computarán como parte de la unidad familiar a la hora de pedir el cheque de guardería con el que subvenciona la Comunidad de Madrid el acceso a la educación privada entre los 0 y los 3 años, según una disposición publicada este lunes en el Boletín regional por la Consejería de Educación y Juventud.

Así, la previsión de la llegada del nuevo miembro a la familia facilitará el acceso a la ayuda, que tiene como principal límite el criterio de renta: se dividen los ingresos de los padres entre el número de miembros de la familia, y cuantos más integrantes tiene esta, más fácil es cumplir con el baremo. “A los efectos de estas bases reguladoras, se entiende por renta per cápita familiar los ingresos de la unidad familiar, divididos entre el número de miembros computables de dicha unidad”, especifica la orden que regula las becas.

Hasta ahora, se podía solicitar la beca para un hijo no nacido —en previsión de que fuera ir a la guardería durante el año de vigencia de la beca, aunque no hubiera nacido durante el periodo de solicitud—, pero este no computaba como parte de la unidad familiar.

“Con el fin de adecuar la composición de la unidad familiar a la realidad social y económica actual se considera necesario ampliar los miembros computables de la unidad familiar a los hijos solteros menores de veinticinco años”, se lee en el texto publicado en el boletín regional.

“Asimismo, también se ha considerado conveniente incluir a los hijos todavía no nacidos en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes, como una ayuda a la familia y como medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la mujer embarazada y a la maternidad”.

La decisión hace realidad una de las promesas de campaña más polémicas de Isabel Díaz Ayuso, que justo ahora hace un año, a las puertas de las elecciones autonómicas de mayo de 2019, propuso que los concebidos no nacidos fueran tenidos en cuenta como miembros de la unidad familiar a la hora de solicitar plaza escolar o tramitar el título de familia numerosa.

La Voz de Galicia

Suspenso en enseñanza no presencial

Malas conexiones, profesores desaparecidos, alumnos desaparecidos, comunicación unidireccional, estrés familiar y docentes desbordados por las correcciones: no aprobamos en teleformación

SARA CARREIRA. REDACCIÓN / LA VOZ 27/04/2020

Si es correcta la encuesta que los profesores contestaron a la CIG en Semana Santa, solo el 20% de los docentes de la escuela pública está contento con la formación a distancia de sus alumnos, técnica y conceptualmente. En la escuela privada, más habituada a las relaciones telemáticas, puede que el porcentaje sea más alto -no hay estudios al respecto- pero seguramente no llegue a cifras de amplia mayoría.

El experimento que nos ha tocado vivir se va a saldar con un suspenso o, en esta época de flexibilidad impulsada por el ministerio, con un aprobado raspado con necesidad de refuerzo el próximo año. Veamos cuáles son las quejas más habituales y si se pueden cuantificar de alguna manera:

Conexiones. Las encuestas hechas desde las familias y el sindicato CIG en la escuela pública daban cifras muy similares: sobre un 17% de los profesores no podían interactuar con sus alumnos por problemas (técnicos o formativos en la casa de estudiantes o docentes) y en el sondeo de Confapa, dos de cada tres familias reconocían que solo tienen un ordenador para compartir entre todos, mientras que un 30% confesaba que su conexión a Internet no era de calidad (no permitía hacer videollamadas).

«Desapariciones». El 7% de los profesores reconocía que tenían estudiantes «desaparecidos», de los que nada sabían desde el inicio de la crisis. Y los porcentajes se disparan en sentido contrario: son muchas las familias que aseguran que el tutor de sus hijos no es accesible (sobre el 25% en infantil, primaria y secundaria y un 37% en bachillerato). El 56% de las familias con estudiantes en infantil no recibió instrucciones directas del centro educativo para este período, un porcentaje que baja, poco, en los otros niveles (31%, 43% y 53 en primaria, ESO y bachillerato). El 20% de todas las familias dicen que los tutores de referencia no les han resuelto ninguna duda. Si se habla de familias con niños con necesidades educativas, la mitad asegura que no tiene contacto regular con el tutor.

Exceso de tarea. Junto a la existencia de profesores «desaparecidos», los alumnos se quejan de exceso de trabajo. La encuesta de Confapa dice que en educación infantil 7 de cada 10 niños está 3 horas trabajando, y en los cursos altos de primaria pasa de las cuatro horas diarias 1 de cada 3 estudiantes, y así crece exponencialmente cada grupo hasta llegar al 10% de los estudiantes de bachillerato que dedican 8 horas diarias a estudiar. En las instrucciones para este fin de curso, Extremadura obliga a los tutores de cada grupo a coordinar las tareas y trabajos que se mandan para ajustarlos bien, ya que las condiciones del confinamiento no aconsejan un exceso de tareas. En Galicia las instrucciones se conocerán hoy.

Sin control. Al hablar con las familias, una de las sensaciones que más transmiten es la heterogeneidad de sus relaciones con los docentes. Sin duda ocurre en el aula física, con profesores más o menos empáticos, activos e implicados, pero siempre hay un mínimo que ahora no se cumple. Da igual la etapa de la que se hable, en la escuela pública que no existe un control del trabajo del profesor (por exceso o defecto) ni por parte de los centros ni por la Inspección. ¿Es eso lo que se entiende por libertad de cátedra o simplemente dejación de funciones de la Administración?

Profesores agotados. Pero si en los hogares con alumnos hay estrés, entre los profesores la situación también es crítica. Para 1 de cada 3 la situación le supone un sobreesfuerzo importante, y otro de cada tres considera que ha tenido un «incremento tremendo de trabajo»; hasta el 20% considera que no se puede hablar propiamente de una adaptación a la teleformación. La duda que antes se solventaba en dos minutos en clase

ahora son seis correos electrónicos cruzados con alumnos o familia; los trabajos les llegan en enormes cantidades y a veces son fotos, por lo que la corrección tiene que hacerse desde la explicación, con lo que eso conlleva; muchos alumnos tienen dudas y otros mandan mal las cosas porque no han entendido las instrucciones. Según el sindicato FSIE de la Comunidad Valenciana, el 77% de los docentes ha aumentado en dos horas al menos su horario laboral.

Unidireccional. Es de las quejas más comunes entre las familias, esa y el exceso (o inexistencia) de tareas. Pero incluso aquellos que reciben información de sus docentes sienten que la relación es unilateral, no hay diálogo entre las partes. Por ejemplo, un 46% de las familias de la pública (de la concertada no hay datos) dicen que los docentes no les resuelven las dudas o lo hacen algunos en asignaturas sueltas. Y solo al 21% de los alumnos se les corrigen los trabajos (al 49%, nunca). La evaluación de los contenidos recibidos es nula para el 79% de las familias consultadas por Confapa.

Las cifras pueden parecer excesivas, pero no son muy diferentes de las de los profesores: por ejemplo, para el 50% de los docentes encuestados por la CIG, la coordinación con sus compañeros es nula, mínima o puntual durante la cuarentena y solo aumentó para el 20% de los profesores. La vía de comunicación docente-alumno más frecuente en la enseñanza pública es el correo electrónico (37%) y el aula virtual (28%).

El diseñador e impulsor del método del Flipped Classroom, Jon Bergmann, analizó para La Voz lo que estaban haciendo los profesores chinos (preparar material en vídeo para sus alumnos) y puso el foco en lo que hoy las familias reclaman: «Pueden ir un paso más allá y repensar el tiempo total de la clase virtual, cuando los estudiantes están en vivo al otro lado de la videollamada». Esta videollamada que realiza la clase es un momento de enorme alegría para el alumnado. Lo saben bien en el colegio público de primaria de Laredo, en Redondela, donde todas las clases tienen una hora de "recreo virtual" con sus compañeros, una cita de gran éxito, que refuerza el sentimiento de grupo y la sensación de estar acompañado.

Para facilitar este tipo de encuentros, que fomentan el espíritu de acompañamiento que tanto incluyen ministerio y consejerías en sus instrucciones, la Xunta ha facilitado el acceso a una app específica, Webex. Según los datos de la consellería facilitados esta semana, en los primeros quince días se desarrollaron 52.000 reuniones con 170.000 participantes; son muchas, sin duda, pero la educación no universitaria mueve en Galicia a unas 340.000 personas entre profesores (solo de la pública hay 30.000) y alumnos (sobre 300.000). En el supuesto de que los participantes en las reuniones de Webex fueran todos diferentes, apenas han supuesto la mitad de la comunidad educativa gallega.

europapress.es

El PP y Vox piden la devolución de la 'Ley Celaá' por su "demagogia" y falta de consenso

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) –

El PP y Vox han presentado en el Congreso sendas enmiendas a la totalidad a la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) en las que reclaman la devolución del texto al Gobierno por la falta de consenso que se ha registrado para su redacción, según argumentan los 'populares', y por considerar que la norma es "demagógica, al servicio de ideologías totalitarias", según los de Santiago Abascal. También Ciudadanos tiene registrada otra enmienda en contra de la denominada 'Ley Celaá'.

En el documento presentado por el PP, denuncia que esta ley "adolesce del consenso que los ciudadanos están reclamando" a la clase política en esta materia y señala que el Ejecutivo no ha informado de su contenido, por ejemplo, al Consejo de Estado, algo que siempre se ha llevado a cabo en estos trámites, según explica.

Tampoco incluye dentro del marco de acuerdos que pretende impulsar en el Congreso la creación de un Pacto de Estado en esta materia, denuncia el partido. Por otra parte, los de Pablo Casado señalan que la 'Ley Celaá' no recoge los retos y desafíos de la Educación en la actualidad, como las transformaciones tecnológicas, sociales y económica y, a su juicio, "retrocede a un modelo educativo comprensivo" que "devalúa la cultura del esfuerzo" y que se aleja de las "estructuras exiles y modernizadoras que han emprendido países del entorno de España".

Para Vox, por su parte, el texto presentado por la ministra Isabel Celaá es "continuista" pero "trufado de un consenso progre" que "no responde a la realidad española" ni a "los principios que han regido los usos, costumbres y tradición arraigada que han vertebrado la nación española".

UNA LEY "A ESPALDAS DE LA FAMILIA"

Según el texto registrado en la Cámara baja, recogido por Europa Press, la LOMLOE responde a un "verdadero mecanismo de deconstrucción social y cultural" al servicio de "la ideología dominante del consenso progre" y de "orientación neocomunista", más propia, a su juicio, de las "dictaduras cubanas y venezolanas".

Dentro de este análisis, Vox denuncia que la redacción de la norma se ha hecho "a espaldas de la institución de la familia", en contra de, derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, sin garantizar la libertad ideológica y vulnerando "radicalmente" los derechos y libertades recogidos por la Constitución en materia educativa.

La formación muestra también su defensa de eliminar las diferencias entre las comunidades autónomas y rechaza los argumentos del Gobierno para incluir la educación en igualdad real entre hombres y mujeres, transición ecológica o en materias relacionadas con el desarrollo sostenible, que considera conceptos "etéreos y abstractos".

Finalmente, rechaza que se elimine la demanda social para la educación concertada. En este último punto coinciden con Ciudadanos, que fue el primer partido en solicitar la devolución del texto al Ejecutivo. Los naranjas también rechazan la 'Ley Celaá', principalmente por lo que consideran una discriminación a la escuela concertada y también porque, a su juicio, la LOMLOE no garantiza el derecho a estudiar en castellano en todo el territorio español.

EL PAÍS

PP, Ciudadanos y Vox enmiendan a la totalidad la nueva ley educativa

El Gobierno sostiene que la Lomloe es más necesaria que nunca en la actual situación

ELISA SILIÓ. Madrid 27 ABR 2020

El Partido Popular, Ciudadanos y Vox han presentado enmiendas a la totalidad de la ley educativa (Lomloe) impulsada por los socialistas, que fue registrada en febrero de 2019 —en la anterior legislatura— y que comienza ahora su andadura parlamentaria con muchas críticas por el momento elegido, en plena pandemia. Una portavoz del ministerio de Isabel Celaá afirma que la norma es imprescindible: "con la suspensión de las clases presenciales se ve que muchas cosas del anteproyecto de ley son más necesarias que nunca: la digitalización, la atención personalizada y aligerar los currículums". El plazo para la presentación de enmiendas al articulado concluye este miércoles y se espera que todos los grupos —incluido el socialista— registren las suyas.

Los populares aseguran en su enmienda que la Lomloe "no recoge los retos y desafíos de la Educación en la actualidad, como las transformaciones tecnológicas, sociales y económicas". A su juicio, "retrocede a un modelo educativo comprensivo que devalúa la cultura del esfuerzo" y se aleja de las estructuras flexibles de otros países europeos. Además, el partido de Pablo Casado cree que la norma "adolece del consenso que los ciudadanos reclaman".

"Es una decisión [la tramitación de la Lomloe] unilateral, ideológica y sectaria", sostiene Marta Martín, portavoz de Educación de Ciudadanos, partido que ha devuelto la ley, aunque antes de la pandemia pretendía presentar un texto alternativo. "No es un momento para debatir una ley educativa en un momento de confinamiento, porque no se va a poder tramitar con normalidad, con garantías, a no ser que no quieran hacer comparecencias", se escandaliza. "Estamos en una situación educativa gravísima en la que no tenemos información de que desigualdades genera, de cómo ha funcionado el sistema virtual, de cómo va a empezar el nuevo curso... ¿Y vamos a estar hablando de religión, del currículum?", se pregunta. Martín cree que "no toca esto, sino trabajar urgentemente en el marco de los pactos para la reconstrucción en aquellas cosas que son inmediatas para elaborar un plan B ante la crisis educativa generada: qué problemas tienen los niños, las familias y los profesores".

Según el texto registrado en la Cámara baja por Vox, y recogido por Europa Press, la Lomloe responde a un "verdadero mecanismo de deconstrucción social y cultural" al servicio de "la ideología dominante de consenso progre y de orientación neocomunista más propio de dictaduras venezolanas y cubanas".

Las patronales mayores de la enseñanza concertada, Escuelas Católicas y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), las familias de los alumnos que estudian en estos centros —Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) y la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA)— y los sindicatos FSIE y USO sostienen en un comunicado conjunto que "la prisa del Gobierno por aprobar la Lomloe es signo de déficit democrático". Si el Ejecutivo no detiene el proyecto de ley "va a ser difícil continuar por las vías de diálogo y de la colaboración", pues consideran que su tramitación es "un ejercicio de autoritarismo sin precedentes" en la situación "excepcional" actual.

INFORMACIÓN

ALICANTE

La nota final de los estudiantes será la media de los dos primeros trimestres y "el trabajo y la actitud" del tercero

Educación desarrolla la normativa que prevé la promoción de curso y planes de refuerzo de contenidos a partir de septiembre

A los alumnos de cuarto de ESO suspensos se les realizará una prueba de recuperación y los claustros determinarán si pasa a Bachillerato. FP fusiona las prácticas y el Proyecto y los estudiantes podrán renunciar a su estancia en empresas este año y hacerlas el que viene según "disponibilidad"

Sol Giménez 28.04.2020

La evaluación final de los estudiantes de la Comunidad Valenciana será el resultado de la media de los dos primeros trimestres y la diagnosis del trabajo realizado durante el tercer trimestre de clases no presenciales. Esta última no tendrá un efecto negativo en la media de las dos primeras evaluaciones. Además, se establece que el alumnado promocionará de curso a todos los efectos y el próximo curso escolar habrá un plan específico de recuperación y refuerzo en todas las etapas educativas.

Esta es la propuesta de resolución que presentará la Conselleria de Educación a los sindicatos de la enseñanza para desplegar la orden del Ministerio de Educación por la que se establecen las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del próximo curso 2020-2021, ante la crisis de la Covid-19.

Respecto a la evaluación del tercer trimestre y la evaluación de final de curso, la Conselleria establece que el alumnado promocionará de curso a todos los efectos. En todas las etapas educativas, las actividades de evaluación del tercer trimestre tendrán carácter diagnóstico y formativo y se harán por el mismo mecanismo con el que cada centro se ha comunicado con su alumnado en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje desde la suspensión de la actividad presencial.

De este modo, los instrumentos de evaluación del tercer trimestre serán: la valoración del trabajo realizado durante los meses de abril, mayo y junio, el interés mostrado en el desarrollo de actividades y tareas y la actitud que cada alumno haya mostrado en las actividades individuales y grupales.

En todos los casos se tendrán siempre presentes las dificultades de carácter tecnológico, social o personal de cada alumno.

La evaluación de final de curso se realizará atendiendo a los resultados obtenidos en los dos primeros trimestres y "a las actitudes mostradas en el tercer trimestre, sin que este último provoque un efecto negativo en la media de las dos primeras evaluaciones", detalla el departamento que dirige Vicent Marzá, que incide en que cada alumno obtendrá sus propias calificaciones finales.

En cuanto a cuarto de la ESO, en caso de que el equipo docente haya decidido de manera excepcional en algún caso que un alumno no promocione, los centros docentes harán pruebas de evaluación extraordinarias para quien no haya obtenido el título de ESO. Estas pruebas podrán concretarse en la realización de proyectos, trabajos y tareas. Al finalizar la recuperación, el equipo docente determinará, de manera colegiada, si el alumnado en estas circunstancias obtiene el título de ESO.

El alumnado que promocione de primer a segundo de Bachillerato sin haber superado todas las materias seguirá los planes de refuerzo que establezcan los departamentos didácticos y tendrá que superar las evaluaciones correspondientes de estos planes durante el curso 2020-2021. Podrán matricularse en las materias de continuidad de segundo curso a pesar de no tener superadas las de primero, que se darán por aprobadas siempre que se superen las correspondientes de segundo de Bachillerato.

Por otra parte, en todos los cursos se establecerán planes de refuerzo de contenidos, que contemplarán medidas excepcionales de organización del currículum en los diferentes niveles y etapas. Con el objetivo de que este programa específico de refuerzo sea efectivo, los centros educativos centrarán su plan de actuación para la mejora (PAM) del curso 2020-2021 en actividades para la consolidación y la recuperación de los aprendizajes imprescindibles para que todo el alumnado pueda seguir con éxito el próximo curso, especialmente el que tiene más dificultades. Para fundamentar este plan de refuerzo, los centros educativos realizarán una programación extraordinaria de la actividad educativa para el mes de septiembre, establece la conselleria.

Transición entre etapas

Para un estadio de transición entre etapas como es el paso de sexto de Primaria a primero de ESO, Educación propone que el próximo curso el alumnado de este curso trabaje por ámbitos para facilitar el cambio y recuperar aprendizajes no impartidos en sexto de Primaria durante la suspensión de actividad presencial.

La organización curricular será similar a la existente en la actualidad en los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) de tercero de ESO y en los programas de refuerzo de cuarto de ESO

(PR4), que agrupan a la mayoría de asignaturas en ámbitos de conocimiento: lingüístico y social, y científico, matemático y tecnológico.

Igualmente, los centros también podrán proponer una organización curricular excepcional en los cursos en los que se considere que es la mejor manera de conseguir la adquisición de los aprendizajes afectados por la situación del tercer trimestre de este curso.

Formación Profesional

En FP se modifica, de manera excepcional y para este curso, la duración del módulo de Prácticas de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en las horas que prevén los reales decretos que establecen cada título y sus enseñanzas mínimas: 130 horas en FP Básica y 220 horas en grado medio y grado superior.

En los ciclos de grado superior se integrarán, de manera excepcional, los módulos de FCT y de Proyecto. Los dos se realizarán de manera integrada y con una duración total de 245 horas, correspondientes a la suma de la duración que prevén los reales decretos de cada título para estos módulos.

En los ciclos de grado medio y en la FP Básica se incorporará, excepcionalmente, un nuevo módulo integrado de 245 y 155 horas, respectivamente, que contendrá los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo de FCT y los objetivos generales de cada uno de los títulos, de tal modo que este nuevo módulo sustituirá excepcionalmente al módulo de FCT.

Dadas las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria de la Covid-19, se sustituirá la estancia en empresas por una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral.

El alumnado de segundo curso de las familias profesionales de sanidad y de servicios socioculturales y a la comunidad que hayan accedido a un contrato de trabajo de los establecidos en el marco de la Orden 299/2020, de 27 de marzo, del Ministerio de Sanidad, en cuanto a las medidas relativas a los profesionales sanitarios en formación para hacer frente a la Covid-19, se reconocerán las horas realizadas por su contrato laboral a la hora de determinar la exención total o parcial del módulo de FCT sin necesidad de aplicar la duración de un año completo de experiencia laboral.

Si un alumno ha realizado en Formación Dual más de 250 horas, el equipo docente podrá considerar estas como horas de FCT y, de manera excepcional, aprobar el módulo de FCT. En este caso, el alumnado tendrá que realizar la parte correspondiente al módulo de Proyecto. Si no ha hecho las horas mínimas, se tendrá que incorporar al módulo de FCT más Proyecto y realizar la parte pendiente hasta completar el número de horas establecido.

En cuanto a las FCT de FP, Educación determina que, con carácter excepcional, el alumnado pueda solicitar la renuncia a la convocatoria ordinaria de las prácticas del curso 2019-2020 y, a la vez, pueda optar a la realización del módulo de Proyecto en el curso 2019-2020.

En este caso, en el curso 2020-2021 el alumnado se matriculará en el módulo FCT y tendrá que hacer las prácticas atendiendo a las posibilidades organizativas de los centros educativos y a la disponibilidad de plazas a las empresas a lo largo del próximo curso.

En el momento que se autorice el inicio de la actividad educativa presencial, el alumno podrá volver a hacer la FCT en la empresa asignada o continuar en la modalidad en línea.

EL PAÍS C. VALENCIANA

Una sola gran asignatura de ciencia y otra de lengua ante la emergencia escolar

Valencia agrupará las grandes materias de primero de ESO en una gran materia científicotécnica y otra lingüístico-social. Otras autonomías, como Aragón, lo estudian. El modelo se aplica con éxito en toda España desde 1994 a alumnos que van mal

IGNACIO ZAFRA. Valencia 28 ABR 2020

Miles de alumnos llegan a final de curso con lagunas debido a la falta de docencia presencial en el último trimestre. Por ello, 12 comunidades han aprobado una normativa que permitirá a los estudiantes promocionar sin límite de asignaturas pendientes si así lo consideran los equipos docentes, una decisión tan extraordinaria como las condiciones escolares que ha impuesto la pandemia. Pero las autoridades educativas saben que, si no hacen nada más, será pan para hoy y hambre para mañana: muchos esquivarán la repetición en junio para estrellarse académicamente a partir de septiembre. Y por eso han empezado a diseñar cambios el próximo curso. El más revolucionario es el que llevará a cabo la Comunidad Valenciana en primero de la Secundaria Obligatoria, el año del salto al instituto que ya en condiciones normales registra una tasa de repetición superior al 10%.

En vez de tener clases separadas de Matemáticas, Biología y Geología, Tecnología, Castellano, Valenciano y Geografía e Historia, las principales asignaturas se agruparán en dos grandes ámbitos, uno científicotécnico y otro lingüístico-social, cada uno de los cuales será impartido por un solo profesor. Y este no dirá: ahora vamos a dar matemáticas o vamos a dar biología, sino que articulará las clases mediante proyectos que integren las distintas materias. Otras autonomías, como Aragón, también estudian hacerlo.

La fórmula no es improvisada. El modelo funciona en toda España desde hace 26 años para alumnos que van mal y ha demostrado su eficacia. El 89% de los estudiantes valencianos de cuarto de la ESO que lo utiliza, por ejemplo, aprueba el curso y obtiene el título de Secundaria Obligatoria, cuatro puntos más que quienes siguen el esquema tradicional, a pesar de que estos últimos están considerados, en principio, chavales con mejor rendimiento académico. La gran diferencia es que hasta ahora se ha utilizado solo en pequeños grupos de segundo, tercero y cuarto de la ESO que presentaban un elevado riesgo de abandono temprano de los estudios. Y el próximo curso se extenderá, en cambio, a todos los estudiantes de primero de secundaria de los centros públicos y concertados: solo en la Comunidad Valenciana a unos 57.000 estudiantes.

"El cambio de primaria a la ESO siempre es fuerte. En la pública implica el salto al instituto y todos los estudiantes lo notan. Primero de secundaria es frecuentemente el curso con mayor tasa de repetición. Si a eso le añadimos que este año han pasado el último trimestre sin poder ir a clase, el paso va a ser todavía más brusco", afirma Miguel Soler, secretario autonómico de Educación de la Generalitat valenciana. Soler conoce el modelo que va a implantar, llamado "organización del currículum por ámbitos de conocimiento", porque él lo puso en marcha a principios de los noventa desde el Ministerio de Educación. "Si ha funcionado bien para los que no iban bien, pensamos que en estas circunstancias puede funcionar también para todos, permitiendo al alumnado trabajar de forma distinta y desarrollar mejor las competencias básicas porque se centrará más en proyectos que tendrán un carácter interdisciplinar", afirma el responsable autonómico socialista.

La orden ministerial que regula el final de curso, y a la que se han adherido 12 comunidades, autoriza a las autonomías a establecer "una organización curricular excepcional" en el curso 2020-2021 para paliar las condiciones en las que va a terminar el actual.

Dos grandes materias

La Comunidad Valenciana, el cuarto territorio con mayor población escolar, creará un ámbito científicotécnico que integrará Matemáticas, Biología y Geología, y Tecnología. Y otro lingüístico-social que abarcará Castellano, Valenciano y Geografía e Historia. Educación Física, Música e Inglés se mantendrán independientes, y todavía no está decidido qué sucederá con las asignaturas optativas. El número global de horas de clase semanales que reciben los alumnos permanecerá igual.

¿Están preparados los profesores para encargarse de dar íntegramente uno de los dos ámbitos? "Si la iniciativa fuera nueva, la respuesta sería claramente no. Pero los institutos llevan desde 1994 dando, bajo distintas denominaciones, estos programas. En todos los centros de secundaria hay profesores impartiendo esos ámbitos, en el caso de la Comunidad Valenciana en tercero y cuarto de la ESO. Esos profesores, con más motivo, están en condiciones de dar los temarios de primero", afirma Soler.

El número dos de la Consejería de Educación valenciana prevé que los docentes que asuman la nueva organización sean voluntarios. "De la misma manera que lo son ya quienes dan este tipo de grupos en tercero y cuarto de la ESO, y nunca ha habido problemas para encontrar profesores voluntarios en ningún centro", señala. En un instituto de tamaño medio, de 800 alumnos, el modelo por ámbitos solo funciona ahora en un grupo de tercero y otro de cuarto. Los profesores que los imparten dan además clase en grupos ordinarios de otros cursos. Y ahora en cambio, se centrarán solo en grupos organizados por ámbitos tanto de tercero y cuarto como de primero, con lo que solo será necesario un pequeño aumento de docentes voluntarios en cada centro.

El modelo se aplicará únicamente en primero de la ESO, prosigue Soler, porque es un crítico y no hay suficientes profesores con experiencia para plantearse ampliarlo a otros niveles. La consejería barajó aplicar los ámbitos solo a los alumnos que llegaran a primero de la ESO con más problemas desde primaria, pero eso, afirma, Soler, hubiera implicado una segregación contraproducente desde el principio de la secundaria.

Los llamados programas de diversificación curricular se pusieron en marcha en toda España en 1994. Su impulsor fue Miguel Soler, entonces director del Centro de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación. "Iban dirigidos a los que iban mal, pero tenían ganas de trabajar. Aquellos que habían repetido un curso y se consideraba que con este tipo de organización tendrían más posibilidades de finalizar con éxito la secundaria obligatoria", afirma. El objetivo principal era ese y funcionó: la gran mayoría lograba graduarse y una buena parte de ellos continuaba estudiando Formación Profesional con un sistema que, entre otras cosas, hacía que en lugar de una decena de docentes diferentes dándoles clases durante el curso los alumnos tuvieran aproximadamente la mitad.

Para sorpresa de sus creadores el modelo consiguió, de hecho, más de lo previsto. "El programa duraba dos cursos, tercero y cuarto de la ESO. Y hubo un sector que al terminar empezó a matricularse en Bachillerato. Tengo la anécdota de que en 2003 me llamaron para invitarme a una comida de la primera promoción de licenciados en Geografía e Historia que, nueve años antes, habían hecho un programa de diversificación curricular. Alumnos a los que en su momento, con 14 o 15 años, iban a mandar prácticamente a la calle y habían terminado siendo licenciados universitarios", recuerda el responsable educativo del PSOE.

El PP mantuvo el programa, pero con la Lomce le cambió el nombre —su acrónimo actual es Pemar— y, sobre todo, lo adelantó a segundo y tercero de la ESO, lo cual abocaba a quienes lo cursaban a estudiar al año siguiente la modalidad de cuarto de Secundaria orientada a la rama profesional (la antesala de la FP), impidiéndoles tomar la vía del bachillerato. En 2015, tres meses después de que socialistas y Compromís llegaran a la Generalitat valenciana, la Consejería de Educación reintrodujo el programa de diversificación curricular en cuarto de la ESO (con el nombre de PR4).

La Voz de Galicia

La Xunta flexibiliza la titulación en ESO pero se contiene en bachillerato

Los centros podrán adaptar los criterios en la etapa posobligatoria, pero de manera excepcional

SARA CARREIRA. REDACCIÓN / LA VOZ 28/04/2020

Definitivamente, son los profesores reunidos en el claustro los que tendrán que decidir sin cortapisas qué alumno promociona este curso y cuál repite. No hay limitaciones en las instrucciones firmadas por la Consellería de Educación, aunque sí explican que si bien en primaria y ESO la titulación se considerará el criterio general «sen ter en conta limitacións que afecten ao número de materias pendentes», en bachillerato habrá que ser algo más exigente. En el texto que acaba de colgar la Xunta se indica que si bien para pasar de primero a segundo de bachillerato no se tendrán en cuenta los suspensos del alumno, pero para titular «será necesaria, con carácter xeral, a avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos de bacharelato». Eso sí, puntualiza acto seguido que «os centros poderán flexibilizar, de maneira excepcional, os criterios».

En general, y siguiendo los criterios del ministerio, las instrucciones inciden en la importancia del acompañamiento a los alumnos y familias; en la necesidad de mantener el curso escolar (que termina el 19 de junio excepto las pruebas de acceso a algunas enseñanzas y la selectividad); en la exigencia de adaptar el currículo y las programaciones a la situación actual informando convenientemente a las familias y alumnos (y enviándolo a la Inspección antes del 12 de mayo); el impulso a las tareas de refuerzo y recuperación; y se propone una mayor coordinación para evitar una sobrecarga de tareas o la falta de acompañamiento docente.

Los alumnos de los que no se disponga información objetiva o que hayan suspendido, podrán ser convocados a una prueba telemática o, si la situación sanitaria lo permite, presencial; esta prueba podrá ser sustituida por trabajos o actividades que sirvan de base objetiva para la calificación final.

De cara al próximo curso, se organizarán planes de recuperación y de adaptación del currículo. Esos planes se deben basar en los individuales que se hagan en la evaluación.

Educación infantil

Coordinación. El curso se considera un todo y debe haber coordinación entre los profesionales que atienden al niño y su familia. Solo en el caso de alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) se puede considerar la permanencia un año más en la etapa siempre que se entienda que es mejor para el menor.

En primaria no exige que sea colegiada la decisión de repetir

Educación primaria

Repaso. Este trimestre debe centrarse en el repaso, recuperación y refuerzo del aprendizaje, que se hará más profundo en la medida de lo posible. Es importante mantener las rutinas de trabajo y el hábito de estudio.

Evaluación. Se pide flexibilidad, y que este trimestre sirva como diagnóstico para el refuerzo, si se necesita, del próximo año. La evaluación como tal debe ser continua, global y diagnóstica, a partir de las notas de los dos primeros trimestres y contando solo el trabajo de este si favorece al estudiante.

Promoción. Será más flexible de lo habitual y no tendrá en cuenta el número de suspensas sino su progreso en el conjunto de áreas. La repetición, por tanto, será excepcional, aunque no dice nada de que deba ser tomada por el equipo docente. El informe individual será de especial relevancia en el caso de sexto y detallará los aprendizajes imprescindibles no adquiridos.

No se puede enviar a un alumno a FP básica solo porque suspenda el tercer trimestre

ESO

Decisión colegiada. Si en primaria no se menciona, en la ESO sí: «A avaliación do alumnado da Educación Secundaria Obrigatoria será integradora e colexiada, debendo priorizar a progresión» de los alumnos.

Evaluación. El grueso de la evaluación se centrará en lo hecho antes de la cuarentena, y lo ocurrido desde entonces solo puede favorecer al alumno. Los centros pueden organizar actividades de evaluación, con carácter diagnóstico, en la misma línea en que se vienen comunicando con las familias.

Programas especiales. Enviar a un alumno a PMAR o FP básica no es posible solo con los resultados del tercer trimestre

Promoción. Se flexibilizará al máximo la promoción sin limitación en el número de suspensos. La repetición será excepcional y la tiene que decidir el equipo docente en conjunto. Los alumnos que pasen de curso con alguna suspena deberán cursarla al año siguiente y tendrán programas o grupos de refuerzo.

Titulación. Dadas las circunstancias, se flexibilizará al máximo y no se tendrá en cuenta la limitación por el número de materias pendientes. Las decisiones lo serán de todo el equipo docente.

La evaluación final de bachillerato tiene que estar antes del 9 de junio

Bachillerato

Final de curso. Para adaptarse al nuevo calendario de bachillerato, la evaluación final deberá hacerse antes del 9 de junio en la convocatoria ordinaria (en septiembre la extraordinaria).

Evaluación. Se adaptarán los criterios de evaluación, valorando especialmente los aprendizajes más relevantes y la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, trabajar en equipo e investigar. La evaluación será continua y diferenciada por materias, y más flexible.

Se dará prioridad a las evaluaciones anteriores al confinamiento y las actividades desarrolladas desde casa siempre que favorezcan al alumno, que no podrá verse perjudicado por las dificultades en el cambio de metodología ni se le podrá bajar la nota obtenida en las dos primeras evaluaciones.

Promoción. Se flexibilizarán los criterios para pasar de primero a segundo, y no se considerará como una limitación para hacerlo el número de suspensos siempre que se consideren otros criterios como la madurez del estudiante para alcanzar las competencias clave de la etapa. La decisión de hacer repetir a un alumno debe tomarse en el claustro. En caso de pasar con alguna suspenso, el estudiante deberá matricularse de ella y se diseñará un programa de refuerzo y recuperación.

Titulación. Para obtener el título de bachiller «será necesaria, con carácter general, una evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos». Pero, «los centros podrán flexibilizar, de manera excepcional, los criterios de obtención del título teniendo en consideración las limitaciones que afecten al número de suspensos» si a juicio del claustro el alumno ha adquirido los objetivos generales de la etapa. Se basarán para ello en la evaluación de los dos primeros trimestres y de lo realizado en primero.

Formación Profesional

Un módulo más el próximo curso. Aquellos contenidos que no ha dado tiempo a ver de forma presencial se podrán estudiar el próximo curso y para ello se autoriza «a su ubicación en otro módulo profesional diferente, propio de 2.º curso, en las programaciones didácticas de los centros» o se pueden preparar actividades complementarias de formación para todos o parte del alumnado.

Prácticas flexibles. Los alumnos de segundo pueden realizar las prácticas en centros de trabajo durante el verano, una parte en modo a distancia o durante el curso que viene; también pueden sustituirlas por trabajos o proyectos.

Evaluación. Las actividades de formación se harán de la misma manera que se comunica el centro con los alumnos y nunca podrán restar la nota obtenida en los dos primeros trimestres; en caso de la enseñanza a distancia, los centros podrán sustituir la prueba presencial por otra telemática.

Promoción. Total flexibilidad para no tener en cuenta los suspensos a la hora de pasar a segundo, aunque el centro deberá tomar medidas de refuerzo. No dice nada de que el estudiante tenga que matricularse de los módulos pendientes.

Titulación. La intención es ser flexible, incluso para que los alumnos que terminan FP básica se titulen de ESO, en el mismo sentido que sus compañeros de cuarto de secundaria. En los grados medio y superior no se tendrá en cuenta la no superación de la totalidad de los módulos sino la adquisición de las competencias generales de la etapa.

Artes Plásticas y Diseño

Un módulo más el próximo curso. Al estilo de la FP, el centro puede establecer una asignatura (o actividades para todos o parte) en segundo en las modalidades de Artes Plásticas para que el alumnado aprenda aquello que no pudo ser tratado este curso.

Evaluación. La evaluación se hará de la misma manera que se comunican en este trimestre docentes y alumnos, y nunca podrá perjudicar al alumno.

Promoción. Tendrá carácter generalizado y la repetición se considerará una medida excepcional.

Titulación. Se priorizará la adquisición de competencias básicas de la etapa frente al aprobado de todos los módulos.

Música y danza

Incorporación al próximo curso. El currículo no dado este se podrá añadir a la programación del próximo curso.

Evaluación. Se podrán programar pruebas no presenciales siempre que sea posible y por las mismas vías que se comunican ahora profesores y alumnos; las calificaciones no pueden empeorar este trimestre, ni siquiera cuando se trate de materias que el alumno tiene de otros años.

Promoción. Se prioriza sobre la repetición, y las prácticas pendientes se recuperarán el próximo curso. En caso de que sean alumnos de sexto, y tuviese tres o más materias pendientes, se podrá matricular en septiembre de esas materias sin repetir todo el curso.

Titulación. Es una decisión del equipo docente. Si el alumno lo desea podrá anular la matrícula, siempre y cuando lo haga antes de la celebración de la evaluación final.

Prueba aplazada. La prueba para futuros alumnos quedan aplazadas hasta que las circunstancias sanitarias la permitan.

Escuela oficial de idiomas

Reprogramación. Los departamentos didácticos tendrán que revisar y modificar las programaciones didácticas y trasladar al próximo curso las actividades de lengua no realizadas este. Por lo demás, tanto las clases como el calendario se mantendrán.

Evaluación. Se modificará el procedimiento y se valorará la adquisición de objetivos generales. Los alumnos deberán conocer las nuevas valoraciones y el resultado de sus aprendizajes.

Promoción. Se aplicará la evaluación continua de forma excepcional, pensando en compensarla el próximo año. La prueba parcial de progreso, el rendimiento y la participación del alumno serán las bases de la evaluación.

Certificación. Las pruebas se aplazan hasta que lo autorice Sanidad.

Enseñanzas artísticas superiores

Evaluación. Se modificarán los criterios renunciando al cumplimiento completo de la programación, y valorando el progreso del alumno en la adquisición de las competencias clave. En función de lo que falte por tratar se rediseñará el próximo curso. Los nuevos criterios de evaluación tendrán que ser publicados para que los conozcan los estudiantes.

Promoción. Se pueden hacer evaluaciones telemáticas siempre que sea posible y no suponga una reducción de la nota obtenida hasta entonces, incluso en las materias de años anteriores.

Titulación. Los trabajos de fin de curso que no sean presenciales podrán continuar su proceso de elaboración a partir de una comunicación adecuada entre docente y alumno que garantice la correcta tutorización de este. Pero aquella parte que exija presencialidad, puede sustituirse por otra alternativa. La defensa del trabajo se hará por vía telemática, por videoconferencia.

Prueba de acceso. Las pruebas se aplazan hasta que lo autorice Sanidad.

europapress.es

Las aulas no volverán a abrir este curso salvo para clases de refuerzo y alumnos de Infantil con padres trabajando

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno descarta reanudar la docencia presencial este curso escolar, que finalizará en junio con enseñanza a distancia, y solo abrirá los centros educativos para clases de refuerzo y para alumnos menores de seis años cuyos padres estén trabajando.

Así lo ha anunciado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comparecencia en Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros, donde se ha aprobado el plan de desescalada tras el confinamiento que ha provocado la pandemia del coronavirus. "El curso escolar comenzará en septiembre", ha dicho Sánchez descartando la posibilidad de que los estudiantes pudieran regresar al menos unos días a sus clases este curso, un anhelo que mantenía la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, salvo algunas excepciones.

El presidente ha concretado que en la fase 2 del plan de desescalada, que podría llegar a finales de mayo, se permitirá que estudiantes que necesiten clases de refuerzo puedan acudir a los centros educativos, cerrados desde el pasado 16 de marzo por el decreto del estado de alarma.

También alumnos de Educación Infantil por motivos de conciliación familiar. "Si estamos planteando una nueva normalidad, van a existir problemas de conciliación, porque habrá padres y madres que irán a trabajar y no tendrán la posibilidad de dejar a los niños con los abuelos, porque son un colectivo vulnerable ante el coronavirus", ha explicado Sánchez.

Para ayudar en esas situaciones familiares, el Gobierno planteará a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) "reforzar todas las actividades de conciliación" y se establecerán "determinadas excepciones para que, en la fase 2, aquellos niños que no tengan presencia familiar en sus casas tengan la capacidad de ir a un centro escolar", ha detallado el presidente.

Además, Sánchez ha mencionado otra excepción en el ámbito educativo: la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), la antigua Selectividad, que se celebrará del 22 de junio al 10 de julio de forma presencial en aulas de universidades de toda España.

Más de 200.000 estudiantes de Bachillerato realizan cada año la EBAU, que antes de la pandemia estaba prevista para antes del 19 de junio en todas las comunidades autónomas. En marzo, el Ministerio de Educación

y los gobiernos autonómicos acordaron posponerla unas semanas tras la suspensión de las clases presenciales.

EL PAÍS

Los niños volverán a clase en septiembre, salvo excepciones

Las aulas acogerán a los alumnos que optan a un título -Bachillerato, ESO o FP- si quieren y a los menores de seis años cuyos padres no trabajen en casa y los alumnos de cualquier curso especialmente vulnerables

ELISA SILIÓ / BEATRIZ LUCAS. Madrid 29 ABR 2020

“Las clases vuelven en septiembre salvo algunas excepciones para reabrir centros educativos con tres propósitos: actividades de refuerzo, garantizar que los niños menores de seis años puedan acudir a los centros en el caso de que ambos padres tengan que trabajar presencialmente y, lógicamente, para celebrar la EVAU [Evaluación para el Acceso a la Universidad]”, ha afirmado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez al detallar el plan de desescalada tras el confinamiento por la pandemia.

Pero, dos horas después, el Ministerio Educación ha ido más allá. En la fase 2 podrán acudir a clase en tres supuestos: estudiantes de infantil menores de 6 años cuyos dos padres no puedan teletrabajar; estudiantes especialmente vulnerables de primaria, para recibir refuerzo educativo; y, si lo desean (es voluntario), no solo los que se presentan a Selectividad (unos 217.000), sino los alumnos del resto de cursos terminales (4º de ESO, 2º de FP de grado Medio y Superior y último año de Enseñanzas de régimen especial).

Además, una portavoz del Ministerio de Educación ha aclarado a este diario que los equipos directivos irán incorporándose también a finales de mayo a sus centros, siempre y cuando se cumplan las condiciones de control de la pandemia. Serán estos equipos los que diseñen cuántos docentes y de qué curso deben incorporarse a las aulas. Está previsto que ocurra en la fase 1 de la desescalada. El plan de desescalada en esta fase contempla respecto a los colegios e institutos que los centros educativos “abrirán para su desinfección, acondicionamiento y el trabajo administrativo y preparatorio de los docentes y personal auxiliar”.

Los centros estarán abiertos en la fase 2 también para los alumnos especialmente vulnerables de cualquier curso, “un 10 o 12% de los estudiantes”, según ha confirmado la portavoz del ministerio. Serán los profesores quienes decidan qué alumnos pueden regresar en esta fase. “Esta medida está pensada para aquellos alumnos especialmente vulnerables, que no disponen en casa de recursos tecnológicos, y para que estos alumnos hagan refuerzo y no lleguen con más lastre del que ya llevan al curso siguiente”, explicó esta portavoz.

La incorporación de estos alumnos se hará siguiendo las medidas de seguridad recomendadas. “Estos escolares se dividirán en grupos de 15 estudiantes y podrán alternar las clases presenciales con las *online*”. Además, se permite también en esta fase la apertura de los centros de educación especial, donde cursan estudios 38.000 niños.

“Mientras no haya una vuelta a la normalidad en lo económico, en lo laboral es evidente que va a haber problemas de conciliación. Habrá casos en los que padres y madres vayan a trabajar y no tengan la capacidad de dejar a sus hijos [con alguien a cargo]. Con los abuelos no pueden porque es un colectivo de riesgo”, ha reconocido Sánchez. En el caso de los menores de seis años -hay 1,7 millones matriculados en centros- las familias van a tener que acreditar que ambos progenitores no pueden teletrabajar y habrá limitación de aforo. Sánchez no ha precisado en qué momento será este regreso minoritario al aula, pero sí que será en la fase 2. A partir del 25 de mayo las provincias que cumplan los indicadores marcados ingresarán en esa fase.

El 26 de marzo la ministra Isabel Celaá se mostró confiada en una vuelta parcial de los alumnos, y así ha sido en parte: “Si no de todos a la vez, sí se espera que haya una vuelta progresiva a finales de mayo o a principios de junio”. Y desde el principio, el Ministerio de Educación tuvo claro que los primeros en retornar serían los alumnos de 2º de Bachillerato, con el fin de que tuviesen “unas semanas de refuerzo”. La EVAU determina el futuro laboral de los jóvenes, motivo por el cual el Ejecutivo desde el principio ha dado un trato especial a los bachilleres. Retrasada por la pandemia -se celebrará antes del 10 de julio-, es el único acto multitudinario previsto para las próximas semanas.

Los ocho especialistas de la Asociación Española de Pediatría que asesoran al Gobierno -un psiquiatra infantil, un especialista en enfermedades infecciosas, expertos en ética del ejercicio pediátrico y atención primaria- habían aconsejado al Ejecutivo que el regreso a los centros se produjese en septiembre. Y Sánchez les ha escuchado a medias. La comunidad médica cree que para los centros es muy complicado controlar que los alumnos de menor edad -infantil, primaria y primeros cursos de ESO- cumplan las medidas higiénicas y de distanciamiento social.

El pediatra y epidemiólogo Quique Bassat, parte de este grupo de especialistas, cree que el Gobierno se está precipitando reabriendo los centros, a pesar de que sea para conciliar. “Yo siempre he abogado por la

prudencia, si la salida del domingo en algunos casos no fue muy prudente, nos estamos precipitando innecesariamente. Pero lo sabremos pronto: todo lo que hagamos mal ahora lo veremos en dos semanas", insiste. Sobre que los primeros en regresar sean los pequeños hasta 6 años para garantizar la conciliación cree que tiene cierto sentido desde la lógica de la salud pública: "Es cierto que son los más incontrolables, pero son los de menos riesgo de contagio, los casos clínicos con infección se concentran en niños más mayores", apunta el pediatra.

Bassat señala que la apertura "debería ser de forma muy escalonada y muy prudente, primero se deberían hacer pruebas monitorizadas, quizá por edades o por barrios". Y añade: "El problema es que se están tomando las decisiones con el método de ensayo-error, vamos haciendo pruebas porque no tenemos datos científicos suficientes. Ante esa realidad es mejor ser prudentes que arriesgarnos. Entiendo la lógica económica -si no hay un lugar para que las familias dejen a sus hijos no pueden ir a trabajar-, pero desde el punto de vista de la salud pública no parece muy prudente", concluye. Además, reclama a Sánchez que la información sea más clara: "La confusión en los mensajes es lo peor para una desescalada".

Leticia Cardenal, presidenta de la confederación de AMPAS públicas Ceapa, explica que su institución "respeta las normas que los expertos sanitarios decidan", pero reclama que el retorno de alumnos no se limite a la enseñanza infantil sino que alcance a la primaria. "Necesitamos volver a trabajar, necesitaremos también que nos ayuden a articular alguna medida de conciliación. Y esperemos que las clases de refuerzo a las que se ha referido sean para todos los alumnos de primaria", sostiene esta madre cántabra. "Confiamos en que la vuelta de los de bachillerato se haga con las más estrictas medidas de seguridad, pero que nos expliquen cómo deben organizarlo los centros. Porque supongo que si la vuelta al colegio es peligrosa para los de primaria, también lo será Bachillerato", concluye Cardenal.

Francisco García, responsable de la Federación de Enseñanza de CC OO, el sindicato mayoritario, critica que las primeras medidas anunciadas "tienen más que ver con conciliación que con educación", y recuerda que los centros son espacios donde se educa, no lugares donde "dejar a los hijos mientras los padres trabajan". Pero García sí respalda la vuelta oficial al colegio en septiembre: "Parece razonable por la evolución de la pandemia que se retrase a septiembre para garantizar la seguridad y que se puedan preparar los centros para adaptarse a la nueva situación".

García reclama que se aclare si los centros van a abrir para garantizar las medidas de conciliación "que expliquen cómo lo van a hacer, con qué personal y cuándo será porque si el curso acaba en junio lo lógico es que los profesores no tengan que realizar tareas lectivas, sino que se articulen otras medidas y que no sean de carácter lectivo", añade.

Antes de este regreso parcial de alumnos, en la fase 1, los colegios e institutos "abrirán para su desinfección, acondicionamiento y el trabajo administrativo y preparatorio de los docentes y personal auxiliar". Lo mismo ocurrirá con las universidades, que se acondicionarán "para gestiones administrativas y de investigación". Ello incluye la reapertura de los laboratorios universitarios. Sus estudiantes seguirán con clases a distancia.

Desescalada desigual en las escuelas europeas

En Italia este lunes su Gobierno decretó que sus escolares no volverán a clase hasta septiembre, como ha ocurrido en España, pero ya su Ejecutivo había anunciado un aprobado automático si las clases no se reaunaban. El arranque de curso se dedicará a que lo más rezagados se pongan al día. Por ello, las clases generales del curso 2020-21 podrían empezar más tarde. En su caso la *maturità* (la Selectividad italiana) se celebrará de forma oral y *online* y no se prevé que retornen a los liceos.

La desescalada en la educación ya ha comenzado en otros países, pero lejos de volver a la normalidad. En Alemania, los consejeros de Educación de los *länder* trazaron este martes una ruta ambigua de su plan, que prevé una vuelta desigual por el distinto grado de incidencia de la pandemia en cada territorio. En todo caso, todos los alumnos en algún momento de este curso pisarán la clase, unos de forma eventual y otros de forma más continuada.

Más concretos son en Portugal, que reabre sus escuelas infantiles en junio y el Ejército está desinfectando las escuelas de secundaria para volver a las clases presenciales el 18 de mayo. El plan no incluye a los alumnos de primaria. O en Francia, donde podrán empezar a acudir a clase, de forma voluntaria, los alumnos de primaria y los que aún van a escuelas infantiles, pero todavía no los estudiantes de secundaria.

En Noruega el proceso de escolarización presencial es el inverso: comenzaron la semana pasada con las escuelas infantiles y este lunes con los primeros cuatro cursos de primaria (de seis a diez años). En el aula no puede haber más de 15 niños. Mientras los austríacos, que arrancan su plan la semana que viene, han optado por un sistema de turnos, de forma que los escolares no vayan todos los días al centro para garantizar que son pocos en el aula.

En China se preparan en el aula los jóvenes que se van a presentar al *gaokao*, considerada la Selectividad más dura del mundo y a la que se inscriben 10 millones de estudiantes. El regreso empezó por los cursos superiores y de forma escalonada están volviendo en secundaria, no así en primaria. Los profesores toman la temperatura a la entrada y la salida, los pupitres distan dos metros -en algunos casos separados con mamparas- y las clases se desinfectan constantemente.

El Congreso amplía el plazo de enmiendas a la 'Ley Celaá' hasta el 6 de mayo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) –

La Mesa del Congreso ha aprobado este martes la ampliación del plazo para enmendar el articulado de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), más conocida como 'Ley Celaá', hasta el próximo 6 de mayo.

El máximo órgano de Gobierno de la Cámara baja ha tomado esta decisión días después de que patronales, sindicatos y familias de la escuela concertada denunciarán los que, a su juicio, es un intento del Gobierno de "acelerar" la tramitación de la LOMLOE, aprovechando la crisis sanitaria del Covid19. Por eso, habían pedido al Ejecutivo que paralizase el trámite parlamentario de la ley.

El proyecto de la LOMLOE fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 3 de marzo, la semana anterior al decreto de estado de alarma, y se encuentra actualmente en trámite parlamentario, donde ha agotado el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad después de haber sido prolongado varias semanas por la interrupción de la actividad parlamentaria.

En principio, el plazo de enmiendas parciales terminaba este miércoles 29 de abril pero ahora se ha ampliado una semana. Tanto Partido Popular como Vox y Ciudadanos pidieron al Congreso la devolución del texto al Gobierno dentro de ese plazo, pero el PP reclamó la semana pasada en la Mesa del Congreso una nueva ampliación del calendario para presentar enmiendas a la totalidad, algo a lo que se opuso el PSOE, aseguran desde la patronal Escuelas Católicas a Europa Press.

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha celebrado la decisión de prorrogar el plazo de enmiendas, una medida que, según ha explicado, fue solicitada por su grupo parlamentario, entre otros, ya que le "preocupa" que el Gobierno quiera con esta norma "eliminar los centros de educación especial" y, por tanto, "hurtar" a la sociedad un debate que "afecta a los niños con discapacidad".

EL MUNDO

Los padres, desesperados por el anuncio de Sánchez de que no habrá vuelta al colegio hasta septiembre

La Ceapa y la Concapa exigen al Gobierno que les garantice medidas de conciliación para todos los alumnos.

OLGA R. SANMARTÍN. Madrid 29 abril 2020

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que ya no habrá más clases presenciales hasta septiembre ha causado alarma y sorpresa en las familias que aún confiaban en que sus hijos pudieran volver al colegio al menos unos días este curso. Da por finalizada así la posibilidad de intentar volver a la normalidad a final de curso. Eso había sido, de hecho, lo que prometía la ministra Isabel Celaá hasta hace muy poco: que la intención era que los alumnos regresaran aunque fuera 15 días para hacer "un repaso general" o por lo menos realizar un encuentro simbólico con sus compañeros.

Pero Sánchez ha contraprogramado a Celaá, al asegurar que "el regreso a las clases no se llevará a cabo hasta el mes de septiembre en líneas generales". Ha dicho que en su Gobierno son "conscientes de que eso generará problemas de conciliación" y por eso van a "estudiar habilitar centros como excepción, teniendo en cuenta que tenemos por delante además la celebración de la EBAU".

Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de España (Ceapa), de orientación progresista, está muy preocupada. Habla mientras se dispone a sacar de casa a su hijo, de 12 años, en su paseo diario. "Llevábamos todo el día esperando a salir a la calle y justo ahora ha salido este anuncio. Esto nos va a complicar mucho a mi familia y a casi todos los padres. Vamos a tener muchos problemas para conciliar".

Sánchez ha concretado que los alumnos de Educación Infantil "que no tengan presencia familiar en sus casas tengan la capacidad de ir a un centro escolar". Es decir, se refiere a aquellos en los que trabajan ambos progenitores. "Eso significa que son los alumnos hasta los seis años", apunta Cardenal. "¿Y los mayores de seis años? ¿Qué hacemos con ellos?". Según el Ministerio de Educación, de los más de ocho millones de alumnos que estudian en enseñanzas no universitarias, hay casi tres millones que tienen entre seis y 14 años, una edad a la que no pueden estar solos en casa.

¿Y LOS MAYORES DE SEIS AÑOS?

"No acabamos de entender que digan que se abrirán los centros solo para los menores de seis años", recalca la responsable de la Ceapa. "A las familias nos hace polvo, se deben articular medidas para facilitar la conciliación, tienen que ponerse las pilas".

La fase 2 de la desescalada, en cualquier caso, no comenzará hasta el 25 de mayo en ninguna comunidad autónoma. En otras palabras: los colegios para los niños menores de seis años no se abrirán como pronto hasta ese día.

Paradójicamente, Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), es mucho más comprensivo con Pedro Sánchez. "Nosotros ya habíamos pedido que, si no se podían garantizar las medidas de seguridad, se dijera cuanto antes a las familias que no se iba a regresar a las aulas", expresa. Eso sí, insta al Ejecutivo a "garantizar la conciliación". "Si usted me dice que regrese al trabajo debe garantizarme que el niño no se quede en casa solo. Es la obligación del Gobierno".

"Teníamos la esperanza de poder volver aunque fuera para rematar el curso o solucionar algunas lagunas de las clases a distancia", explica Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos (Cofapa). "Por encima de todo tiene que estar la salud de los niños. Pero hay que buscar medidas también para que no se queden solos los alumnos de Primaria. Los menores no pueden estar solos en casa. Pedimos ayudas a las empresas para que permitan a las familias seguir con el trabajo, y también a las administraciones para que se puedan celebrar campamentos urbanos que puedan ayudar a las familias a conciliar".

La orden ministerial que se aprobó la semana pasada contemplaba clases de refuerzo en verano para los alumnos con más dificultades. Sánchez ha dicho que las mantendrán. También se celebrará de forma presencial la Selectividad, entre el 22 de junio y el 10 de julio, aunque cada vez hay más incertidumbre en las universidades porque no hay un plan organizado desde el Ministerio de Universidades y mantener las adecuadas medidas de seguridad para 217.000 alumnos, más los profesores y los que vigilan el examen, va a requerir un despliegue de seguridad de dimensiones considerables.

LAS FASES

FASE 0: Se fomentará la educación on line o a distancia.

FASE 1: Los centros educativos abrirán para su desinfección, acondicionamiento y el trabajo administrativo y preparatorio de los docentes y personal auxiliar. Apertura de universidades para su desinfección, acondicionamiento y gestiones administrativas y de investigación. Apertura de laboratorios universitarios.

FASE 2: Apertura de Infantil hasta seis años para familias que acrediten que los progenitores tienen que realizar un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización. Siempre con limitación de aforo.

Con carácter voluntario para los alumnos, los cursos terminales (4º de ESO, 2º de Bachillerato, 2º de FP de Grado Medio y Superior y último año de enseñanzas de régimen especial) comenzarán con división de los grupos de más de 15 estudiantes al 50% para asistencia alterna o en semigrupos paralelos. Se permite la apertura de los centros de educación especial y la asistencia de los alumnos tendrá carácter voluntario. Los centros educativos prepararán programas de refuerzo educativo a desarrollar en el centro para los alumnos no mencionados anteriormente.

europapress.es

La comunidad educativa celebra la vuelta a las aulas en septiembre pero pide concreción en la desescalada

Docentes cuestionan el regreso de algunos grupos en mayo, padres piden medidas de conciliación y alumnos, seguridad en la EBAU

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad educativa ha celebrado la vuelta a las aulas de manera presencial para septiembre, con el inicio del nuevo curso, tal y como anunció este martes el presidente del Gobierno en rueda de prensa. Sin embargo, piden que se garanticen las medidas de seguridad para evitar posibles contagios, así como que se dote de equipos de protección tanto a docentes como a alumnos.

En declaraciones a Europa Press, la responsable de Educación de UGT, Maribel Loranca, comenta que al sindicato le parece "razonable" que se reanude la actividad lectiva presencial para septiembre, pues entiende que el Gobierno prima así los criterios sanitarios para poder hacerlo.

"Pero exigimos que se cumplan los criterios de prevención de riesgos laborales", indica, como es la desinfección de aulas e instalaciones, la realización de pruebas PCR a los trabajadores, proporcionar a los trabajadores equipos de protección individual (EPI) y establecer protocolos de actuación con medidas concretas sobre distanciamiento físico, eliminación de residuos o qué hacer en caso de alumnado o personas trabajadoras con síntomas.

No obstante, más allá de esas medidas, Loranca reclama al Gobierno que "concrete más" con respecto a las excepciones contempladas de regreso a las aulas en mayo y junio.

También desde CCOO saludan la 'vuelta al cole' en septiembre. Así, el secretario general de CCOO, Francisco García, valora "positivamente" la medida, pero llama al debate "para redefinir espacios y tiempos escolares". Para García, en los cursos que regresen antes para reforzar contenidos como en 2º de Bachiller, pide que se garantice la salud tanto de docentes como de alumnos, dotando de EPIs a estos y garantizando las distancias,

además de establecer grupos reducidos y manteniendo un "compromiso nanciero" para que los centros puedan contar con profesores en verano.

Por otro lado, García insiste en la idea de dotar al profesorado con los recursos suficientes por si hubiera un rebrote de coronavirus, dado que en este último mes en el que la docencia se ha trasladado al mundo online, "se ha puesto de manifiesto la existencia de la brecha digital".

"En cualquier circunstancia, habría que garantizar en todo momento la seguridad del alumnado y el profesorado", asegura por su parte en declaraciones a Europa Press José Luis López Belmonte, del sindicato STES, que exige formar al alumnado en herramientas telemáticas a la vuelta por si hay un rebrote de la pandemia.

Por otro lado, el sindicato valora "muy negativamente" que en la segunda fase de la desescalada (aproximadamente finales de mayo), vayan a clase determinados cursos, los menores de 6 años y quienes necesiten refuerzo. "Organizativamente vemos imposible conjugar, con las actuales plantillas docentes, seguir atendiendo mediante el teletrabajo a la mayoría del alumnado, y, a la vez, acudir a los centros educativos para atender presencialmente al resto en los niveles y etapas que ha jado el Gobierno", consideran.

En este sentido, el sindicato ANPE critica la "confusión" e "inconcreción" del Gobierno con respecto a la apertura de clases en mayo y junio. "Exigimos que aclare en qué cursos pueden volver, qué alumnos y en qué condiciones", apunta Nicolás Fernández, presidente de este sindicato. Además, considera "precipitado" que se anuncie algo así cuando, a su juicio, no se puede cumplir con las garantías sanitarias necesarias.

Desde el sindicato CSIF, reclaman un Plan Preventivo y actuaciones comunes en todas las comunidades autónomas como requisitos fundamentales para preparar la vuelta presencial a las aulas. Sobre la posibilidad de que solo abran los centros antes de que acabe el curso para tres excepciones, piden, entre otras cosas: la realización de test masivos, ratios de 12 alumnos por aula; entradas y salidas escalonadas y/o por turnos, mascarillas obligatorias y exclusión de acudir a los centros del personal de riesgo.

ESTUDIANTES Y PADRES Y MADRES DE ALUMNOS

También celebran lo anunciado por Sánchez las organizaciones estudiantiles, incluido que se abran en verano para determinados supuestos. Desde la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), consideran "necesario" que las fases de desescalada tengan en cuenta abrir los colegios en verano para que "nadie se quede atrás" y para que los estudiantes que no han podido trabajar desde casa puedan repasar y aanzar conocimientos, si bien recalca que han de darse las condiciones de seguridad necesarias, también cuando se celebre la EBAU (antigua Selectividad).

En cuanto a regresar de forma general a las aulas en septiembre, la presidenta de CANAE, Andrea Henry, asegura: "Si sanitariamente es posible y se toman medidas, creemos que sí". Aunque recalca que "es muy importante rebajar los ratios y que todos los institutos posean las mismas medidas sanitarias para que no haya desigualdad de oportunidades entre los propios institutos". "No podemos permitir a 40 estudiantes en el mismo aula como hemos podido ver hasta ahora", añade.

El Sindicato de Estudiantes también celebra que no se vaya a clase hasta septiembre. "Nos parecería una absoluta locura que se nos propusiera volver a nuestras aulas en medio de esta situación. Ya a mediados de marzo podíamos ver que el curso había saltado por los aires, que sería muy complicado poder volver a nuestros centros, y todos los acontecimientos así lo han conrmado", asegura a Europa Press su secretaria general, Coral Latorre.

Si bien, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes se pregunta qué sucederá con la enseñanza universitaria (cuya competencia es del Ministerio de Universidades), así como cuándo el Ministerio de Educación anunciará las medidas económicas que se tomarán para el próximo curso.

Con respecto a los padres y madres, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), cree "acertado" dar por finalizado este curso escolar de manera presencial y que se reanude la presencialidad para el siguiente. Pero insta al Gobierno a que "instrumente las acciones y medidas necesarias claras y generales para facilitar a las familias la conciliación laboral y familiar, una vez que se levante el Estado de Alarma decretado", según ha afirmado a Europa Press el presidente de CONCAPA, Pedro Caballero.

COLEGIOS PRIVADOS Y CONCERTADOS

En cuanto a las patronales de colegios privados y concertados, la Asociación de Colegios Privados e Independientes CICAIE valora positivamente que el Gobierno plantee una apertura de colegios gradual durante el tercer trimestre si las condiciones son favorables, sin embargo, maniesta que existe "desinformación" en cuanto a las medidas sanitarias exigidas para poder llevarla a cabo con previsión y garantías.

En concreto, precisan conocer los criterios sanitarios (en cuanto a desinfección, mascarillas, control de acceso, higiene o medidas de distanciamiento) y cuestiones como el traslado de los alumnos, la apertura del comedor

escolar o restricciones de espacios, pues CICAIE considera que es coherente limitar por metros cuadrados de cada aula en vez de por número de estudiantes para garantizar así la separación de alumnos adecuadamente.

En cuanto a la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), que agrupa a centros privados y concertados de toda España, sostiene que es "difícil" predecir cómo habrá evolucionado la situación para septiembre, pero su "deseo" es que se encuentren soluciones que permitan volver cuanto antes a la normalidad en las aulas, según ha dicho a Europa Press su presidente, Alfonso Aguiló, que pide "un buen nivel de seguridad en las escuelas" y "protocolos claros".

EL PAÍS

La Comunidad Valenciana quiere examinar de Selectividad a cada alumno en su instituto

Aragón y Castilla-La Mancha habilitarán espacios de examen en algunos centros educativos comarcales, pero como complemento a las sedes universitarias

ELISA SILIÓ. Madrid 29 abr 2020

La logística de Selectividad es un quebradero de cabeza para sus organizadores desde que llegó la pandemia. Cada comunidad autónoma debe decidir junto con sus universidades cómo organizará la prueba. El Gobierno de la Comunidad Valenciana (PSOE, Compromís y Podemos) cree haber dado con la solución adecuada para garantizar la salud de todos los implicados: que la EVAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad) se celebre en los institutos. La idea está muy madura, pero se debatirá este jueves en la comisión evaluadora en la que están presentes las universidades valencianas.

Los 20.000 alumnos valencianos, si sigue adelante la propuesta de la Generalitat, no tendrán que desplazarse cinco días seguidos a un campus para examinarse, sino que acudirán a su propio centro. Allí les proporcionarán mascarillas e hidrogel para prevenir el contagio. La Generalitat cree que de esta forma, además, los alumnos —que han sido sometidos a un gran estrés con un final de curso a distancia— se sentirán más tranquilos. Aragón y Castilla-La Mancha examinarán en institutos de algunas comarcas para fomentar la dispersión, pero a diferencia de la Comunidad Valenciana, también lo harán en sus campus.

La Generalitat se decanta por esta fórmula, que se ha ensayado este mes en Alemania, tras reunirse la Consejería de Innovación y Universidades con Justicia y Emergencias. Una portavoz de Universidades explica que en cada facultad se pueden concentrar durante la EVAU 2.000 alumnos y eso complica mucho que se mantenga el distanciamiento social, no tanto durante la prueba —se puede dejar el espacio determinado entre estudiantes—, sino por los tumultos que se forman a la entrada (se pide el DNI cada vez) y a la salida de los exámenes. Preocupa también el espacio durante las pausas o en la hora de la comida. En los institutos, por contra, no habrá otro alumnado y los aspirantes podrán dispersarse por el centro o el patio. El examen no lo vigilarán sus propios profesores, sino los de otro centro.

La mayor complicación que supone este cambio es el de la custodia de los exámenes. Obliga a que se creen más tribunales —hasta ser 400— y que se habiliten aulas de los institutos para guardar con garantías los documentos. El número de alumnos por clase dependerá del tamaño del aula y el protocolo que establezca el Ministerio de Sanidad, que aún no se ha hecho público. China celebra cada año su prueba de selectividad en los institutos, pues es lo más práctico cuando se trata de movilizar a 10 millones de candidatos.

"Dispersar no puede ser cambiar a los alumnos de sitio. En Aragón pensamos en llevarles a la feria de muestras de Zaragoza, pero el problema no es tanto el espacio, como que luego se juntan", remarcaba en este diario Ángela Alcalá, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza, la semana pasada. La Consejería de Educación de Aragón y su institución han optado por abrir institutos en cada comarca para que acojan a los aspirantes de la zona y no saturar las sedes habituales de Teruel y Huesca capital, además de Zaragoza.

Lo mismo ocurre en Castilla-La Mancha, una comunidad muy extensa y que ya celebraba exámenes en cuatro institutos además de en los campus universitarios. La prueba se celebrará, además, en esta edición en otros tres centros educativos. En la Comunidad de Madrid se estudia como opción para dispersar alumnos la apertura de algunos institutos, pero también de otras facultades o del palacio de congresos de Ifema.



Educación propone que un solo profesor trabaje a la vez en dos aulas contiguas para la fase 2

Consultado el ministerio por estas cuestiones, ha señalado que para atender a la vez a dos grupos que quieran asistir clase «hay varias formas de organizarlo. Por ejemplo, pueden estar en aulas contiguas y mientras explica a un grupo, el otro hace ejercicios o tareas que les haya puesto»

Josefina G. Stegmann. Madrid 30/04/2020

Este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el plan de desescalada aprobado en Consejo de Ministros llamado, oficialmente, «Plan para la transición hacia una nueva normalidad».

Si bien no hay fechas determinadas sí hay un calendario aproximado de un plan que se ha dividido en cuatro fases (0, 1, 2 y 3) y que se prolongará durante ocho semanas, es decir, hasta finales de junio y que empezará el 4 de mayo en todo el territorio salvo cuatro islas (Formentera, en Baleares; La Graciosa, La Gomera y el Hierro, en Canarias), que entrarán antes de esa fecha en la fase 1. ¿Cómo afectan estas fases al ámbito educativo, es decir a colegios, institutos y universidades? De acuerdo a las diferentes fases, será la siguiente:

Fase 0: En el ámbito educativo supone el fomento de la educación on line o a distancia.

Fase 1: Los centros educativos abrirán para su desinfección, acondicionamiento y el trabajo administrativo y preparatorio de los docentes y personal auxiliar. También se abrirán las Universidades para su desinfección, acondicionamiento y para gestiones administrativas y de investigación. Se contempla también la apertura de laboratorios universitarios.

Fase 2, «es la fase intermedia», dijo Sánchez que anunció que el curso escolar se reanudará en septiembre pero que en esta etapa se permitirán las actividades de refuerzo (el docente decidirá quién necesita dicho refuerzo, según Educación), los niños menores de 6 años podrán acudir a los centros en caso de que ambos padres tengan que trabajar presencialmente sin posibilidad de flexibilización y siempre con limitaciones de aforo. También se podrá celebrar la EBAU.

Además, con carácter voluntario para los alumnos, los cursos terminales (4º de ESO, 2º de Bachillerato, 2º de FP de grado Medio y Superior y último año de Enseñanzas de régimen especial) comenzarán con división de los grupos de más de 15 estudiantes al 50% para asistencia alterna o en semigrupos paralelos. Se permite la apertura de los centros de Educación Especial, y la asistencia de los alumnos tendrá carácter voluntario.

Esta última cuestión que ha generado mucha polémica. Los problemas que plantea son cómo puede el profesor atender simultáneamente con su misma jornada a los alumnos que acuden presencialmente y a los que se quedan en casa. Y en caso de los semigrupos paralelos, se plantea lo mismo: ¿cómo puede atender un mismo profesor dos grupos a la vez? Ello por no tener en cuenta el caso en que los grupos se tuvieran que dividir en más de dos (en Bachillerato la capacidad máxima por aula es de 35, por lo que si fuesen todos los alumnos habría que hacer 3 grupos)

Consultado el ministerio por estas cuestiones, ha señalado que para atender dos grupos a la vez «hay varias formas de organizarlo. Por ejemplo pueden estar en aulas contiguas y mientras explica a un grupo, el otro hace ejercicios o tareas que les haya puesto. O pueden ir en días alternos o en horarios diferentes. Cada centro lo organizará según el número de alumnos que vayan y sus posibilidades».

En cuanto al trabajo de los profesores a distancia y de forma presencial, Educación señaló que impartir «a la vez es difícil, pero se pueden organizar horarios. No todas las actividades educativas a distancia son clases como tal».

«Como pedirle a un músico que toque varios instrumentos a la vez»

Nicolás Fernández Guisado, presidente del sindicato de docentes ANPE, señaló que la medida «parte de una concepción errónea porque los profesores están actualmente teletrabajando y atendiendo a los alumnos si estos cursos vuelven a las aulas de este modo. No se le puede exigir a un profesor que entre y salga de un aula a la otra a la vez dos o tres cuestiones diferentes y al mismo tiempo programe y realice actividad telemática con los que voluntariamente hayan decidido no asistir a las aulas».

Comparó la situación con exigirle «a un músico que toque varios instrumentos a la vez o a un actor que interprete varios papeles al mismo tiempo. Creo que hay que diseñar un plan de trabajo específico que tienen que elaborar el propio equipo directivo con la flexibilidad que requiere la situación y contando siempre con el cumplimiento de las medidas sanitarias».

Aumentar la plantilla

Por su parte, el presidente del CSIF Educación, Mario Gutiérrez, ha señalado «para la reducción de las ratios, se debe disponer de plantilla necesaria para su ejecución. Y para ello aumentar las plantillas de los centros educativos para su puesta en práctica. No olvidemos que los docentes siguen con su actividad lectiva online. Así que si la administración quiere imponer clases en junio, tiene que negociarse todo el plan y por supuesto, asumir el coste».

Añadió que el hecho de que «los centros y profesorado hayan tenido que hacer todo ellos para dar continuidad al curso puede justificarse por la urgencia del estado de alarma. Pero sería injustificable que la vuelta no se planificara de manera correcta para que esto no vuelva a suceder. CSIF exige que si se impone la vuelta en junio, la salud sea lo primero, recordando que los centros educativos no son guarderías. Exigimos que dicha vuelta sea negociada y reivindicamos: test masivos, desinfección de todos los centros, que no asistiera ningún personal de riesgo, ratio de 12 alumnos y material de protección como mascarillas, guantes y dispensadores de hidrogeles. Y desde luego todo planificado y presupuestado por parte de las administraciones educativas».

Unanimidad en la comunidad educativa: nadie entiende por qué solo los menores de seis años podrán ir al colegio

Familias, sindicatos y los Gobiernos autonómicos que no controla el PSOE lamentan que no les hayan consultado la desescalada educativa, están molestos por la falta de un plan para los mayores de seis años y critican la ambigüedad de la propuesta

Daniel Sánchez Caballero. 30/04/2020

El Gobierno ha conseguido lo impensable: poner de acuerdo a la oposición, a los sindicatos educativos, a las familias laicas y a los padres católicos. A nadie le ha gustado el plan de desescalada en el ámbito educativo que presentó el martes Pedro Sánchez. La hoja de ruta genera, a estas alturas, más dudas de las que resuelve. Y muchas de las situaciones que se plantean tendrán que resolverlas las comunidades autónomas, que sin embargo a día de hoy no tienen más información sobre la cuestión de la que ha publicado el Gobierno. Familias y sindicatos también critican la falta de información e incertidumbre, e incluso tienen dudas de la viabilidad de la propuesta.

Las regiones que no gobierna el PSOE han mostrado este miércoles su descontento por lo que tachan de imposición y por no haber sido consultadas. También se ha criticado la "improvisación" (Madrid), la arbitrariedad que a su juicio supone que haya plan para los niños de seis años, pero no para los de siete (Murcia) o que se utilicen los centros como "guarderías" (Andalucía).

En resumen, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha acordado que no habrá más clase presencial hasta septiembre –el curso sigue adelante a distancia–, con algunas excepciones: se abrirán escuelas infantiles para los menores de seis años cuyos progenitores tengan que volver al puesto de trabajo; se organizarán clases voluntarias de repaso y preparatorias de otras pruebas, como la Selectividad, para los alumnos de los cursos que dan un título o acceso a otra etapa; y habrá refuerzos, también voluntarios, para los estudiantes con problemas educativos (los seleccionarán los centros).

En todos los casos será en grupos de no más de 15 personas y no antes de que entre en vigor la fase 2, a partir del 25 de mayo en las provincias que cumplan los criterios de Sanidad. Para los meses de verano quedan las actividades lúdicas anunciadas hace unas semanas.

Este plan deja una inquietud fundamental a las familias: ¿qué va a pasar con los niños de más de seis años cuando sus padres tengan que retornar a sus puestos de trabajo? Para ellos no hay alternativa, al menos no en el plan del Gobierno. Sánchez insinuó en su comparecencia –y luego el Ministerio de Educación insistió en esta idea– que serán las administraciones más cercanas (comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos) las que tendrán que ofrecer soluciones a estas familias, sin entrar en más detalles. Educación explicó que los criterios detrás de sus decisiones son de seguridad.

Las dos principales asociaciones de familias del Estado no lo entienden ni comparten. Ambas esgrimen argumentos similares: "No entendemos que las medidas de conciliación sean solo para los menores de seis. Si tienes un hijo de 12, como yo, también necesitas conciliar", explica Leticia Cardenal, de Ceapa, con representatividad en la escuela pública. Una idea similar expresa Pedro Caballero, de la católica Concapa: "O se abre para todos o no se abre para nadie, todos van a tener los mismos problemas", valora.

No le ha ido mucho mejor al Gobierno con la tercera pata de la comunidad educativa, los sindicatos de profesores. La confederación Stes ha valorado "muy negativamente" las medidas "desde el punto de vista organizativo y sanitario". En el primer caso, no creen posible "con las actuales plantillas" conjugar el teletrabajo de los profesores con la atención presencial cuando lleguen las clases voluntarias. Sanitariamente, temen la posibilidad de que los centros se conviertan en focos de contagio. En una línea similar se han manifestado otros sindicatos como CCOO.

"Hemos conocido los planes del Gobierno por la prensa"

Que Sánchez terminara de explicar la desescalada y que empezaran las dudas y críticas fue todo uno. Las comunidades autónomas, que tienen la competencia en Educación y son las que tendrán que implementar el plan del Gobierno, aseguran que nadie les ha dicho nada. Sirva como ejemplo la respuesta de la Consejería de Educación de Castilla y León: "Hemos conocido los planes del Gobierno para la desescalada educativa a través de los medios de comunicación. Así pues, estamos a la espera de que el Ministerio de Educación y Formación Profesional dé a conocer a la Junta de Castilla y León los términos y el alcance de esas medidas".

No todas las posturas han sido tan asépticas. Desde Murcia, junto con Madrid la región más beligerante en cuestiones educativas con el Gobierno central, añaden críticas específicas a la falta de información, informa Erena Calvo. "Las medidas establecidas por el Gobierno (...) no contemplan un plan real que respalde la conciliación de la vida familiar y laboral", lamentan desde la Consejería. "Además, son medidas discriminatorias tanto para el alumnado como para el profesorado, ya que no se entiende por qué un alumno de cinco años sí puede asistir y uno de siete no", añaden.

Cuando el Ministerio de Educación le responda, es previsible que se remitan a los criterios de Sanidad basados en números que explicaron ayer a este periódico. A saber: el colectivo de niños de 0 a 6 años, que conforma la etapa de Infantil y que es el que podrá ir a escuelas si sus padres tienen que volver a su trabajo, es el menos numeroso de todos, por lo que, afirma Educación, es el más fácil de manejar en condiciones de seguridad. En total son 1,6 millones de alumnos en toda España.

En Primaria, sin embargo hay tres millones de alumnos, y en Secundaria dos y medio. Estos últimos, a partir de 12-13 años, presentan menos problemas y, además, para algunos de ellos hay previstas clases voluntarias.

"Se relegan las actividades educativas"

En Catalunya, el responsable de Educación, Josep Bargalló, ha sido muy crítico con la limitación de los seis años y ha asegurado que su administración trabaja en un plan que contemple "fórmulas de acompañamiento para todo el alumnado", informa Pau Rodríguez. "Si una familia trabaja y no puede tener ninguna otra opción para sus hijos, da igual que tengan cinco o siete años", ha manifestado en una entrevista en ACN, en la que, sin embargo, no ha dado más detalles de su plan para la reapertura parcial de los centros antes del verano.

Sí ha dado a entender Bargalló que para este plan estarían estudiando ratios máximas de alumnos por aula o fórmulas nuevas de entrada y salida del centro. En este sentido, ha reivindicado que sean las autonomías las que puedan gestionar la forma en que abrirán los colegios, aunque ha admitido que el cuándo dependerá de las autoridades competentes.

El consejero madrileño, Enrique Ossorio, ha aprovechado para intentar mantener vivo el frente del aprobado general. Ossorio ha lamentado que en el proyecto de desescalada del Gobierno "se permiten otras actividades, pero se relegan las educativas, lo que encaja con el aprobado general por la puerta de atrás defendido por la ministra Isabel Celaá".

Ossorio también ha objetado que el presidente haya "marcado el camino sin hablar previamente" con las comunidades, y ha afirmado que es "un plan improvisado que no garantiza su cumplimiento por la inseguridad que genera la ausencia de un estudio epidemiológico para saber la incidencia real del virus en la población infantil". Este argumento, sin embargo, no parecía importar para la vuelta escalonada que planeaba la región a partir del 18 de mayo, según ha recordado el consejero, ahora frustrada.

En Andalucía, que se maneja a medio camino entre las críticas y la lealtad institucional, el consejero de Educación ha acusado al Gobierno de "generar más dudas que certezas en la Educación", informa Daniel Cella. Javier Imbroda también ha afirmado que Sánchez "confundió la extraordinaria labor educativa que están realizando nuestros docentes con la labor asistencial", y le recordó que "los colegios no son guarderías". El consejero ha pedido que se convoque una Conferencia Sectorial (que reúne a Gobierno y comunidades autónomas) y ha informado de que consultará a la comunidad educativa los pasos a seguir.

Tampoco las regiones que controla el PSOE tienen más información. En Valencia, la consejería ha explicado que necesita tiempo y que están "estudiando las fases, los escenarios y las decisiones", informa Adolf Beltrán.

EL PAÍS

"No resistiremos con parches. Gran parte de las escuelas infantiles va a desaparecer"

Los centros infantiles privados ven inviable abrir con menos del 70% de los niños

ANA TORRES MENÁRGUEZ. MADRID 30 ABR 2020

"Todos estamos deseando volver a la normalidad, pero hay que analizar muy bien en qué condiciones se hace", dice María José González-Mayo, presidenta de la federación nacional de escuelas infantiles Fenacein. Después de que Pedro Sánchez anunciara el martes que los niños menores de seis años podrán volver a las aulas siempre que los dos progenitores certifiquen que deben acudir a sus puestos de trabajo presencialmente, González-Mayo ha echado las cuentas de qué supondría esa medida. "Para poder funcionar y no entrar en pérdidas necesitamos que vuelvan el 70% de los niños. ¿Va a ser eso posible desde el punto de vista sanitario? ¿Hay tantas familias cuyos dos padres no puedan teletrabajar?", cuestiona la presidenta de Fenacein, que suma más de 1.000 escuelas privadas en España que atienden a niños de hasta seis años.

De acuerdo con el plan de desescalada anunciado por el Gobierno, las autonomías que entren en la fase 2 (como pronto, el 25 de mayo) podrán contemplar que los alumnos de infantil cuyos padres no puedan teletrabajar vuelvan a las aulas. "Mientras no haya una vuelta a la normalidad en lo económico, en lo laboral es evidente que va a haber problemas de conciliación. Habrá casos en los que padres y madres vayan a trabajar y no tengan la capacidad de dejar a sus hijos [con alguien a cargo]. Con los abuelos no pueden porque es un colectivo de riesgo", reconoció Sánchez.

En el curso 2018-2019, 1,2 millones de niños de tres a seis años estaban escolarizados en España (el 97% de la población de esas edades), frente a 468.652 en el primer ciclo, de cero a tres años (un 37,9%). De ese primer ciclo, el 51% acudió a centros públicos y el resto a privados.

La presidenta de Fenacein explica que las escuelas privadas no pueden abrir para un número reducido de niños porque no les permitiría hacer frente a los gastos de alquiler, mantenimiento de los locales y pago de las nóminas. “El Gobierno no ha consultado al sector y lo que tenemos claro es que no podemos aguantar con parches hasta septiembre; una gran parte de las escuelas va a desaparecer”, asegura González-Mayo. Para el colectivo de empresas, la única solución sería que el Gobierno prorrogue los ERTE al menos hasta septiembre. El Ejecutivo todavía no les ha comunicado los detalles del plan y desconocen si la apertura será obligatoria para dar servicio a las familias que lo necesiten.

PERMISOS RECUPERABLES

En el caso de los colegios públicos, que atienden a niños de tres a seis años (en algunas autonomías, como Valencia, desde los dos años), el Gobierno tendrá que explicar cómo se llevará a cabo la medida. La Plataforma de Infancia, que aglutina a 67 ONG nacionales, no entiende por qué el tope se ha puesto en los seis años y consideran que se deberían implementar planes de conciliación para familias con hijos de hasta 14 años. “Si la crisis sanitaria no permite la reapertura de tantas aulas como se necesitan, una solución podría ser que se prorroguen los permisos recuperables —días de libranza que se recuperan en los meses posteriores— de los que han gozado algunas familias”, apunta Carles López, presidente de la plataforma. “Muchas familias no pueden plantearse una reducción de jornada para atender a sus hijos porque eso conlleva disminución del sueldo”, añade.

“Los que tenemos niños de más de seis años también necesitamos concentrarnos en el trabajo para salir adelante”

PAULA, MADRE DE TRES NIÑOS

En el anuncio del Gobierno, cuyo plan definitivo aún se está elaborando, se contempla que en primaria y secundaria (6 a 16 años) podrán volver a los centros para recibir clases de refuerzo solo los alumnos en “situación de vulnerabilidad”, que hasta ahora se ha definido como los estudiantes sin Internet en casa (un 10% del total).

Paula, madrileña de 44 años, lamenta haberse quedado fuera. “Es una tomadura de pelo; los que tenemos niños de más de seis años también necesitamos concentrarnos en el trabajo para salir adelante”. En su caso, su marido se desplaza cada día a su puesto en su empresa mientras ella trabaja desde casa y cuida de sus tres hijos de 9, 11 y 14 años. “No sabemos cuánto se va a alargar esto y tenemos que sumar los meses de verano, el Gobierno debe valorar la inclusión de otras etapas educativas, siempre que la situación sanitaria lo permita”.

“Ahora solo nos queda confiar en que las empresas faciliten la flexibilidad de horarios. Muchos padres tienen miedo de perder su empleo por no poder cumplir objetivos estos meses”, lamenta Laura Baena, presidenta del colectivo Malas Madres. Según un informe de las Asociaciones de Madres Solteras, el 63% de los progenitores de familias monoparentales ha seguido trabajando durante el confinamiento. “Normalmente, nuestra brecha por motivo de los cuidados es mayor y ahora se está viendo agravada. Pedimos al Gobierno que impulse un permiso retribuido y no recuperable que cubra, al menos, una parte de la jornada”, indica Miriam Tormo, presidenta de la Asociación de Madres Solteras por Elección.

PRIORIZAR LO PEDAGÓGICO A LA CONCILIACIÓN

El consejero de Educación de Madrid, Enrique Ossorio (PP), consideró ayer que las medidas educativas del Gobierno son “improvisadas” y “generan inseguridad” porque se han adoptado sin un estudio epidemiológico que muestre la incidencia del virus en los niños. Para Ossorio, “las necesidades educativas no se pueden medir en función de las necesidades de conciliación de los padres” y se debería priorizar el “componente pedagógico”. El consejero de Educación de Andalucía, Javier Imbroda (Cs), urgió al ministerio a convocar otra conferencia sectorial para que las autonomías puedan debatir las condiciones de reapertura de los centros.

LA VANGUARDIA

Las familias reclaman más conciliación en los planes para la vuelta a clase

Bargalló proyecta una agenda catalana con un regreso para todo el alumnado

Carina Farreras. Barcelon 30/04/2020

Las familias catalanas esperan que el Departament d'Educació traslade en medidas concretas el anuncio del martes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para volver a “una nueva normalidad”, que marca la vuelta a las clases para septiembre. Las asociaciones de padres y madres consideran que el documento es demasiado vago en sus definiciones y no responde a todas las cuestiones. Esperan que la Generalitat, sobre este marco, concrete más cómo se desarrollará.

El plan de desconfinamiento está dividido por fases y en la segunda, que en un escenario optimista en Catalunya se produciría en junio, se anuncian medidas de conciliación familiar y educativas que atañen a los centros educativos. Así, Sánchez anunció la posibilidad de dejar en las escuelas de educación infantil, de primero y segundo ciclo, a los niños menores de seis años siempre que sus padres demuestren que es ineludible su presencialidad en el trabajo. Las aulas tendrían plenas garantías sobre desinfección y prevención del contagio de coronavirus.

Esta no es una medida meramente educativa sino de conciliación laboral. Por tanto, asociaciones de padres y madres como Fapac y Fapel se preguntan por qué se produce el corte en los 6 años y no en los 12, cuando terminan primaria, o en los 14, edad que el propio Gobierno determinó, seguramente con criterios pediátricos y no educativos, que eran autónomos para poder comprar (y no se les incluía en las salidas de los niños). “Las familias que trabajan también tienen niños de 7 años”, se quejó en Betevé Belén Tascón, presidenta de la Fapac, la federación de ampas más grande de Catalunya.

Según fuentes del Gobierno, la elección del grupo de edad de 0-6 años se debe a que es una etapa con menos niños en su conjunto y que es más fácil garantizar la distancia social que debe respetarse también en las aulas. Prevén asimismo, adaptar otras medidas de conciliación mediante la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

“Una cosa es soltar medidas y otra aterrizarlas en el territorio”, apunta Josep Maria Prats, de Fapel, “porque generan muchas dudas”. Por ejemplo, qué sucede si toda la clase de una escuela de infantil pide acogerse a esta medida. “No habrá espacio (las aulas pueden ocuparse a un tercio y la mitad de su aforo) y entonces cómo se decide el alumno que entra y el que se queda fuera?”, pregunta. O bien un niño que vive fuera del municipio, ¿rige la noma para el lugar de residencia o para el centro educativo?

Para Lidón Gasull, directora de la Fapac, “no se puede marear tanto la perdiz, son medidas difusas, sería mejor que no dijeran nada”, apuntó, “esperaremos a que Educació las concrete”.

El conseller Josep Bargalló está estudiando un plan de desconfinamiento catalán, atendiendo a que las competencias de educación, incluso en estado de alarma nacional, son de la Generalitat. Está organizando una vuelta al cole para todo el alumnado, y no sólo para los menores de 6 años, los que terminan etapa y los que necesitan refuerzos (como también prevé el documento del Gobierno). “El Estado puede decir cuándo abrir por seguridad sanitaria, pero qué hacer y cómo hacerlo lo decidimos nosotros”, apuntó.

Desveló que las escuelas abrirán no para dar clases sino para acompañar emocionalmente a los alumnos y que la vuelta de estos será voluntaria. Sólo los estudiantes de 4º de ESO y 2º de bachillerato tendrán clases lectivas. “Si podemos abrir en junio, lo haremos. En grupos reducidos, en grupos parciales, en grupos rotatorios... como sea”.

El Gobierno también incluyó en el plan de desconfinamiento a los alumnos de escuelas de educación especial que podrán asistir a sus centros de forma voluntaria.

El definitivo fin del curso escolar, aunque continúan las actividades telemáticas, va a suponer un retroceso en los aprendizajes previstos de niños y adolescentes. Para paliar este retraso, Fapac propone adelantar el calendario escolar al 30 de agosto. Una corriente de docentes consideraría positivo abrir unos días en julio para poder apoyar y despedir a los niños de forma presencial. No obstante, esta vía fue descartada por el Gobierno y celebrada por los sindicatos.

El Ministerio de Educación propuso abrir los centros educativos en verano así como bibliotecas, polideportivos y espacios comunitarios para actividades lúdicas y clases de refuerzo educativo para alumnos que quisieran. Sería además una medida de conciliación para los padres. El Departament coincide con esta idea, con bastante tradición en Catalunya. Queda por definir qué administración financiará estas actividades. Entidades de educación como la Fundació Jaume Bofill proponen también planificar un verano enriquecedor, con actividades especialmente dirigidas a niños de familias vulnerables. Ismael Palacín, el director de la entidad, que ha elaborado un documento con 50 propuestas, plantea, entre otros aspectos, mejorar las competencias digitales de los niños en verano para que puedan seguir un curso virtual si hace falta.

europapress.es

El PP exige test a alumnos y profesores y distancia de seguridad para volver a las aulas tras el Covid19

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha presentado este jueves en el Congreso un protocolo de “vuelta segura” a las aulas tras la crisis sanitaria del Covid19, con medidas como la realización de pruebas diagnósticas a alumnos y profesores, o la adaptación de las clases para el cumplimiento de la distancia de seguridad.

A través de una proposición no de ley, los 'populares' señalan la necesidad de un plan en este sentido, que se realice en colaboración con las comunidades autónomas y desde la cooperación con el conjunto del sector educativo.

En el texto registrado, recogido por Europa Press, el PP propone medidas como el suministro adecuado en cantidad y calidad de equipos de protección individual, así como la realización de pruebas diagnósticas, para alumnos, profesores y personal de administración y servicio.

También destaca la necesidad de fijar los aforos máximos en función del tamaño de las aulas o el establecimiento de distancias mínimas entre los alumnos.

PRIMEROS ALUMNOS, A FINALES DE MAYO

Tal y como denuncian, el parón en la actividad educativa presencial ha sido "una de las consecuencias negativas que la crisis" generada por el coronavirus está teniendo en el país y creen que el paso que tiene que dar ahora el Gobierno es garantizar la seguridad de los usuarios de estas instalaciones.

El Plan de desescalada del Gobierno contempla la vuelta a las clases en septiembre, ya con el nuevo curso, aunque en la Fase 2 del mismo, que comenzaría a finales de mayo, prepara la apertura de centros para actividades de refuerzo, para la realización de la EBAU y de las escuelas de 0 a 6 años, cuando los padres no tengan opción de conciliar en el trabajo.

El Periódico DE EXTREMADURA

Desescalada educativa

Saturnino Acosta. 30/04/2020

El curso empezará en septiembre, correcto, nada qué decir, era lo más lógico y prudente aunque se deja abierta varias excepciones del todo inexplicables. Si la razón de cerrar el curso presencial, que no académico, es necesidad sanitaria, cómo es posible que a partir de la fase 2, es decir, a partir del 26 de mayo, se abra la posibilidad de volver a las aulas a los menores de seis años, centros de educación especial, 4º de la ESO, 2º de Bachillerato o ciclos de FP, aún con restricciones de aforo y espacios.

Por partes, primero cursos de final de etapa. Considero una falta de respeto absoluta al trabajo que están realizando tanto docentes como alumnos durante este confinamiento, seguramente por la ignorancia de muchos a nuestro trabajo. Se nos ha obligado, y se ha respondido y se está respondiendo con creces, a programar una enseñanza de calidad no presencial con todo lo que implica, además de muchas más horas de trabajo: secuenciación, actividades, metodología, adaptaciones individuales, criterios de evaluación, etcétera, bajo unas instrucciones dictadas por el mismo MECFP, principalmente sobre lo aprendido en los dos primeros trimestres y algún concepto indispensable. Alternar carácter presencial con no presencial sería obligatoriamente volver a alterar todo el trabajo y en su caso discriminatorio para la generalidad del alumnado, pues muchos no podrán asistir no por falta de voluntad si no por necesidad o restricciones de movilidad. Por otro lado, y no me importan las comparaciones, si para poder desarrollar nuestro trabajo telemático doblamos las horas de trabajo, si hay que alternarlas las triplicaríamos.

Menores de seis años y educación especial. A ver cuándo nuestros ilustres dirigentes se dan cuenta que aunque nuestro sistema educativo sea también asistencial, no es la labor de los docentes cuidar niños, somos responsables de su guarda y custodia durante la jornada escolar como consecuencia del trabajo, no nuestro trabajo. Pero además de esto hay un dolor mayor. Si ya es complicado controlar a tres niños de la misma familia durante un paseo, cómo se le ocurre a nadie incitar a la vuelta a niños de educación especial o infantil con la más mínima garantía de no contagio.

Un centro educativo no es un camping, ni los alumnos ni sus docentes desmerecedores de ser protegidos. ¿Quieren vuelta a las aulas? Hagan test a toda la comunidad educativa, y una vez con garantías individuales, garanticen el acceso, la permanencia y el retorno a los hogares. ¿Pueden garantizarlo? Pues si no pueden no hagan brindis al sol, y si pueden háganlo, llevan un mes de retraso.

EL PAÍS

Millones de datos de alumnos y profesores están expuestos por la educación 'online'

Los expertos alertan de la amenaza a la privacidad de los menores que conlleva la avalancha de reseñas provocada por el confinamiento

JAVIER MARTÍN-ARROYO. SEVILLA - 30 ABR 2020

El inicio del confinamiento produjo una avalancha de datos nunca vista en la Red. De un día para otro, millones de alumnos y profesores abrieron nuevos perfiles en las plataformas digitales para asistir a clase por videoconferencia, descargar apuntes, mandar tareas o intercambiar consejos. La prioridad para los 17 Gobiernos autónomos era replicar a toda prisa el aula en los ordenadores, lo de menos, la seguridad de esta

ingente cantidad de datos. El docente decidía cómo trabajar y con qué sistema en línea de enseñanza, según su pericia con las nuevas tecnologías.

Ante el aluvión de nuevos usuarios, las plataformas digitales se saturaron y solo ahora —mes y medio desde el inicio del confinamiento— recuperan poco a poco y sin colgarse la capacidad para responder a la demanda disparada de 8,2 millones de estudiantes. También en muchas universidades, cuyos 1,5 millones de alumnos multiplicaron las quejas pese a contar con sistemas más potentes. Sin tiempo para improvisar alternativas tecnológicas, la solución de muchos Ejecutivos fue apostar por los paquetes educativos gratuitos de grandes compañías como Google y Microsoft.

Sin embargo, los expertos recelan de la seguridad de los registros. “Google sabe qué alumno ha ido a clase y podría saber qué alumno da más problemas de puntualidad al ser contratado en una empresa. Lo peligroso es la interpretación de los datos”, ilustra Javier Valls, profesor de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Granada. Mientras, Alemania, Suiza y Noruega han regulado e investigan el almacenamiento de datos de menores en la nube. Los gigantes tecnológicos aseguran que no trafican con los datos o que lo hacen de manera anonimizada.

La Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Andalucía, Madrid, Cataluña o Castilla-La Mancha han desarrollado plataformas propias con desigual autonomía y seguridad, pero combinadas con acuerdos con Google, Microsoft y Cisco, para que sus docentes utilicen también ciertas herramientas como las aulas virtuales. El resto de regiones se apoya en exclusiva en las tecnológicas. El confinamiento ha espoleado a comunidades como Navarra, que generará ahora su propia plataforma, y esta semana la Generalitat catalana ha cerrado un acuerdo para optimizar sus herramientas con el proyecto activista Xnet, que acogió las quejas de padres y madres de alumnos movilizados contra el uso de datos de niños por parte de Google. “Los menores de edad utilizan sin espíritu crítico estas plataformas de empresas dedicadas a la explotación de datos. Nos preocupa que las Administraciones no den alternativas a estas herramientas que técnicamente funcionan súper bien”, lamenta Cecilia Bayo, madre de un alumno de una escuela pública en Barcelona. La responsable de Xnet, Simona Levi, resume: “Con 80.000 euros y seis meses de trabajo se consigue una alternativa eficiente, con una *suite* alternativa que bajo la ética de los algoritmos incluya todos los paquetes, servidores soberanos y no nubes”.

La gran ventaja de los productos de los gigantes tecnológicos es su calidad, facilidad de uso y versatilidad. Juan Manuel Ruiz dirige el instituto público Cartima en Estación de Cártama (Málaga) y hace seis años que sus 350 alumnos usan tabletas en vez de libros de texto. “Google Suite nos aporta herramientas útiles, una gran facilidad de manejo para los adolescentes y garantías mínimas. No nos gusta la idea de que los datos estén en manos de una empresa privada. Queremos repensarlo, pero no es fácil”, admite Emmanuel Gálvez, de 15 años, estudia cuarto de ESO en dicho instituto y también ensalza la plataforma, en la que pasa unas cuatro horas al día. “Es muy intuitiva al ser para niños y muy fácil de trabajar. Recibimos y mandamos tareas, redactamos textos y tenemos clases por videoconferencia”, explica.

Tanto Google como Microsoft aseguran que no tratan las reseñas personales y que cumplen con el Reglamento de Protección de Datos. ¿Qué beneficio obtiene Google con su plataforma educativa Suite? “Al ser gratuita no tenemos un retorno directo”, responde Gonzalo Romero, responsable de educación de dicha empresa en España. ¿Para qué conserva los datos la compañía? “No tengo esa información, pero estamos en el esquema nacional de seguridad con categoría alta. Los centros tienen el control absoluto de los datos y pueden borrar cuentas de los estudiantes sin que quede rastro de sus datos”, añade.

Microsoft asegura que mantiene esa misma línea altruista con su producto para centros educativos Office 365: “No ganamos nada, no buscamos un beneficio económico, sino disminuir la brecha digital. Cumplimos el Reglamento de Protección de Datos y no hacemos tratamiento con los datos, no es nuestro negocio”, afirma Belén Gancedo, directora de Educación de Microsoft en España. La compañía está presente en una decena de regiones, mientras que Google Suite da soporte a siete comunidades, según los datos recopilados por este diario.

“El primer obstáculo para creer a Google es que su *software* no es de código abierto y no puede ser auditado por terceros independientes. Lo que nos piden es un acto de fe. La publicidad no es el problema central, sino los perfiles que realizan sobre cada uno de nosotros y la imposibilidad de acceder a él para saber qué datos se utilizaron, qué decisiones se tomaron y con qué organizaciones están siendo compartidos o vendidos. Por ejemplo, si mi aseguradora me sube el precio de mi prima porque su algoritmo me ve como un perfil de riesgo, nunca sabré por qué he sido discriminada. Algo parecido puede suceder cuando no nos conceden un préstamo”, destaca Manuela Battaglini, abogada especializada en ética de datos. “Si dicen que no recopilan datos, ¿sobre qué datos han hecho su auditoría de seguridad y sobre qué datos cumplen el Reglamento General de Protección de Datos?”, inquiriere.

El Reglamento de Protección de Datos califica la información de los menores como entre los más sensibles y especialmente vulnerables. Los padres firman un consentimiento sobre el tratamiento de esta información, pero los expertos censuran que “nunca es libre” porque si se niegan, perjudican la formación educativa de sus hijos

y entienden que las autoridades se aseguran de impedir que trafiquen con estos datos. “No es solo el entorno, también cuenta la sensibilidad de la información. Es una locura hacer videoconferencias con alumnos con discapacidades o dificultades familiares. Hay centros con cuatro o cinco herramientas distintas y los nenes están locos”, expone Aníbal de la Torre, asesor técnico en enseñanza *online* que estos días forma a 2.000 docentes andaluces. Alicia Piña, coordinadora de la comisión de menores de la Asociación Profesional de la Privacidad (APEP), recuerda: “El confinamiento ha puesto de manifiesto las carencias de muchos centros, sin protocolos para usar determinadas herramientas. Todavía queda mucho por hacer para proteger el derecho a la privacidad de los menores”. Las plataformas digitales educativas empiezan desde muy temprano, ya en las escuelas infantiles, antes del colegio, como ClassDojo.

Jorge García, abogado y delegado de protección de datos, critica: “Cuando estos alumnos estén ya inmersos en su ecosistema, las plataformas sabrán muchísimo de ellos. Les da igual que el alumno se llame Pedro Pérez: por el código postal o IP de conexión, el modelo y marca de dispositivo, el colegio... Dicen mucho de su nivel económico. Google afirma que no vende datos personales como tales, y es cierto, como lo es que vive de hacer que publicidad personalizada de terceros llegue a Pedro Pérez. Cosa que hará hoy, al reconocerle y seguirle fuera de la plataforma educativa, y ya sin limitaciones, mañana, desde que el Sr. Pérez alcance la mayoría de edad”.

En el extremo de la desprotección están los docentes que han creado grupos de Whatsapp y Telegram para tener un contacto directo con sus alumnos. La Agencia Española de Protección de Datos alertó en un informe de 2018 sobre las aplicaciones que recopilan datos de estudiantes a través de los móviles: “Son capaces de acceder a gran cantidad de datos de carácter personal almacenados en el propio dispositivo, tales como el número de identificación del terminal, agenda de contactos, imágenes o vídeos. Además, estas aplicaciones pueden acceder a los sensores del dispositivo, y obtener la ubicación geográfica, capturar fotos, vídeo o sonido a través de ellos”.

Las universidades llevan años apoyándose en los gigantes tecnológicos porque la calidad de su modelo es máxima y reproducirlo es inviable económicamente. Jorge Gómez, vicerrector de Tecnología y Sostenibilidad en la Universidad Complutense de Madrid, subraya: “No son las herramientas, es el respaldo computacional que tienen. Esos centros de datos no los podríamos mantener para que sean viables. Son potencias de cómputos espectaculares, no puedes pagar su coste, ni el de las comunicaciones y grabaciones”.

Investigaciones internacionales a los gigantes tecnológicos

Suiza ha sido pionera en Europa y ha cerrado acuerdos con las tres grandes, Apple, Microsoft y Google. La agencia suiza para las nuevas tecnologías y la enseñanza, Educa.ch, ha cerrado esta semana el convenio con Google para sus escuelas tras firmar el que atañe a sus universidades. “Ninguna de las tres quería aceptar que los datos estuvieran en servidores europeos y tampoco someterse a la legislación suiza si se dan fugas o un mal uso de la información, pero al final aceptaron. Google, solo tras un año de negociación”, explica Bruno Baeriswyl, comisionado para la protección de datos en el cantón de Zurich.

En paralelo, el Estado alemán de Hesse prohibió el pasado verano el uso de los paquetes educativos de los tres gigantes en sus escuelas por incumplir el Reglamento General de Protección de Datos y porque la información de los alumnos acababa en la nube europea, a la que puede acceder el Gobierno estadounidense. La autoridad para protección de datos matizó luego la prohibición bajo ciertas condiciones y ahora está pendiente de su decisión definitiva, según fuentes de su Departamento. Además, el Gobierno noruego acaba de lanzar una investigación para decidir si Google puede operar en sus escuelas y Unicef también ha iniciado sus propias pesquisas desde su cuartel general en Nueva York.

Mientras, el Estado de Nuevo México (EE UU) demandó hace dos meses a la compañía ante los tribunales por el uso supuestamente indebido de los datos de sus escolares. “Esta demanda es una tergiversación total de la información”, censura una portavoz del gigante tecnológico. El pasado otoño, el exempleado Martin Shelton relató en un reportaje los agujeros de seguridad que incluyen las diferentes versiones de Google Suite desde la ONG de Edward Snowden, Freedom of the Press Foundation. Más de 120 millones de alumnos y profesores usan Google Suite en el mundo, con un crecimiento anual del 30%.

En España, los delegados de protección de datos de cada comunidad y del Ministerio de Educación no han elevado quejas a la Agencia de Protección de Datos por fugas de información o protestas de los padres, según Julián Prieto, subdirector general del registro de dicha agencia, que tampoco ha investigado por iniciativa propia. “La normativa no se puede ver como un obstáculo para garantizar el derecho a la educación, pero tampoco el estado de alarma puede derogar la protección de datos”, opina. Los delegados de protección de datos no son responsables ante la ley por el incumplimiento de la normativa, sino los centros o los Gobiernos autónomos.

La "normalidad" en Educación costaría 5.000 millones de euros

Cierres de centros previos en situación de catástrofe hablan de dos cursos para poder recuperarla. Un estudio de Fundación Cotec propone medidas de choque según cuando se vuelva.

SARAY MARQUÉS Martes, 28 de abril de 2020

Después del huracán Katrina, que obligó a cerrar las escuelas el primer trimestre del curso 2005-06 en Nueva Orleans, a los alumnos les costó dos cursos recuperar el aprendizaje perdido, aunque les costó más a los alumnos de rentas bajas y de minorías. Así lo ha recordado estos días el investigador de la Universidad de Tulane Doug Harris, que analizó el fenómeno y remarca que al cierre de centros se sumó la pérdida masiva de empleo, el trauma emocional y la desorientación colectiva de la sociedad.

Ahora que países del entorno como Francia comienzan a poner fecha a la vuelta a las aulas tras el cierre de centros por la Covid-19 —el 11 de mayo, de forma gradual hasta el 25 de mayo, empezando por los más pequeños, con un máximo de 15 alumnos por clase— la Fundación Cotec ha lanzado un informe en el que analiza el impacto de la Covid-19 en nuestro sistema educativo. Y lo hace en función de cómo puede ser la desescalada, la vuelta a las aulas, situándose en cinco posibles escenarios y proponiendo medidas paliativas en cada uno de los casos, detallando su coste.

Reconstrucción

Sindicatos como FeSP-UGT han puesto el acento en que, más allá de acordar el cierre del actual curso, las Administraciones educativas deberían estar planificando ya el curso 2020-21, en el que abogan por aumentar la inversión, reforzar las plantillas, disminuir las ratios y reducir el currículum.

También el conseller de Educación catalán, Josep Bargalló, instaba la semana pasada en el Parlament a trabajar en la elaboración de un plan de reconstrucción “que aborde las necesidades del próximo curso 2020-21 y tenga visión de futuro”, consciente, decía, “de las graves repercusiones que la pandemia tendrá en el sistema educativo”. En su informe, Cotec analiza este impacto basándose en el modelo de Cooper, Borman y Fairchild sobre lo que los alumnos desaprenden en verano, entendiendo el cierre de centros el tercer trimestre como una prolongación del verano, y teniendo en cuenta que los alumnos seguirán aprendiendo, al estar conectados de algún modo, durante el confinamiento.

Modelo de aprendizaje sobre el confinamiento



Fuente: Simulación de Cotec a partir de Cooper, Borman y Fairchild (2010)

De este análisis concluye que la diferencia entre alumnos de rentas bajas, medias y altas se acentúa con el tiempo. Así, si en verano de 2020 los alumnos de renta baja registran un índice de aprendizaje normalizado de 1,3, los alumnos de renta media, de 2,34 y los de renta alta, de 2,54, en el verano de 2021 estos índices pasarían al 2,1, el 3,54 y 3,74, respectivamente.

“El modelo trata de visualizar de manera sencilla que el impacto en el aprendizaje va a ser desigual, pero no pretende cuantificar el impacto, eso es algo más complejo. Mientras que todos experimentan pérdidas de aprendizaje por el cierre, no todos lo hacen por igual”, explica el investigador Lucas Gortázar, coautor del informe junto a Ainara Zubillaga.

Un artículo de la Unesco, a cargo de Ana Capilla, Jorge Sainz e Ismael Sanz recuerda que la pérdida de tiempo de instrucción en un 30% del curso coincide con la diferencia de rendimiento entre España y la media de la OCDE (ocho puntos). Y calcula que esta pérdida puede reducirse a la mitad con la Educación a distancia. El análisis de la Unesco incide en la importancia no solo del tiempo que estén cerrados los centros, sino en lo que puede venir después (desempleo, agudización de la pobreza), con el consiguiente incremento del fracaso y abandono escolar.

Frente a ello, los autores recomiendan fortalecer los programas de refuerzo, orientación y apoyo en centros educativos (PROA). Así, recuerdan que el Gobierno italiano no solo ha concedido el aprobado general, sino que el curso que viene comenzará antes e incluirá clases extra para los alumnos que lo necesiten. PROA se trata de un programa validado, remarca, que se ha demostrado capaz de incrementar el rendimiento en lectura y escritura en un 8,5%. En comunidades como Galicia o Murcia, que lo han adaptado a su realidad a través de contratos-programa, ha demostrado un importante impacto a largo plazo. De eso se trataría ahora, de adaptarlo a la actual situación creando un PROA post Covid para evitar una generación Covid.

El informe Cotec subraya que el impacto de esta crisis, si no se actúa, puede ser mayor en edades tempranas, cuando más difícil es reproducir online las experiencias de aprendizaje en el aula. Frente a esto, entre sus propuestas figura, sea cuando sea la vuelta, un PROA el curso 2020-21, con un coste que se calcula en 3.000 millones de euros a cargo del Ministerio y las comunidades.

A esta medida se añade una escuela de verano si los centros reabren en mayo o junio, focalizada para alumnos más vulnerables (225 millones de euros) o universal (900 millones), mucho más ambiciosa por tanto que el programa VECA puesto en marcha hace dos veranos, dotado con 15 millones de euros en su última edición. También, la reorganización del calendario escolar del curso 2020-21, hasta conseguir un 5% más de horas lectivas (horas extra remuneradas para docentes). Se trata de la segunda medida con un mayor coste, 1.675 millones de euros. Solo PROA, la escuela de verano y esta reformulación suman 4.900 millones de euros. Si se le añaden 375 millones para planes de digitalización el resultado es, según el estudio, de 5.275 millones.

Tres brechas

De las tres brechas que la Covid-19 puede exacerbar —entre alumnos por nivel socioeconómico, entre centros y entre comunidades autónomas— es la primera la que más preocupa a los autores del informe Cotec: “Creo que por nivel socioeconómico es siempre más poderosa que las otras dos, ya de alguna forma ya las recoge y no excluye las desigualdades dentro de una comunidad autónoma o entre barrios de un mismo municipio, que pueden ser muy grandes. Además, tiene todo el sentido del mundo porque al desaparecer la escuela, cada hogar (y por tanto cada nivel socioeconómico) se vuelve una escuela”, analiza Gortázar.

Con todo, el informe se detiene también en la brecha entre comunidades y entre centros, en base a las percepciones de los directores en PISA 2018. Entre las primeras se aprecia disparidad sobre todo en el acceso a una plataforma online eficaz y en los recursos profesionales disponibles.



En la segunda, también en la preparación de los docentes para incorporar dispositivos digitales a la enseñanza, con menos de un 50% de respuestas afirmativas en la Pública frente al 75% de la Privada. Gortázar asegura que parte de esa distancia tiene que ver con la titularidad y no con el tipo de alumnado que se atiende: “Buena parte de la diferencia se debe a cuestiones puramente estructurales. La Pública está por detrás cuanto a la digitalización de la enseñanza”. Esto supone, según el informe, un “enorme reto” al escolarizar de manera mayoritaria a los alumnos de entornos socioeconómicos más vulnerables.

En tres propuestas

- **EBAU.** El informe plantea sustituir la prueba por la nota media de 1º y 2º de Bachillerato con un ajuste posterior en función de la trayectoria de cada centro, para corregir también abusos con las notas de Bachillerato si los hubiera.
- **Escuela de verano.** En los centros educativos, durante el mes de julio. A cargo de interinos remunerados y organizaciones del tercer sector. Fruto de alianzas entre consejerías de Educación, ayuntamientos y entidades sociales
- **Calendario.** Se propone adelantar la vuelta en septiembre y más periodos vacacionales, más repartidos, pero más breves.

Cinco posibles escenarios

1. **Vuelta en mayo (I).** Conlleva los menores ajustes en el terreno educativo pero reclama mayores medidas desde la perspectiva sanitaria. Incluye Escuela de Verano y PROA, pero no cambios el curso que viene.
2. **Vuelta en mayo (II).** Frente al escenario 1, apuesta por una reformulación del currículum y de la evaluación, con una integración del último trimestre del 2019-20 en el 2020-21.
3. **Vuelta en junio.** Se propone extender este curso y comenzar antes el próximo, con horas extra remuneradas para docentes hasta lograr un 5% más de horas lectivas y una red de voluntariado educativo con alumnos de facultades de Educación tutorizados como apoyo para estudiantes y familias.
4. **Vuelta en septiembre.** Se ahorra el coste de la Escuela de Verano, pero se desplazan todas las medidas de refuerzo al curso que viene. Reformulación del currículum, la evaluación y el calendario.
5. **Vuelta en septiembre y rebrote.** Plan educativo de anticipación que permita una transición organizada a procesos online la próxima vez.

China: reconversión de urgencia para 300 millones de alumnos

La transición forzada y en tiempo récord de China hacia formatos on line arroja lecciones de las que España puede aprender.

RODRIGO SANTODOMINGO Martes, 28 de abril de 2020

El cierre a cal y canto de la mayor red escolar del planeta llegó en pleno parón por el Año Nuevo chino. Era finales de enero cuando el Ministerio de Educación canceló la poca actividad que aún existía en periodo vacacional. Y pospuso *sine die* la reapertura de colegios e institutos –prevista para mediados de febrero– hasta nuevo aviso. Unos 276 millones de alumnos arrinconaron sus mochilas cuando terminaron las vacaciones. Pero el gobierno advirtió: “Se suspende la escuela, no el aprendizaje”. En absoluto un eslogan bienintencionado para un país que idolatra el éxito educativo.

El 29 de febrero, la agencia de noticias oficial Xinhua confirmó lo que todo el mundo sabía. Los centros no abrirían hasta que la epidemia estuviera “básicamente bajo control”, algo que nadie –en China ni España ni ningún lugar del mundo– sabe a ciencia cierta qué significa. Aun así, el comunicado trazaba unos requisitos difusos aunque innegociables: “Que las escuelas tengan la capacidad de control y prevención esenciales, y que esté garantizada tanto la seguridad de alumnos y profesores, como la salud pública”.

A mediados de marzo, empezaron a entornar sus puertas algunos centros en provincias donde el riesgo de contagio se estima bajo. El día 16 del pasado mes, la televisión oficial (CCTV) emitió un vídeo de chavales entrando a un centro de Guizhou, en el suroeste del país. Las imágenes, nunca vistas: mascarillas por doquier, orden marcial, policías supervisando, escaneos faciales...

Tras estos primeros test de reescolarización en tiempos de crisis, los alumnos chinos están volviendo progresivamente a las aulas. En el oeste rural, muchos centros ya funcionan a pleno rendimiento. Pero en la hiperpoblada costa este, impera la cautela. Por el momento, la prioridad de reapertura se está centrando en la Secundaria superior.

Titán telemático

China tuvo suerte de cerrar sus escuelas cuando todavía quedaban un par de semanas de vacaciones. De esta forma, pudo anticipar, en cierta medida, soluciones alternativas de urgencia, siempre con el factor on line de común denominador.

La estrategia del país asiático está combinando directrices institucionales más o menos precisas, con altas dosis de improvisación, flexibilidad e inventiva en la práctica. Aúna iniciativas públicas masivas y la colaboración del sector privado, que ha hecho –por el momento– de la gratuidad su bandera. En parte por solidaridad, en parte porque este sector ve en el coronavirus un regalo del cielo para publicitar y expandir un negocio ya en auge.

Una inmensa “clase nacional de internet en la nube”, según la denominación oficial, constituye el eje del proyecto estatal para que el aprendizaje no pare. Nació el 17 de febrero erigida sobre 7.000 servidores que pueden soportar la concurrencia de hasta 50 millones de alumnos. Cubre 12 asignaturas para todos los cursos de la enseñanza obligatoria.

El titán telemático es una especie de sucedáneo presencial. Un ejército docente elegido para la causa graba y cuelga sus lecciones desde casa. Donde la banda ancha no llega, los alumnos pueden visionar las sesiones por televisión. No se pretende cubrir todo el currículum nacional. Simplemente, salir al paso en espera de acontecimientos.

De forma paralela, cada territorio con entidad administrativa propia –provincias, megalópolis, regiones autónomas...– ha puesto en marcha iniciativas específicas. Shanghái lanzó el 2 de marzo un “horario de enseñanza unificado” para Primaria y Secundaria. Más de mil profesores imparten clases en directo mediante plataformas como DingTalk (del Grupo Alibaba) o Zoom.

A nivel escolar, cada centro y cada docente se afanan en simular normalidad. Avalancha de deberes por email, videoconferencias personales y grupales, infinidad de recursos web... Todo para que el ritmo no se detenga. Hay quien apunta que el Covid-19 está provocando un efecto inesperado: disparar la creatividad en una cultura pedagógica bastante rígida y de corte esencialmente transmisivo.

Mientras el sector público muta para atravesar el trance, las empresas chinas de EdTech siembran en un campo de obligado barbecho con la esperanza de recolectar, en un futuro próximo, la cosecha de sus vidas. Tan cierto es que han arrimado el hombro declarando el todo gratis, como que el coronavirus se ha encarnado en el director creativo de una campaña de publicidad soñada. En un momento de pánico bursátil, las acciones de TAL Education (líder chino de EdTech), que cotiza en Wall Street, subieron un 20% en el primer mes y medio de 2020. Aunque, desde entonces, las intrincadas dinámicas de la especulación han hecho caer su valor hasta niveles anteriores.

Academias en quiebra

La cara triste de la moneda viene ejemplificada por el azote del virus sobre la tupida red de academias que prestan apoyo escolar. Un sector al que en China une un vínculo casi orgánico con la enseñanza reglada, sobre todo a medida que los estudiantes van pasando cursos y se acercan al examen de acceso a la universidad, el temido *gaokao*. Muchas academias están en quiebra; las que sobreviven, confían en salir reforzadas en época de perversa selección natural.

El gigante asiático ha logrado que la rueda educativa siga girando. No escasean los palos que han ralentizado la efectividad de los formatos interactivos. Caída de servidores, conexiones inestables, interminables registros en aplicaciones... Amén de los escollos personales que cada alumno y profesor encuentra en esta reconversión forzosa.

En cuanto al impacto del cerrojo sobre la dimensión socializadora de la escuela, mejor ni hablar. Los alumnos, como el resto de la población, han tenido que conformarse con seguir las recomendaciones del gobierno para aliviar el estrés: llorar mucho e idear artilugios caseros que sirvan como *punching ball*.

La comunidad educativa pide claridad y garantías sanitarias en la vuelta a clase

La comunidad educativa demanda del Gobierno medidas claras y precisas, además de garantías sanitarias, tanto para volver a las aulas como para terminar este curso e iniciar el siguiente. Además, reclama que se prime la conciliación durante y después de la desescalada.

REDACCIÓN Miércoles, 29 de abril de 2020

Tras anunciar que el curso escolar ha terminado presencialmente, el Gobierno ha establecido unas excepciones que permitirán volver a las aulas, voluntariamente y en la segunda fase del plan de desescalada, a los menores de 6 años, si ambos progenitores tienen que volver al trabajo, a los alumnos de 4º de ESO y 2º de Bachillerato, a los de Educación Especial y a los más vulnerables, entre otros.

Los padres y madres de Ceapa han pedido coordinación de todas las comunidades y que se amplíe a Primaria y Secundaria el regreso a las aulas previo a septiembre si las condiciones sanitarias lo permiten, así como actividades gratuitas para las familias que así lo soliciten dentro o fuera de los centros. "Será necesario facilitar medidas de conciliación pensando en todo el alumnado. Y aunque en Secundaria gozan de mayor autonomía, hay que tener en cuenta que los menores de 12 a 14 también necesitan estar atendidos mientras su familia trabaja", ha asegurado la Ceapa.

Una opinión que comparte el presidente de la Concapa, Pedro José Caballero, quien ha reivindicado clases presenciales "para todos o para ninguno". En declaraciones a Efe, Caballero ha aplaudido que se haya terminado con la incertidumbre de las familias al dar por concluido el curso, pero ha reclamado medidas "más claras y precisas" y que los que vuelvan a clase lo hagan con "todas las garantías".

Una vuelta a clase que no ve tan fácil el FSIE, el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada y privada por la dificultad que supone para los trabajadores mantener la distancia de seguridad con alumnos menores de 6 años "o conseguir que puedan protegerse adecuadamente". En este sentido, el FSIE opina que "los centros educativos no son la solución al problema de la necesaria conciliación familiar y laboral" y subraya que el regreso voluntario y en grupos reducidos de 15 alumnos en los cursos de finales de etapa dificultará que los docentes puedan compatibilizar la atención a estos estudiantes con los que prefieren seguir online.

En esta línea se ha expresado el sindicato de docentes STEs, que, tras valorar muy "negativamente" las medidas del Ejecutivo, considera que con las actuales plantillas es imposible conjugar la atención presencial con la telemática. Además, critica que la Educación Infantil se considere como "simple guardería" y pide que antes de volver a clase se desinfecten a diario todas las dependencias, se provea de equipos de protección individual tanto al alumnado como al profesorado y que se contraten nuevos docentes para atender la docencia presencial.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no ha aclarado ninguna de estas dudas de la comunidad educativa y se ha limitado a señalar que la concreción sobre las medidas se establecerá en las distintas órdenes que se irán dictando, según avancen las fases de la desescalada. Pero ha subrayado que "todos los mecanismos que faciliten la conciliación y den respuesta a estas cuestiones serán recogidos y tenidos en cuenta por el Gobierno", que, ha dicho, "tiene una especial sensibilidad por esta materia".

A juicio del Sector de Enseñanza de FeSP-UGT, las medidas anunciadas generan más dudas que certezas y ha propuesto la realización de pruebas diagnósticas PCR a los trabajadores que desempeñen actividades en los centros. CCOO considera imprescindible abrir un debate para "redefinir los nuevos espacios y tiempos escolares, tal y como ha puesto de manifiesto la pandemia".

Ante esta situación, CSIF reclama un plan preventivo y actuaciones comunes en todas las comunidades para preparar la vuelta presencial a las aulas y pide que no se cuente con el personal de riesgo de los centros. Demanda también CSIF que la ratio máxima por aula sea de 12 alumnos, que haya entradas y salidas escalonadas o por turnos, una separación mínima de dos metros entre docentes y alumnado y gel hidroalcohólico y material de protección en lugares estratégicos del centro.

Por su parte, la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae), que valora positivamente la vuelta gradual a las aulas en este tercer trimestre, pide más información sobre criterios sanitarios o cuestiones como el traslado de los alumnos, la apertura del comedor escolar o restricciones de espacios.

“EL DIARIO de la EDUCACIÓN

El BOE publica los cambios en la EVAU y el acuerdo sobre el tercer trimestre

La EVAU ofrecerá más optatividad para que chicas y chicos puedan sacar la mejor nota posible.

Las CCAA que no apoyan el acuerdo de final de curso son Andalucía, Madrid, Murcia, Castilla y León y País Vasco. En cualquier momento pueden cambiar de opinión y el texto será para ellas de obligado cumplimiento.

Redacción 24/04/2020

En realidad, lo publicado en el Boletín Oficial del Estado en relación a la evaluación de Bachillerato, conducente a la Universidad (EVAU) era ya conocido a estas alturas. La ministra Isabel Celaá ya había insistido en la idea fuerza de que el alumnado tuviera una mayor capacidad de elección de las preguntas que deseara contestar para así favorecer que alcance los mejores resultados posibles dadas las circunstancias en las que se ha desarrollado el último trimestre del año. Y así ha sido, o así aparece redactado en el BOE de ayer.

La modificación más importante tiene que ver con el hecho de que el alumnado tendrá que responder, a su elección, a un número determinado de preguntas que establecerá cada Comunidad. La idea es que “permita a todos los alumnos alcanzar la máxima puntuación en la prueba”, independientemente de las circunstancias en las que ha pasado cada cual los últimos meses del curso. “Para realizar el máximo de preguntas fijadas todas las preguntas deberán ser susceptibles de ser elegidas”.

También cambia la extensión de las pruebas. En la Orden de febrero, modificada por esta, se especifica que cada prueba tendrá un mínimo de 2 preguntas y un máximo de 15. en la EVAU de este año, habrá un único examen por prueba que constará de varias preguntas, sin especificar cuántas.

El artículo 8 de la Orden es el que establece el contenido de las pruebas. En la Orden de modificación se insiste en la idea de la optatividad a la que tienen derecho los y las estudiantes. E introduce la idea de que, a la hora de elaborar las pruebas, “se procurará considerar al menos un elemento curricular de cada uno de los bloques de contenido, o agrupaciones de estos, que figuran” en una matriz en el anexo de la orden original”.

Final de curso

Igualmente, esta mañana se ha publicado la Orden que recoge el acuerdo alcanzado en la pasada Conferencia Sectorial y al que solo están sujetas las comunidades que se adhirieron a él. Como se conoció a las horas de terminada la reunión entre Ministerio y CCAA, algunas anunciaron que no seguirían los pasos propuestos por el Departamento de Celaá, a pesar de lo cual sus instrucciones propias no difieran de las del Gobierno central.

Las medidas de la orden también fueron someramente anunciadas por la ministra hace unos días en comparecencia ante la prensa. Cuestiones como la identificación del alumnado que esté desconectado, el esfuerzo para que pueda proseguir con sus aprendizajes o la adaptación de contenidos y metodologías a la situación actual aparecen de forma más detallada en la Orden ministerial.

Orden que también fija que se haga especial hincapié en el refuerzo y repaso de los contenidos que pudieron enseñarse en las aulas hasta marzo. También que se haga el esfuerzo de diseño de actividades globalizadoras que promuevan el trabajo en equipo entre docentes de diferentes materias cuando sea posible.

El texto también habla de otras formas de evaluación, como la coevaluación y la autoevaluación del alumnado. Insiste en que la evaluación, como marca ya la ley actual y sus precedentes, ha de ser continua para este último trimestre «y acentuará su carácter diagnóstico y formativo en todas las etapas».

Afirma el texto que se habrá de hacer un informe final individualizado en el que se incluyan los aprendizajes conseguidos, así como las carencias y, finalmente, planes de recuperación de aquellos.

Próximo curso

Las administraciones que se han adherido al acuerdo tendrán que elaborar planes de recuperación y adaptación curricular para el inicio del curso próximo. Dichos planes deberán tener en cuenta los informes individualizados de cada alumno al finalizar el presente curso.

Ministerio y consejerías de Educación trabajarán en la elaboración de planes de contingencia ante la posibilidad de que el curso vuelva a verse interrumpido por el COVID19, al tiempo que se formará un grupo de expertos que analice lo aprendido estas semanas y meses y que así puedan hacer recomendaciones «para la transición a la escuela digital y para estar en las mejores condiciones ante situaciones similares».

Evaluación

Las administraciones autonómicas estarán legitimadas, gracias a la Orden ministerial, a modificar los criterios de evaluación «renunciando», dice el texto, «a un cumplimiento exhaustivo de los mismos y valorando especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles» para continuar el aprendizaje

Con estos criterios de evaluación en la mesa, de carácter diagnóstico y formativo, especifica el documento, será posible la modificación de las programaciones didácticas del curso 20-21 para que se incorpore lo que no se haya podido avanzar en estos meses finales.

La Orden marca toda una serie más de directrices tanto para la primaria como para la secundaria obligatoria o el bachillerato y la formación profesional en relación a los aprendizajes, adaptaciones, evaluación, promoción de curso así como titulación en los últimos cursos de cada etapa educativa.

Lecciones educativas desde una Europa confinada

Los principales países europeos han apostado, con matices, por la promoción automática. Las autoridades hacen equilibrismo para declarar la manga ancha sin que los alumnos den carpetazo al curso. Mientras, los profesores atienden (a veces) las directrices o escuchan (otras) a su sentido común. En Alemania ya han reabierto muchas escuelas; en Francia, el 11 de mayo es la fecha clave; en Italia, la mayoría fija el retorno para el próximo septiemb

Rodrigo Santodomingo. 27/04/2020

Un gran laboratorio sobre cómo enseñar cuando la escuela ya no es un lugar físico. Secuencia interminable ensayo-error, con órdenes oficiales y altas dosis de autonomía. El aula virtual europea va encontrando respuestas al mismo ritmo que genera interrogantes. Los principales países del continente han activado protocolos de urgencia para que la educación no sucumba al cerrojo escolar. Las profesoras contactadas para este reportaje albergan mil dudas, aunque tienen algo claro: enseñar a distancia multiplica la carga de trabajo.

Como en España, se respira una atmósfera espesa en la que la confusión sobre cómo evaluar desdibuja los contornos. La brecha digital impide penalizar a los ausentes, esos “alumnos fantasma”, dice una docente alemana, hayan desaparecido estos por voluntad propia o debido a la falta de conexión.

Pero sin palo, sigue habiendo zanahoria. Así que Francia, Alemania -o la mayoría de sus estados federados- e Italia han optado por recomendar que el trabajo **online** cuente en las notas, mas solo en favor del estudiante. En cuanto a la promoción, Italia y Alemania apuestan por el aprobado general (salvo en los cursos clave). Francia aún se debate sobre qué hacer, si bien, por ahora, aconseja benevolencia.

Los diferentes niveles de rigor en el confinamiento marcan el posible retorno a las aulas. En los tres casos, la prioridad son los chavales que están cerca de obtener un título oficial. Sobre todo el de Bachillerato, equivalente (con matices) a nuestra EVAU, al menos en su función de salvoconducto para acceder a la universidad.

Varios **länder** (estados federados) alemanes ya han reabierto sus centros, por ahora focalizados en los exámenes Abitur. La reapertura en Francia está prevista para el 11 de mayo, aunque las pruebas del Bac quedaron canceladas hace semanas, con excepción de una pequeña parte oral. Italia se resiste a dar por finalizadas las clases presenciales, y mantiene la posibilidad de volver al aula -más como hipótesis lejana- a partir de mediados del próximo mes. La forma y contenido de su Maturité quedan a expensas de la decisión final.

Francia: ¿el centralismo mató al Bac?

En el pico de la pandemia, las autoridades galas tomaron una drástica decisión, para muchos apresurada: suprimir este curso los exámenes del Bac y otros títulos oficiales como el Brévet. La mayoría interpretó que, al no poder garantizarlos en todo el país, ni su adecuada preparación entre los alumnos, el Gobierno había optado -en un alarde de igualitarismo centralista- por la cancelación total. En las calificaciones, la evaluación continua se erige este curso como máximo criterio.

Profesora de Biología y Geología en un **lycée** de Cusset (centro de Francia), Marie Laure Montel va más allá y observa motivos estructurales de más amplio recorrido: “El ministro [Jean-Michel Blanquer] ya había anunciado su intención de suprimirlos el próximo curso, y el confinamiento le ha permitido adelantar la medida a modo de prueba, en su camino hacia una reforma del modelo francés inspirada en los países anglosajones. Los exámenes nacionales -que gozan de gran consideración entre los docentes- se podrían haber hecho, quizá más tarde y gastando algo más de dinero. Ha sido una decisión política”.

La parte oral del Bac aún vigente se hará, en principio, de manera presencial. Otra novedad es que, dadas las restricciones de movilidad, los profesores evaluarán a sus propios alumnos, cuando normalmente estos se desplazan a **lycées** de otra regiones para asegurar la imparcialidad. Francesa de origen ecuatoriano, profesora de Español en Saintes (oeste de Francia), Carolina Sión alberga serias dudas sobre la reactivación de la vida escolar este curso. “Voy a proponerle a mi director hacer los exámenes por Skype. Antes de que podamos volver a los centros, tienen que existir las condiciones necesarias: distancia de seguridad, mascarillas, test... Sin esas condiciones, difíciles de alcanzar, la gran mayoría de profesores, en mi centro y me atrevo a decir que en toda Francia, no vamos a ir a trabajar”.

Surtido tecnológico a gusto del profesor y amplia libertad de acción acompañan la toma de decisiones. Y arrojan luz sobre las zonas de sombra que oscurecen la conversión forzosa hacia la enseñanza a distancia. Por

ejemplo, se han de valorar -siempre en sentido positivo- las tareas que realice el alumno durante el confinamiento. Pero al volver al aula, no podrá ser examinado sobre lo aprendido. Los docentes también deben tener en cuenta, explica Sión, la asistencia, si bien nadie les ha explicado cómo pasar lista a través de la fibra óptica. Mientras, sobrevuela la incógnita en cuanto a la repetición. “Sabemos que en verano se van a generalizar talleres de recuperación a escala masiva en todos los centros”, añade Sión. Quizá una pista de que repetir este curso será, con toda probabilidad, absolutamente excepcional.

Montel se considera afortunada de contar con alumnos “autónomos y acostumbrados a las herramientas digitales”. Explica que son ellos mismos los que se han organizado en grupos de discusión para que el aprendizaje no pare. Ella se ha limitado a dejarse llevar por la iniciativa de sus pupilos.

Sión se declara neófita en artilugios y aplicaciones, aunque se las ha apañado (**e-mail**, WhatsApp, plataforma del Ministerio...) para subirse al carro de la “continuidad pedagógica”. Objetivo top oficial para el que las autoridades certifican un éxito del 95% de estudiantes. “En esa cifra”, se queja, “se incluye a todos los alumnos con los que el profesor ha podido contactar en algún momento, aunque haya sido una sola vez. Es un éxito ficticio”. Sión resume sus cinco semanas de enseñanza virtual: “Agotadoras”.

Alemania: diversidad federal con el virus a raya

Las jornadas maratónicas proliferan también al otro lado del Rín. Profesora de Lengua y Francés en un **gymnasium** (instituto académico) de Bonn, Ilona Levitin, define el confinamiento docente en términos casi hercúleos. Cuando logra aligerar de tareas por corregir la plataforma que utiliza, vuelve a entrar en ella para encontrarse en el punto de partida. Sin apenas problemas de conectividad, casi todos sus alumnos están cumpliendo a rajatabla.

Otros centros saltan la brecha digital como buenamente pueden. Levitin narra una de esas bellas historias que nos está regalando la pandemia: “Conozco muchos colegas en la ciudad, sobre todo de primaria, que cada día hacen un **tour** en bici para repartir tareas impresas en los buzones de sus alumnos más vulnerables, la mayoría de familias inmigrantes en las que se unen pobreza y grandes dificultades con el alemán”. Algo solo posible en un país que ha optado por una cuarentena **light**.

Levitin enseña en el estado federado (**länder**) de Renania del Norte-Westfalia, uno de los primeros en reabrir las aulas. Su **gymnasium** acoge alumnos desde el jueves 23, empezando por aquellos a punto de someterse al Abitur. Las asignaturas se concentran en largas sesiones de hasta tres horas con un máximo de 15 alumnos por clase. “Está muy bien organizado, con una incorporación progresiva y excluyendo por el momento a profesores y estudiantes que sean población de riesgo”, afirma Levitin. El estado de Hesse, incluso, realizó los exámenes finales semanas atrás, en el punto álgido de la crisis. Para el 4 de mayo, todos los **länder** tendrán escuelas funcionando.

Berlín (que administrativamente funciona como estado) examina alumnos desde el lunes 20. Rafael Hormann, estudiante de último curso de humanidades en un instituto de la capital, dice haber sido “capaz de ignorar la incertidumbre” la mayor parte del tiempo. Aunque reconoce que no siempre ha resultado fácil sustraerse a los rumores. “Al final me tuve que preguntar si estudiaba solo para el examen o porque aprender es bueno para mí y para mi futuro. En la respuesta encontré una importante fuente de motivación”, añade. Hormann explica que las autoridades han priorizado el retorno de alumnos de más edad no solo por cuestiones académicas. “En teoría somos más maduros y nos comportaremos con precaución. Habrá que verlo”, asegura escéptico.

Alemania no ha sido inmune a las directrices confusas llegadas desde arriba. En Renania del Norte-Westfalia, la autoridades indicaron primero que no se avanzara en los currículos y que el aprendizaje a distancia no afectaría a la nota. Después de Semana Santa, dijeron que sí se debía proseguir con el temario y que el esfuerzo del alumnado tendría recompensa numérica.

Levitin reconoce que su director hizo al principio caso omiso de la visión oficial: “Hemos seguido con los programas, nunca hemos parado”. En todo caso, explica, los docentes solo pueden enviar a sus alumnos “propuestas de aprendizaje” voluntarias, aunque, al retornar a las aulas, estas se considerarán contenidos ya vistos. Todo un “sinsentido”, en su opinión. Más duros, otros estados como Sajonia o Bavaria se han decantado por las clases virtuales obligatorias. Concepto relativo en tiempos de promoción automática.

Italia: la utopía de volver

La posibilidad de que algunos alumnos italianos retomen las clases presenciales entre el 14 y el 18 de mayo sigue encima de la mesa. Pero pocos en el país transalpino lo ven factible. Buena parte de la comunidad educativa da por sentado que las escuelas no reabrirán hasta después del verano. El aprobado general - decretado para pasar de curso, aunque no para obtener títulos oficiales- permite adivinar un primer trimestre 2020-21 del todo excepcional. Una mezcla de pretemporada escolar y lenta transición hacia la normalidad.

“El reto es enorme. Hay varias posibilidades, nadie sabe exactamente qué ocurrirá”, comenta Lorenzo Benussi, de la Fondazione per la Scuola, muy activa en proyectos de innovación e inclusión educativa. Benussi se arma de optimismo y atisba un campo de oportunidades: “Como seguramente habrá que guardar la distancia seguridad, sería buena idea dividir clases y repartir alumnos en otros espacios públicos como museos,

bibliotecas o incluso parques, lo que llevaría a la práctica radical de esa vieja aspiración de derribar los muros del aula y la escuela”.

Antes de que finalice el curso, la gran cuestión pendiente es el formato de la Maturité. Si los centros no levantan el cerrojo, la prueba será oral a través de una plataforma digital aún por decidir. Mil dudas giran en torno a la opción **online**. ¿Resulta viable hacer un examen de Matemáticas a viva voz? ¿Quién vigila que los chavales no copien? Benussi no conoce las respuestas, pero se muestra convencido de que, más allá de asuntos coyunturales, el momento es propicio para “repensar conceptos y realizar inversiones (de equipamiento, de formación) que no sólo sirvan para salir al paso de esta crisis, sino que abran el camino hacia un cambio pedagógico profundo”. El virus, sostiene, ha destapado las muchas limitaciones de la escuela tradicional.

El miércoles termina el plazo de enmiendas para la tramitación de la LOMLOE

El pasado 7 de abril, la oposición de PP y Ciudadanos consiguió que el Congreso retomara la actividad en mitad del estado de alarma. Esta decisión supuso la reanudación de todas las comisiones, entre ellas, la de Educación.

La reactivación del trámite parlamentario de la LOMLOE es criticado con dureza por las organizaciones de la concertada y de la educación especial (Inclusiva sí, especial también).

Redacción - Diario de la Educación. 27/04/2020

En medio de fuertes críticas por la falta de control al Gobierno durante el estado de alarma, la oposición exigió la reanudación de la actividad parlamentaria. Además de que se empezasen a celebrar plenos desde mediados de abril, esta reanudación ha supuesto la reactivación de las comisiones parlamentarias, entre ellas, la de Educación que debía comenzar con la tramitación de la LOMLOE.

Fuentes del Ministerio confirman la presentación de las enmiendas a la totalidad tanto de PP como de Ciudadanos. También VOX presentó su propia enmienda a la totalidad.

A pesar de lo declarado a finales de 2018 por parte del PP, la enmienda a la totalidad no ha ido acompañada de un texto alternativo a la ley. Aducen desde el partido liderado por Pablo Casado que «en aras a alcanzar el máximo acuerdo» y «ante el momento tan dramático que el conjunto de la población española está viviendo» renuncian a presentarlo.

Desde el PSOE, Luz Martínez Seijo, portavoz en la Comisión de Educación, recuerda que fue la insistencia del PP y de C's la que condujo a la reanudación con normalidad del curso parlamentario, no solo para el control del Gobierno, sino también para la tramitación tanto de esta como de otras leyes que estaban pendientes. También critica que desde la oposición no se haya trabajado en la redacción de un texto alternativo, como se anunció, puesto que la LOMLOE, en su texto actual, se conoce desde febrero de 2019.

Entre las razones que los tres partidos enumeran para presentar sus enmiendas a la totalidad cabría destacar el freno a la libertad de elección de centro por parte de las familias, el ataque a la escuela concertada, a los centros segregados, a la falta de evaluación en las diferentes etapas educativas, el escaso apoyo al castellano en las comunidades con lengua propia o la renuncia a una revisión de la Alta Inspección del Estado.

De momento se desconoce cuándo se reunirá la Comisión de Educación para comenzar la tramitación de la ley así como la negociación, que promete ser compleja, entre los partidos que componen el Ejecutivo, así como Esquerra Republicana o PNV, necesarios ambos para poder llevar a cabo el cambio de ley acordado en su día por la oposición en bloque al Gobierno de Mariano Rajoy.

Organizaciones como Inclusiva sí, Especial también (en defensa de los centros de educación especial) han denunciado como un aprovechamiento del estado de alarma por parte de los partidos del Gobierno para tramitar dicha ley, mientras que la plataforma que agrupa a la escuela concertada, en la que se reúnen las patronales Escuelas Católicas y CECE, así como CONCAPA (organización de familias) y los sindicatos FSIE y FEUSO han lanzado un comunicado de prensa exigiendo que se paralice hasta que termine el estado de alarma.

Luz Martínez Seijo asegura que no puede pararse o ponerse en marcha el trámite de una ley en el Congreso según convenga a unos partidos u organizaciones. También recuerda que el texto es conocido desde comienzos de 2019 y ha habido tiempo para trabajar sobre él. Según la portavoz parlamentaria, durante las últimas semanas ha estado recibiendo aportaciones de diferentes organizaciones sociales para que fueran tomadas en cuenta durante el trámite de la ley. Ahora le toca al turno a los partidos políticos.

Disposición adicional cuarta

Este es uno de los escollos más importantes, al menos, para las organizaciones que defienden la continuidad de los centros de educación especial tal como hasta ahora. Desde el punto de vista de Inclusiva sí, especial también, esta disposición supone el cierre de facto de estos centros en el plazo de diez años desde la aprobación de la ley.

Lo que dice la disposición adicional cuarta es que en esa década, las administraciones desarrollarán un plan para que los centros ordinarios «cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad».

También establece que los centros de educación especial, durante este tiempo, además «de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios».

Martínez Seijo asegura que en su momento ya se reunió con representantes de Inclusiva sí, especial también para tratar sobre este punto y que, de hecho, se recogieron algunas de las peticiones hasta llegar al redactado actual. Entiende la parlamentaria que nadie ha hablado de cierre de centros e, incluso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró públicamente que no los habría.

Para la parlamentaria se ha hecho una lectura tergiversada del contenido de la disposición en cuestión, al tiempo que el PP ha manipulado políticamente a familias y organizaciones con este tema.

Cataluña cambia los horarios escolares para acercarse al modelo europeo

El tiempo del mediodía de infantil y primaria en los centros públicos será de 12 a 14 horas, en vez de la actual franja de 12.30 a 15 horas. Esto permitirá que el horario lectivo pueda terminar a las 16 horas, si bien hasta las 18 horas los centros permanecerán abiertos. En secundaria no hay cambios, a excepción de los institutos escuela, cuyo horario se asimila a la primaria.

Víctor Saura. 30/04/2020

La Orden del Departamento por la que se establece el calendario escolar del curso 2020/21 incluye varias novedades que no son tanto de calendario como de horario escolar. Si todo va bien -si los procesos de preinscripción y matrícula lo permiten el curso comenzará el 14 de septiembre y acabará el 22 de junio (a excepción de los ciclos de grado superior y las escuelas de adultos, que comenzarán el 21 de septiembre). De todos modos, la orden deja la puerta abierta para que, por circunstancias concretas de organización, algún centro tarde una semana más en abrir las puertas. El miércoles pasado esta instrucción obtuvo el visto bueno del Consejo Escolar de Cataluña, a pesar de la oposición de los representantes de Fapac y Ustec.

Los cambios en el horario alinean con las propuestas que los últimos tiempos han lanzado tanto el Pacto por la Reforma Horaria, la Fundación Bofill, la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica o el mismo Consejo. No completamente, entre otras razones, porque todas estas propuestas subrayan la necesidad de modificar el horario de los institutos (básicamente, las jornadas de 8 de la mañana a 3 de la tarde, con 6 horas lectivas y dos recreos de 30 minutos), mientras que las novedades respecto al próximo curso se centran en infantil y primaria. Todas estas propuestas abogan por reintroducir la comida en los institutos pero, al menos de cara al próximo curso, esto no sucederá. La orden establece que todos los institutos que hacen jornada continua (que son la mayoría) lo pueden seguir haciendo o pueden volver al horario de mañana y tarde.

En cambio, en cuanto a infantil y primaria, el primer cambio importante es que el horario de comedor se acorta y se adelanta media hora. En vez de ser de dos horas y media, pasa a ser de dos horas, y en vez de empezar a las 12.30 lo hace a las 12h. Por lo tanto, de 12h a 14h -definida como «la franja horaria saludable»- es el tiempo que tendrán los alumnos que comen en casa para ir y volver. No se contemplan excepciones, sólo en el caso de los institutos escuela apunta que si el servicio de comedor de un centro necesita más tiempo para servir todas las comidas se podrá organizar un turno que comience a las 14h.

Como consecuencia de esta reorganización llega la segunda novedad, y es que las escuelas tendrán la posibilidad de terminar el horario lectivo a las 16 horas (actualmente, la mayor parte lo hacen a las 16.30h). Los centros, sin embargo, permanecerán abiertos hasta las 18 horas. En este horario escolar no lectivo se podrán programar las actividades extraescolares, si bien todos los centros deberán prever un mínimo de dos días por semana para actividades de «apoyo personalizado a los alumnos que lo requieran».

¿Adiós al plan piloto sobre jornada continuada en primaria?

La orden también concreta las intenciones del Departamento de Educación con respecto al grupo de escuelas que desde el año 2012 forman parte de un plan piloto de jornada continuada en la primaria. La orden contiene una disposición transitoria en la que les da un año más para continuar con este horario, pero les anuncia que el curso 2021-22 deberán ajustarse a la norma según la cual el horario lectivo «no puede acabar antes de las 16 horas». A comienzos de marzo -semanas antes del confinamiento- la Plataforma Queremos Jornada Continua en Cataluña, formada por familias y docentes de estos y otros centros, solicitó al Parlamento el inicio de la tramitación de una ILP que garantizara esta jornada continua a quien lo deseara. Lógicamente, la recogida de firmas de esta ILP está parada debido al confinamiento, pero es muy posible que sin este no hubiera habido ninguna disposición transitoria.

Ustec mostró el miércoles, a través de un comunicado, su oposición a varios puntos del orden, pero muy especialmente en esta disposición transitoria, ya que «no tiene carácter pedagógico sino ideológico». El sindicato de docentes acusa a la Administración de esconder la evaluación que se ha hecho sobre este plan piloto, porque «más bien da la razón a aquellos centros que utilizan la jornada continua como una organización

inteligente del tiempo escolar «, y propuso (sin éxito) que la disposición transitoria dijera lo contrario, es decir, que todas las escuelas que se quisieran apuntar al plan piloto lo pudieran solicitar.

El horario de los institutos escuela, más de escuela que de instituto

La última novedad destacable es que se establece un horario específico para los institutos escuela (actualmente hay medio centenar y el próximo curso se prevén una treintena más). En este caso, la jornada será más parecida a la de las escuelas que a la de los institutos, ya que será partida, también con la «franja saludable» de 12h a 14h para la comida, mientras que la hora de salida del centro ha de ser la misma para todo el alumnado. Este es uno de los principales puntos de fricción con Ustec, ya que en este caso el profesorado de secundaria está obligado a dar clase por la tarde. El orden prevé también que una tarde a la semana la actividad no sea lectiva (sino deportiva, lúdica, cultural...) a fin de que todo el profesorado del centro disponga de un espacio común para coordinarse, y este es otro punto que el sindicato no ve claro.

Sólo los institutos escuela que proceden de la fusión entre un instituto y una escuela tendrán un año para adaptarse a este horario único pero, sea como sea, deberán ofrecer servicio de comedor.

Aparte de eso, en su comunicado Ustec también pide que el personal destinado al apoyo educativo personalizado a los centros de primaria se integre dentro del horario lectivo para reforzar la acción tutorial y la posibilidad de desdoblamiento de grupos, y que «de acuerdo con las recomendaciones del propio Consejo Escolar, y con el fin de evitar una sobrecarga de horario lectivo al alumnado (que en secundaria implica tener más horas lectivas que cualquier otro país europeo) es necesario plantear la reducción de las sesiones de clase, de 60 a 50 minutos».

ESCUELA

17 sistemas de evaluación EDITORIAL

Las repeticiones serán excepcionales, pero ante las 17 comunidades autónomas, tenemos 17 sistemas para evaluar, aunque la decisión final recaiga en los docentes. Las instrucciones desde el Gobierno han sido claras porque la repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno y que los criterios de evaluación se ajustarán en cada una de las enseñanzas, de modo que la decisión de promoción o titulación tenga en cuenta las dificultades motivadas por la situación excepcional provocada por la pandemia.

Es decir, que si los alumnos han tenido dificultades para seguir la docencia, poniendo el foco en las familias con dificultades de acceso a los contenidos digitales, el evaluador lo tendrá en cuenta y valorará el esfuerzo que han realizado con los medios disponibles, porque el sistema ha dejado atrás a numerosos estudiantes, por la falta de ordenadores y conexión a internet.

Asimismo, los docentes también han puesto el foco, por su parte, en la incertidumbre que han tenido a la hora de impartir sus materias, en las que denuncian una falta de pautas para su evaluación. Y todo esto, ha dependido de cada comunidad autónoma. Cada región, un mundo distinto.

La repetición que se está planteando ya se plasma en la normativa como una situación excepcional y se deben tomar las medidas oportunas para que así sea. Y es que, si se aplica la ley actual, la LOMCE, en su sentido más estricto, puede provocar que más alumnos repitan curso este año, sobre todo, los que tienen dificultades de acceso a la docencia a distancia y/o alumnos con necesidades especiales.

Save the Children recuerda que la repetición ya es una medida excepcional en la ley, «aunque no en la realidad» y que en algunas autonomías más de un tercio del alumnado ha repetido a los 15 años, según datos tanto del Ministerio de Educación y Formación Profesional como del informe PISA.

Repetir significa que volverá otro año a la misma clase, a dar los mismos contenidos, examinado por los mismos profesores... «Es una estrategia cara, ineficaz y estigmatizante», según indica Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE.

Por ello, actuar con diligencia es la mejor opción, para no dejar atrás a ningún alumno. Dedicarles recursos **extra** con tutorías y clases de refuerzo. Hay que invertir antes y a tiempo para que la escuela ofrezca igualdad de oportunidades para todos.

No habrá «vuelta al cole» hasta septiembre

Mar Lupión

Vivimos tiempos de incertidumbre, pero parece ser que en el ámbito educativo ya tenemos una certeza: los alumnos no volverán a las aulas hasta septiembre, salvo en casos concretos. De momento, no hay fecha exacta para ese regreso de algunos a los centros educativos, solo se sabe que tendrá lugar en la llamada «Fase 2». Una etapa en la que entrarían las provincias que cumplan con los requisitos a partir del 25 de mayo.

El anuncio lo ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto con su plan de desescalada tras el confinamiento: «las clases vuelven en septiembre salvo algunas excepciones para reabrir centros educativos con tres propósitos: actividades de refuerzo, garantizar que los niños menores de seis años puedan acudir a los centros en el caso de que ambos padres tengan que trabajar presencialmente y, lógicamente, para celebrar la

EVAU». Un intento de favorecer la conciliación familiar porque, como el propio Sánchez reconoce «mientras no haya una vuelta a la normalidad en lo económico, en lo laboral, es evidente que va a haber problemas de conciliación. Habrá casos en los que padres y madres vayan a trabajar y no tengan la capacidad de dejar a sus hijos con alguien. Con los abuelos no pueden porque es un colectivo de riesgo».

El Ministerio de Educación ha sido más específico acerca de a qué alumnos afecta esta excepción avanzada por el presidente del Gobierno. Existen tres supuestos que podrán aplicarse a partir de que se entre en la Fase 2: estudiantes de Infantil menores de 6 años cuyos padres tengan que acudir a sus lugares de trabajo; estudiantes especialmente vulnerables de Primaria que necesitan refuerzo y, de manera voluntaria, todos aquellos alumnos de cursos «terminales» (2º de Bachillerato, 4º de la ESO, 2º de FP de grado Medio y Superior y último año de Enseñanzas de régimen especial). Especial atención del gobierno a los alumnos especialmente vulnerables de cualquier curso, que representan en torno al 10-12% del alumnado, según cifras del Ministerio. En estos casos, los profesores serán los encargados de establecer quiénes pueden acudir a los centros. Se trata de una medida que, de acuerdo con Educación, busca prestar apoyo a aquellos estudiantes que no disponen en casa de recursos tecnológicos. Además, se permitirá también la apertura de los centros de Educación Especial, a los que asisten 38.000 niños.

Garantizar la seguridad de alumnos y trabajadores de los centros será la prioridad del gobierno en todo momento, según insisten. Por ello, la reincorporación se hará de acuerdo con protocolos de seguridad recomendados: se les organizará en grupos de 15 estudiantes y tendrán la posibilidad de combinar la docencia presencial con la online. Además, de acuerdo con fuentes del Ministerio, en la Fase 1 se prevé la apertura de colegios e institutos para la desinfección, el acondicionamiento y el trabajo administrativo y preparatorio de docentes y personal auxiliar. Si las condiciones sanitarias se cumplen, la vuelta de los equipos directivos tendría lugar a finales de mayo. En sus manos estará disponer cuántos profesores y de qué cursos han de retomar la actividad presencial.

Un proceso por fases

En resumen, la vuelta a las clases generalizada tendrá lugar tras el verano. Mientras tanto, habrá un retorno parcial y escalonado que se estructuraría de la siguiente forma (siempre que las condiciones sanitarias lo permitan):

FASE CERO	A partir del 4 de mayo. Se continuará con la tele docencia como hasta ahora.
FASE UNO	A partir del 11 de mayo. Acondicionamiento de los centros para su desinfección y para que puedan dar comienzo las labores preparatorias de docentes y auxiliares
FASE DOS	Dos semanas más tarde del inicio de la fase uno, si las condiciones lo permiten. Los niños dentro del rango de excepciones (menores de seis años con padres que trabajan, cursos terminales, etc...) podrán volver al colegio para clases de refuerzo y repaso.
FASE TRES	Dos semanas más tarde del inicio de la fase dos, si las condiciones lo permiten. Se continuarán con los programas de refuerzo. Esta programación continuaría durante la bautizada como «nueva normalidad» hasta el inicio del curso próximo.

Las medidas higiénicas, esenciales

Que el regreso a los centros se produjera en septiembre era la apuesta de los 8 especialistas de la Asociación Española de Pediatría que asesoran al gobierno. Una recomendación que se está siguiendo parcialmente, puesto que los expertos sanitarios consideran que es muy complicado garantizar que los alumnos de Infantil, Primaria y primeros cursos de la ESO cumplan con las medidas higiénicas y de distanciamiento social.

Uno de ellos es Quique Bassat, pediatra y epidemiólogo y profesor de investigación ICREA en el Instituto de Salud Global de Barcelona. En declaraciones a la prensa, Bassat ha expresado su preocupación puesto que considera que el Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez no está siendo todo lo prudente que debería con la reapertura de los centros, aunque el objetivo sea la conciliación: «si la salida del domingo en algunos casos no fue muy prudente, nos estamos precipitando innecesariamente. Pero lo sabremos pronto: todo lo que hagamos mal ahora lo veremos en dos semanas», insiste.

Defiende que la vuelta a las aulas ha de ser muy escalonada y requiere que, primero, se lleven a cabo pruebas monitorizadas, por edades o por barrios. Reconoce que, ante la ausencia de datos científicos suficientes, las decisiones se están tomando siguiendo un método de ensayo-error. Por ello, destaca la importancia de ser muy cautos y no correr riesgos.

Los sindicatos demandan que se priorice el criterio sanitario

Desde el sector de Enseñanza de FeSP-UGT consideran que lo anunciado genera «más dudas que certezas». Su secretaria, Maribel Loranca, insiste en que «el único criterio que ha de tenerse en cuenta es el sanitario. En estas condiciones, no vale hablar de pedagogía. Hay que preparar a centros y trabajadores con protocolos de prevención».

El sindicato solicita que, antes de la reapertura de los colegios e institutos, son necesarias medidas como la realización de pruebas diagnósticas de PCR a los trabajadores y trabajadoras; el tratamiento individualizado, de cara a la actividad presencial, de las personas especialmente sensibles, como diabéticos, con crónicas, hipertensión, inmunodeficiencia, o personas mayores de 60 años. También, la desinfección previa y periódicas medidas de limpieza general del centro —aulas y el resto de las instalaciones—, y disponibilidad de jabones desinfectantes de uso rápido en todas ellas. Demandan también que se limiten las horas presenciales a las estrictamente necesarias y que se disminuyan las ratios, entre otras propuestas.

La Federación de Educación de CCOO también se ha pronunciado al respecto y ha valorado positivamente la decisión del Gobierno de dar por finalizada la actividad académica presencial hasta septiembre. Eso sí, critican que lo anunciado «tiene más que ver con conciliación que con educación» y hace hincapié en que los colegios e institutos son lugares destinados a educar no a «dejar a los hijos mientras los padres trabajan». Piden que se deje claro «cómo se va a hacer, con qué personal y cuándo será porque si el curso acaba en junio lo lógico es que los profesores no tengan que realizar tareas lectivas, sino que se articulen otras medidas y que no sean de carácter lectivo». Paco García, su secretario general, señala que la vuelta voluntaria de algunos alumnos ha de estar «supeditada a garantizar la seguridad de docentes y estudiantes y tiene que estar negociada con los sindicatos. Habrá que dotar a los profesores de equipos de protección individual y asegurar la distancia social».

Y en septiembre, ¿qué?

Con estas informaciones en la mano, son muchos los que ya miran al mes de la «vuelta al cole»: septiembre. Todo el mundo parece estar de acuerdo en que ha de estar orientado a reforzar aquellos contenidos sobre los que no se ha podido trabajar como es debido por el confinamiento.

Ainara Zubillaga, directora de Educación y Formación de la Fundación Cotec para la Innovación educativa concibe como clave la «reformulación del último trimestre y del curso que viene. Hay que identificar y priorizar aquellos contenidos dirigidos a la adquisición de las competencias básicas de cada etapa». Y hace referencia a una de las reivindicaciones «clásicas» de los sindicatos: la revisión de los currículos. «Un currículo ordinario ya es difícil de cumplir en condiciones normales, cualquier profesor te lo dirá» —advierte— «en condiciones como estas, creo que tendríamos que hacer un ejercicio de reformulación. Esto no significa que vayamos a eliminar aprendizajes fundamentales. Insisto en que es un debate que ya estaba sobre la mesa del Ministerio. Tenemos un currículo extensísimo y esta puede ser la oportunidad de analizarlo y reformularlo para adaptarnos a esa situación excepcional que va a ser el próximo curso». Sobre la duración y la proyección de esos planes de apoyo, Zubillaga alerta de que, a su juicio, «no creo que tengamos que hablar de un plan para los cursos próximos. Lo que creo es que esto no es una fase, sino un nuevo escenario total. Me parecería erróneo que no pensáramos que esta pandemia va a suponer un antes y un después en cómo se entiende el sistema educativo, en cómo se entiende la vida en los centros, en cómo se entienden las clases y la educación en general. No sabemos sanitariamente el futuro que tenemos ni el impacto que esto puede generar en términos educativos. Por tanto, la cuestión no es pensar solo en un curso o dos, sino hacer un planteamiento más ambicioso, plantearnos un escenario que nos permita anticiparnos a situaciones futuras que pueden ser otro brote de la COVID o cualquier circunstancia similar».

En cuanto a la apertura de centros durante el período estival, Zubillaga nos explica que, en el caso de que se pueda hacer, la Fundación Cotec plantea esto como una especie de «escuela de verano» que tendría que tener tres patas: «una lúdica, de ocio. Otra, más vinculada a la parte emocional y psicológica. Hay alumnos que están viviendo situaciones familiares muy complejas con procesos de duelo muy complicados. No podemos devolver a los niños a las aulas sin tener esta variable en cuenta. Luego, evidentemente y dadas las circunstancias, hay que añadir una pata curricular. No quiero decir que tenga que tener el monopolio de la actividad, pero, si no se produce ningún tipo de intervención en el aprendizaje, el refuerzo se queda un poco flojo».

Así funcionarán las repeticiones «excepcionales» de Celaá

Daniel Martín

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha determinado que la promoción de curso sea «la norma general» en todas las etapas educativas y pide a las comunidades autónomas que «no tengan en cuenta las limitaciones que afecten al número de áreas pendientes». El pasado 24 de abril el Gobierno publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden Ministerial que establecía los criterios de promoción o repetición de curso, en un contexto de centros educativos cerrados y carga lectiva a medio gas. Según consta en el BOE, esta Orden «no modifica el ordenamiento jurídico vigente y respeta las competencias de las Comunidades Autónomas». También señala que el texto «recoge los acuerdos adoptados en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación por la mayoría de las CCAA en el ámbito de la educación no universitaria, aunque vinculará igualmente a las Comunidades que decidan adherirse posteriormente». Y precisa que se «ha tenido en cuenta las propuestas efectuadas por el Consejo Escolar del Estado, máximo órgano de participación de la comunidad educativa». Cinco de las regiones españolas discrepan de la decisión de Celaá, aunque por diferentes motivos.

Pero, ¿en qué consistirán exactamente estas repeticiones «excepcionales»?

Repetición excepcional y un tercer trimestre sólo para subir nota

En la Orden Ministerial publicada por el Gobierno en el BOE para dar unas directrices sobre la promoción o repetición de curso, el Ejecutivo insiste en ese concepto de «excepcionalidad» de la repetición de curso que incluirá en la futura nueva ley de educación, la LOMLOE. El departamento que lidera Celaá indica que «para que los estudiantes no pierdan el curso y puedan continuar avanzando en su formación, teniendo en cuenta de manera especial la situación de los más vulnerables, la evaluación será continua, la promoción de curso será la norma general y la titulación debe ser la práctica habitual para aquellos alumnos que finalicen 4º de ESO o 2º de Bachillerato y FP».

El Ministerio señala que esta es «una decisión que, en todo caso, siempre adoptará el conjunto de profesores de cada estudiante, que son quienes lo conocen y podrán evaluar de manera global si ha obtenido los objetivos educativos esenciales de la etapa cursada».

En cuanto al tercer trimestre, y la duda de si contará para nota, el Gobierno ha dejado claro que no contará para bajar la nota. «Tendrá carácter formativo y diagnóstico, para determinar las carencias de cada alumno y aquellos aspectos en los que necesita reforzar conocimientos». «La evaluación global del curso se basará en los dos primeros trimestres en los que la actividad educativa se desarrolló de manera presencial y el tercer trimestre en ningún caso podrá perjudicar al alumno pero sí reconocerá el esfuerzo que haya hecho para obtener mejores resultados», advertía el Ministerio.

Añadía, asimismo, que «el tercer trimestre se centrará en la recuperación, el repaso y el refuerzo con actividades globalizadoras e interdisciplinares y debidamente tutorizadas» y que «la actividad se centrará en los aprendizajes y competencias imprescindibles evitando sobrecargar al alumnado, aunque esto no impide que se siga avanzando en los conocimientos si es posible». Así, Celaá ya avanzaba el carácter descafeinado del tramo final de curso y su menor peso a la hora del cómputo final.

«La promoción de curso será la norma general en todas las etapas»

Así, para que un alumno repita, el profesor deberá dar cuenta a la Administración de la situación, presentar una argumentación sólida de los motivos de la repetición y acompañar la medida de un «plan de recuperación». Sobre los detalles de dicho procedimiento, el Gobierno deja a las CCAA que regulen exactamente cómo se iniciarán dichos trámites y en qué situaciones.

Si nos fijamos en las etapas, el Gobierno de Sánchez establece para la Educación Primaria que «las Administraciones educativas podrán flexibilizar, de manera excepcional durante el curso 2019-2020, los criterios de promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de áreas pendientes», así como que «la repetición se considerará una medida de carácter excepcional», algo extensible al resto de etapas. Es el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, para la que se determina que «los alumnos y alumnas promocionarán de curso y la repetición se considerará una medida de carácter excepcional, que se adoptará en todo caso de manera colegiada por el equipo docente en función de la evolución académica del estudiante durante el período previo a la suspensión de la actividad lectiva presencial». Lo mismo en el caso del Bachillerato.

Para la Formación Profesional se añade que «no serán tenidas en cuenta limitaciones para pasar de curso que afecten a módulos pendientes». Y en el caso de las Enseñanzas Artísticas y Deportivas se especifica que «no serán tenidas en cuenta limitaciones para pasar de curso que afecten al número o tipo de asignaturas o módulos con calificación negativa, o al porcentaje de carga lectiva pendiente» y que «la recuperación de las asignaturas pendientes referidas a la práctica de la práctica instrumental, vocal o de la danza se realizará en la clase del curso siguiente».

«Asimismo —agrega la Orden para estas modalidades—, se «podrán flexibilizar las circunstancias de los alumnos que, al término del 6º curso, tuvieran pendientes de evaluación positiva tres asignaturas o más, permitiendo que cursen únicamente las asignaturas pendientes, sin repetir el curso completo». Diferentes circunstancias, aunque el mismo criterio de reducir a la más mínima expresión el número de alumnos que no promocionen de curso.

La oposición de algunas comunidades autónomas

Cinco comunidades autónomas se han posicionado abiertamente en contra de las directrices del Gobierno, como el propio Ejecutivo reconoce en la Orden Ministerial publicada en el BOE. El texto pone nombres y apellidos de los discrepantes. En concreto se refiere a los consejeros de Educación Cristina Uriarte, del País Vasco, Francisco Javier Imbroda, de Andalucía, Esperanza Moreno, de la Región de Murcia, Enrique Ossorio, de la Comunidad de Madrid y Rocío Lucas, de Castilla y León, que no han firmado el documento. La disconformidad de los consejeros no viene dada, sin embargo, por las mismas razones. Se podría decir que hay un bloque que busca que se apliquen las mismas medidas en todo el país, que podrían denominarse como los contrarios a los «reinos de taifas», y otro conformado por los opuestos al «centralismo». En el primero están Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia, y en el segundo el País Vasco.

En cuanto a la postura de la Junta de Andalucía, sus docentes de la ESO y de Bachillerato aplicarán los mismos criterios de titulación y promoción que existían antes del confinamiento. Así lo marcó por la Consejería de Educación andaluza en unas instrucciones que ha enviado a los centros y que se desmarcan de lo estipulado por el Ministerio. En estas establece que se mantengan los mismos criterios que antes del cierre de centros. Esto es, que se podrá pasar de curso con dos asignaturas suspensas, tres en casos excepcionales y siempre bajo el criterio del equipo docente.

Castilla y León pide aclaración y concreción

En el caso de Castilla y León, la consejera Rocío Lucas remitió tres días antes de que se publicara la Orden en el BOE a la LOMCE, que es la ley de educación que está en vigor. En una rueda de prensa, Lucas aludió a la Constitución y a la «Ley Wert» para defender que «las condiciones de expedición y homologación de títulos académicos y profesionales es una competencia exclusiva del Estado».

Por ello pidió una «aclaración y concreción» al Ministerio, porque «no estaba claro» en qué casos podría darse la circunstancia de la repetición de curso por parte de un alumno. Así, «mientras no se cambie», Castilla y León se limitará a cumplir con la norma vigente.

La Comunidad de Madrid, por su parte, también se remite a la legislación actual y ha establecido que ningún alumno de Bachillerato o de los diferentes ciclos de FP pueda obtener el título con muchas asignaturas suspensas. En la ESO, el título podrá conseguirse con dos asignaturas suspensas siempre que no sean Lengua y Matemáticas, como establece la LOMCE. «No estamos de acuerdo en promocionar y titular con más suspensos de los que dice la ley ni que el número de asignaturas suspendidas lo fije cada región. Tampoco en que la tercera evaluación sea solo diagnóstica ni que en Bachillerato se haga una media de todas las notas», señalaban recientemente fuentes de la Consejería liderada por Enrique Ossorio al periódico **El Español**.

A su vez, Murcia seguirá los mismos parámetros que las anteriores, ciñéndose a la «Ley Wert».

Cabe destacar que todas las regiones contrarias a la propuesta del Ejecutivo están gobernadas por el Partido Popular y Ciudadanos —en algunos casos también con VOX, o al menos, con su apoyo—, a diferencia del ejecutivo nacional, conformado por PSOE y Unidas Podemos, junto al apoyo de partidos nacionalistas e independentistas de distintas comunidades autónomas. Precisamente, uno de estos apoyos para el Gobierno de Sánchez es el Partido Nacionalista Vasco, que, no obstante, también se ha distanciado del Gobierno central a la hora de llevar a cabo el cierre del curso. Al menos de manera verbal, acusándole de recurrir a la «imposición» y a la invasión de competencias, en palabras del lehendakari, Iñigo Urkullu.

Más allá de la retórica y de la no firma del documento antes citado, el País Vasco ha anunciado que seguirá los criterios señalados por el Gobierno central.

«La decisión sobre las titulaciones no puede dejarse en manos de las comunidades autónomas», denuncian desde CSIF

Tampoco ha sentado muy bien la medida en el seno de algunas fuerzas sindicales. El sindicato CSIF, el más representativo en las administraciones públicas, estudia acciones jurídicas contra el Gobierno «que eviten agravios comparativos entre el alumnado de las distintas comunidades autónomas».

Según indica en un comunicado, en el que denuncia que «la Orden que regula el final de curso deja en manos de las CCAA la promoción y titulación y no establece criterios objetivos, lo que puede dar lugar a una grave situación de desigualdad». «El Estado ostenta competencias exclusivas en la promoción y titulación del alumnado. Por ello, CSIF considera que esta Orden, que publica hoy el BOE, contraviene la Ley Orgánica, que marca un número máximo de materias suspensas para poder promocionar y titular. Es prioritario que los criterios sean iguales para toda España y se fijen de una manera objetiva para todo el profesorado», abundan desde el sindicato. Desde el mismo también se lamenta que la Orden no contemple criterios objetivos para la evaluación del tercer trimestre y la finalización del curso y «cargue toda la responsabilidad al profesorado, aumentando la presión social hacia ellos», algo que en el caso de la titulación de Bachillerato «agravará las diferencias en el acceso a la Universidad». Siguiendo con la universidad, CSIF avanza que con las medidas de Celaá se intensificarán «los agravios que ya se producen entre el alumnado con las pruebas de acceso a la Universidad, diferentes según las comunidades autónomas». «Puede darse la situación de que algunas Comunidades otorguen el título de Bachillerato y por tanto se permita el acceso a la Universidad a alumnos y alumnas con materias suspensas, mientras que en otras no será posible por tener criterios de titulación diferentes».

Para ANPE, la Orden de Celaá es «un dislate normativo y jurídico» que «vulnera la LOMCE»

Desde la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), piden al Ministerio que rectifique la Orden Ministerial, ya que, a su entender, «vulnera la LOMCE y los decretos que la desarrollan». Esta Orden Ministerial es para ANPE «un dislate normativo y jurídico las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 en cuanto a promoción y titulación». ANPE señala que la Orden «contradice el marco legislativo común establecido, que sin ser el mejor, no por ello deba dejar de ser de obligado cumplimiento» y asegura que «genera confusión e inseguridad jurídica, vulnerando los principios y competencias básicas que tiene reconocidos el Ministerio de Educación y Formación Profesional». Esta asociación apunta hacia lo paradójico de que la Orden refleje una serie de acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación de obligado cumplimiento solo para las autonomías que los suscriban, y recoge que serán estas regiones las que en la ESO y el Bachillerato podrán flexibilizar los criterios de promoción y titulación, «sin tener en cuenta las limitaciones que afecten al número de áreas pendientes». «Cabe recordar que los criterios de promoción y de

titulación están establecidos en la LOE/LOMCE, donde se recoge el límite máximo de áreas pendientes para poder promocionar y las condiciones de titulación, algo que es competencia estatal y que no puede ser derogado por una Orden Ministerial», añaden desde ANPE, desde donde creen que la Orden «además de conculcar los valores de esfuerzo, mérito o igualdad de oportunidades en el alumnado, agranda la brecha ya existente en el territorio nacional y resta valor al trabajo que nuestros docentes están realizando con esfuerzo, dedicación y gran profesionalidad».

Escuelas Católicas: algunas medidas «son contrarias a la ley vigente y a la propia Constitución»

Una opinión similar a la de CSIF o ANPE sobre este asunto tiene Escuelas Católicas. «Algunas medidas que finalmente han sido adoptadas con una calculada ambigüedad en la Orden Ministerial, son contrarias a la ley vigente y a la propia Constitución. En ella, delega competencias que le son propias y genera graves diferencias territoriales, como las que ya se están observando en algunas comunidades autónomas que han comenzado a legislar según sus propios criterios», defienden desde la patronal de la educación católica, desde la cual consideran que «en un momento tan complejo como el que estamos viviendo y tan lleno de incertidumbres, no es responsable ahondar en las desigualdades territoriales, algo que está fomentando el Ministerio al delegar en las consejerías de Educación los criterios sobre promoción de curso y titulación en ESO y Bachillerato» a través del enunciado de la Orden que especifica que esto se hará «sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de materias pendientes». «Según establece nuestra Constitución, corresponde exclusivamente al Estado fijar los requisitos para la obtención de títulos académicos oficiales; no es una materia delegable, ni tampoco es susceptible de modificación por la normativa dictada en el marco del estado de alarma», sentencian desde Escuelas Católicas.

Se amplía el plazo para tramitar enmiendas parciales a la LOMLOE

L. Marín

La reanudación de la actividad parlamentaria a mediados del mes de abril puso en marcha no solo las sesiones de control al Gobierno, sino también a las distintas comisiones, que han ido retomando progresivamente sus trabajos. El Congreso inició así una desescalada del confinamiento —marcada por el teletrabajo y con una presencia mínima de parlamentarios— a instancia principalmente del PP, que comenzó con la recuperación de las sesiones de control al Ejecutivo por parte de los grupos.

A continuación, la Mesa del Congreso levantó la suspensión de los plazos de tramitación de las iniciativas registradas en la Cámara, medida cuyo objetivo era sortear el vencimiento de los plazos durante la paralización parlamentaria. Esta decisión provocó la vuelta al trabajo de las comisiones, entre ellas la de Educación, que tenía en pausa la tramitación de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE).

La LOMLOE, la gran apuesta del Ministerio liderado por Isabel Celaá, fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 3 de marzo de 2020 —un año antes ya había sido aprobada, pero su tramitación parlamentaria quedó bloqueada por el adelanto electoral—. De este modo, el plazo para presentar enmiendas a su totalidad finalizó el pasado 24 de abril, mientras que ayer día 29 concluía el de presentación de enmiendas parciales.

El mantenimiento de los plazos previstos para la tramitación de la ley de Educación provocó una avalancha de críticas por parte tanto de los partidos de la oposición como de algunos colectivos del ámbito de la educación, quienes alegaban que el Ejecutivo está aprovechando la situación generada por la crisis sanitaria para que la LOMLOE salga adelante a toda costa.

Ante las presiones, la Mesa del Congreso aprobó este martes 28 de abril la ampliación del plazo para enmendar el articulado de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación hasta el próximo 6 de mayo.

Rechazo en bloque de la oposición

En este sentido, según informa Europa Press, el Partido Popular y Vox han presentado sendas enmiendas a la totalidad de la conocida como 'Ley Celaá', por la falta de consenso en su redacción, argumentan los populares, y por considerar que la norma es «demagógica, al servicio de ideologías totalitarias», explican desde Vox. Por su parte, Ciudadanos ha pedido la devolución al Gobierno de esta Ley, ya que, en su opinión, «relega» a la educación concertada como «mera subsidiaria» de la pública y «no garantiza que se pueda estudiar en español en toda España».

La Ley también encuentra detractores entre la comunidad educativa. De este modo, la Plataforma «Concertados» —entidad constituida por Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG), CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos) y COFAPA (Confederación de Padres de Alumnos), y en la que también están integrados los sindicatos mayoritarios de la concertada FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza) y FEUSO (Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera) — lanzó a principios de esta semana un comunicado en el que explicaban que la decisión de la Mesa del Congreso de no aplazar el trámite de presentación de enmiendas manifiesta «un déficit democrático inadmisibile», y añadían además que «su prisa

parece obedecer a su posible intención de introducir enmiendas solo consensuadas por los socios de Gobierno y que limitarían la libertad de enseñanza».

Sin embargo, la decisión del Gobierno de ampliar el plazo hasta el 6 de mayo no cumple por completo las expectativas de este colectivo, el cual solicita «que se ampliara el plazo para realizar enmiendas parciales hasta por lo menos 15 días después de levantar el estado de alarma», según transmite Antonio Amate, secretario general de Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (FEUSO).

Amate explica así que «creemos que no tiene sentido seguir adelante con esta Ley, como mínimo, hasta que no se levante el estado de alarma. En las anteriores leyes orgánicas hubo siempre un tiempo de comparecencia en el que se citaba a la comunidad educativa para que esta, a pesar de las discrepancias, contara con la mayor participación posible. En este caso, los plazos en los que se ha reactivado el procedimiento no nos permiten trabajar con normalidad, por la situación inédita de crisis sanitaria en la que nos encontramos».

Asimismo, Amate puntualiza que «nuestra intención es participar en la tramitación de la Ley, lo cual no es posible ahora mismo porque no podemos solicitar reuniones con los grupos parlamentarios. En una situación normal, nosotros trasladaríamos nuestras propuestas para que los grupos que las quisieran acoger las acogieran en forma de enmienda». Por otro lado, el secretario general de FEUSO hace referencia a la «cortesía parlamentaria» que siempre ha existido en cuanto a la ampliación de los plazos de tramitación.

Una ley que no gusta a la concertada

Precisamente uno de los puntos más polémicos de la nueva LOMLOE es el referente a la educación concertada. En este sentido, uno de los objetivos clave del Gobierno es recuperar la equidad e inclusión, para lo cual la nueva Ley «suprime medidas segregadoras entre las redes pública y concertada que introdujo la LOMCE», según recoge la presentación del Proyecto de Ley.

Entre las medidas eliminadas se incluye el concepto de «demanda social» para la toma de decisiones sobre la construcción de centros públicos y privados, un parámetro introducido por la Ley Wert y cuya forma de medición nunca estuvo claro. El artículo 109 de la LOMLOE corrige así este punto y especifica que «las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de modo que garantice la existencia de plazas públicas en las diferentes áreas de influencia que se establezcan, especialmente en las zonas de nueva población».

Antonio Amate cree que «el Gobierno defiende así una enseñanza concertada subsidiaria de la escuela pública, lo cual vulnera el principio de complementariedad de redes que recoge la Constitución. Se debe dotar de suficientes recursos a todas las redes y respetar a los padres en su papel de principales educadores».

El choque con la Educación Especial

Otro de los temas candentes de la LOMLOE es el que hace referencia a la educación especial. Tal y como el equipo de Celaá ha explicado en una nota de prensa aclaratoria esta misma semana, el Proyecto de Ley de Educación, recoge literalmente que «el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad».

Sin embargo, este punto ha levantado ampollas en colectivos como la Plataforma Educación Inclusiva sí, especial también, la cual achaca en un comunicado al Gobierno aprovechar el estado de alarma para tramitar una Ley «que pretende limitar los Centros de Educación Especial únicamente a los alumnos que requieran una atención muy especializada y eliminar la mayoría de los Centros de Educación Especial existentes, arbitrariamente, en 2030».

En su nota de prensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional destaca que «las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios» y «por lo tanto, es absolutamente falso que el Gobierno vaya a cerrar los centros de educación especial».

Así, desde FEUSO creen que la LOMLOE «achica la educación especial y la deja como algo residual. Además, pretende trasvasar a los alumnos a los centros ordinarios, pero lo hace sin contar con los padres, los cuales están en contra. Las familias están absolutamente satisfechas con el trabajo que se ha hecho con sus hijos en los centros de Educación Especial y no quieren que se experimente con ellos en los centros ordinarios».

La religión, optativa sin alternativas

La asignatura de religión siempre ha sido la más castigada por los cambios normativos del Ministerio de Educación. En este sentido, la LOMLOE propone mantenerla como optativa pero sin «asignaturas espejo», es decir, quien no la curse contará con una hora libre más, respetando de este modo los Acuerdos del Estado con la Santa Sede de 1979. Amate cree que, de este modo «se queda como una actividad extraescolar de escaso nivel académico en una vía prácticamente muerta», y añade que «la asignatura de religión está perfectamente normalizada y cada año se somete a un referéndum popular: si los padres no la eligieran, se eliminaría».

Aprender, aprobar, pasar y repetir en los tiempos del COVID19

Juan Manuel Moreno y Florencio Luengo

Como en tantos otros países, en España, la pandemia causada por el Covid-19 llevó al cierre de los centros escolares en marzo y a una reacción acelerada para poner en marcha alternativas de educación a distancia, online y «on-screen», desde las más tradicionales como la televisión educativa hasta las más innovadoras con aplicaciones para smartphone y redes sociales. Entrados ya en el mes de abril, el énfasis en desplegar recursos que aseguraran lo que se ha dado en llamar la «continuidad del aprendizaje» dejó paso a un debate cada vez más enconado sobre cómo cerrar este curso académico y, en concreto, cómo evaluar a los estudiantes, con qué criterios decidir sobre la promoción o la repetición de curso y, en su caso, la certificación y titulación de aquellos que concluyen etapa. A algunos les preocupa especialmente no penalizar a los estudiantes con mayor dificultad para aprovechar la oferta de educación a distancia y online, y que son los más vulnerables de nuestra sociedad. A otros, sin embargo, les preocupa que una tal vez excesiva flexibilidad o manga ancha evaluadora pudiera conducir a una pérdida de credibilidad del sistema escolar, al transmitirse a estudiantes y sus familias que se rebajan deliberadamente los niveles de exigencia académica y por tanto, alegan, se renuncia a valorar y recompensar el esfuerzo individual.

Al politizarse este debate en los últimos días, la opinión pública parece percibirlo, sin mayor matiz, como «aprobado general versus aquí no se regala nada». Y ello a pesar de que ninguna de las dos posturas se presenta a sí misma en esos términos tan radicales. Teníamos un consenso amplio sobre la necesidad de invertir los recursos necesarios en que ningún alumno dejara de aprender durante el cierre de centros, y el consenso se ha roto en cuanto el calendario se ha empezado a acercar al mes de junio, con sus evaluaciones, calificaciones y decisiones derivadas. ¿Por qué ha sido tan fácil consensuar la continuidad en el aprendizaje y resulta tan difícil consensuar la continuidad en la evaluación? Algunas respuestas a estas preguntas son bien conocidas; otras no lo son tanto.

Los más viejos del lugar recordamos bien que, en el pasado régimen, y tanto para el bachillerato (que empezaba a los 10 años) como en la universidad, existía la matricula libre. Costaba menos que la oficial, el alumno no tenía derecho a ir a clase, y solo se presentaba en el Instituto en junio o en septiembre a examinarse. Pretender que la evaluación (y las decisiones derivadas) se haga ahora como si este fuera un curso normal, nos colocaría en una situación que se parecería mucho a aquella matricula libre, y en este caso, además, obligatoria. La legalidad de esta vía sería como mínimo dudosa y, de entrada, muchos contribuyentes podrían reclamar la devolución de la parte de sus impuestos que van a sostener la educación pública y concertada. Además, los estudiantes sin acceso a la oferta online o cuyos centros y profesorado no cuenten con la preparación y recursos suficientes para trabajar a distancia y con materiales digitales, se verían injustamente perjudicados. Y eso por no hablar de aquellos estudiantes que están haciendo frente, además de al confinamiento, a la muerte de familiares muy cercanos, a la pérdida de empleo de sus padres y madres, o a la presión psicológica de la pandemia paralela de violencia en muchos hogares durante el confinamiento. Es el propio derecho a la educación el que está en juego.

El trabajo realizado por los estudiantes desde el cierre de centros debe servir para recuperar o mejorar las calificaciones. Por tanto, ningún estudiante puede ser penalizado en la evaluación de este trimestre digital. En particular, para quienes no hayan podido avanzar durante este trimestre, a causa de la brecha digital, en lugar de quedar abocados a la repetición, se deben identificar en un informe individualizado las necesidades de adaptación y, a partir de ahí, articular un plan de recuperación a lo largo del próximo curso. Así, los conocimientos esenciales del tercer trimestre podrían abordarse adaptados sobre todo durante el primer trimestre del curso que viene (que, a efectos académicos, debería ser al mismo tiempo el último trimestre del curso 19-20). Quienes ya los hubieran trabajado y superado, pueden ampliar sus conocimientos y habilidades, por ejemplo, dando apoyo a compañeros y desempeñando funciones de liderazgo a través de aprendizaje cooperativo en las aulas. Los equipos docentes sabrán reconocer su esfuerzo y sus nuevas habilidades, y eso se reflejará en sus calificaciones. Por tanto, desde la práctica de los equipos docentes, y desde la confianza en su profesionalidad, no es incompatible premiar el esfuerzo individual con asegurar que la brecha digital — y otras que se están abriendo con esta pandemia — no dejan a ningún estudiante injustamente atrás.

Algunos altos responsables educativos han exigido normas claras sobre repetición y titulación, para evitar que se pudiera terminar regalando aprobado general. En principio habrá que recordar que esas normas existen ya, ni más ni menos que a nivel de ley orgánica, la LOMCE, todavía vigente, y que obliga y compromete a todos (LOMCE RD 126/2014 para Primaria y RD/1105/2014, para ESO y Bachillerato, modificado por RD562/2017, en donde se definen las condiciones de titulación de las etapas citadas). Recordemos pues, que ya se promociona en ESO con dos suspensos de forma ordinaria, o tres excepcionalmente si así lo decide el equipo docente. En Bachillerato se promociona hasta con dos suspensos.

En cuanto a titulación, la norma en Bachillerato es que se logra si no hay ningún suspenso, mientras que en la ESO es posible titular con dos suspensos, siempre que no sean Lengua y Matemáticas a la vez. Por lo que se refiere a la repetición, la LOMCE conservó el texto de la LOE al establecer que sea absolutamente excepcional: «...solo si se han agotado todas las medidas de apoyo y refuerzo posibles». Como esas medidas no pueden tomarse ni desde luego agotarse durante el cierre de centros, hay que apostar por la recuperación en lugar de la repetición. No es solo lo más justo socialmente y un verdadero imperativo moral; también es lo que más respeta la legalidad vigente y garantiza el derecho a la educación.

¿Cuál es la novedad aportada por la Conferencia Sectorial ante esta situación excepcional? Que otorga y solicita a las CCAA que puedan flexibilizar, de manera extraordinaria durante el curso 2019-20, los criterios de promoción y de titulación actuales, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de materias pendientes. Esta propuesta no hace sino reconocer tanto la norma vigente (LOMCE, art. 28.2.), como la práctica habitual de tutores y equipos docentes cuando, al llegar el final de curso, además de la evaluación de cada materia, valoran el progreso de cada estudiante «atendiendo al logro de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes» para decidir sobre la promoción y titulación. Y si de verdad se quisiera conseguir una aplicación más homogénea de la norma para promoción y titulación, habría que avanzar en definir y establecer con claridad perfiles competenciales, como de hecho ya tiene la Formación Profesional. Pero esta tarea, aun siendo necesaria, no es la que toca en la situación sin precedentes a la que nos enfrentamos.

Solo podemos confiar en el buen sentido de las Consejerías de Educación a quienes se hace corresponsables de esta excepcional situación, y sobre todo en la profesionalidad de los claustros de profesores para que las juntas de evaluación de este año no se dejen contaminar por batallas partidistas y territoriales que poco o nada tienen que ver con la responsabilidad que se le asigna a nuestro sector. Hoy confiamos ciegamente en nuestros profesionales de la sanidad y les aplaudimos — con razón y emoción — cada día. Queremos hacer lo mismo con nuestros profesionales de la educación. Son igual de buenos.

Juan Manuel Moreno y Florencio Luengo son, respectivamente, Presidente y Coordinador General del Proyecto de innovación e investigación Atlántida.

Educación, antídoto contra la brecha digital

Ramón Flecha. Catedrático de Sociología. Director de Included

Este último fin de semana, 20.000 personas hemos participado en el **hackathon** organizado por la Comisión Europea para contribuir a superar los problemas creados o agravados por la pandemia del covid-19. La buena noticia es que los más de 200 proyectos elaborados durante los dos días y noches del fin semana no están centrados en analizar los problemas sino en las soluciones a los mismos. El discurso del impacto social ha llegado a poner en primer plano la prioridad de mejoras de la vida de las personas. La ilusión despertada en cada minuto de su creación ha convertido el hackathon en una verdadera fiesta; una vez más se ha demostrado que no es cierto que nuestra juventud no esté motivada a esforzarse para lograr mejorar sus vidas, sus relaciones y el mundo, se ha puesto de nuevo relieve que con propuestas interesantes y transformadoras esa motivación luce en todo su esplendor.

Desde hace décadas, hay una abundante literatura de análisis sobre la brecha digital, cómo al mismo tiempo es consecuencia y causa de la brecha social, las causas estructurales o sistémicas de esas desigualdades, cómo las escuelas contribuyen a reproducirlas, o la influencia del neoliberalismo. Sin embargo, esos análisis no han demostrado tener ningún impacto en la superación o disminución de la brecha, ni digital ni social; ni siquiera han demostrado lograr que un solo niño o niña mejore su situación. La mayoría de los mejores proyectos analizan primero las actuaciones que ya se están llevando a cabo con éxito y luego sus posibilidades de transferibilidad a otros contextos y al conjunto de la población. En esos análisis, casi siempre se encuentran con la educación como una base imprescindible para llevar a cabo la mejora.

La brecha digital no afecta solo a los sectores sociales de menor nivel socioeconómico, sino también a personas mayores y menores de edad de muy diversos contextos. Uno de los elementos más recurrentes en la literatura hoy existente es la brecha digital que sufren las personas que viven en domicilios sin conexión a internet. Si esa situación ya era muy desfavorecida en épocas anteriores, se ha agravado mucho más con la pandemia, el cierre de las escuelas y el confinamiento. Pero hablando de conexión, hay que añadir los domicilios que solo tienen un ordenador y lo usa el padre o la madre haciendo teletrabajo.

Hay quienes dicen y escriben que las escuelas no pueden hacer nada en esa situación y que la docencia ofrecida a distancia aumenta la brecha en lugar de superarla. No obstante, hay excelentes ejemplos de lo contrario, con escuelas que han realizado un conjunto de acciones para garantizar la conexión a todo su alumnado. Por citar solo un caso muy cercano que está siendo referente en Europa, en Valencia y en otros lugares hay escuelas que han reorganizado sus recursos informáticos para llevarlos temporalmente a los hogares más necesitados. Además, han realizado campañas de donaciones que han permitido que todos los domicilios del alumnado tengan conexión a internet. Por otra parte, el mismo hecho del cierre de las escuelas durante un período largo del curso es ya en sí una demanda social para que las instituciones, la sociedad y las familias se esfuercen en realizar acciones para universalizar la conexión.

Una brecha digital y social que está creciendo en importancia es la vinculada a los usos que se hacen de internet. Hay una distancia creciente entre quienes casi solo hacen uso digital para contenidos que deseducan tanto en conocimientos, como en valores, emociones y sentimientos, y quienes hacen un uso predominante

para lo contrario. Solo unas anécdotas a modo de ejemplo, jugar o no jugar al ajedrez en la infancia y adolescencia tiene una repercusión en algunas capacidades intelectuales, en la atención y en la facilidad para algunos contenidos instrumentales. Es muy barato hacerlo, gratis para quienes ya tengan una conexión. Las escuelas que teniendo alumnado muy desfavorecido fomentan esta actividad logran mejoras en esas dimensiones que no tienen quienes viven en casas lujosas con piscina y muchas conexiones a internet, pero que hacen un mal uso de ellas.

Ya en el presente, y mucho más en el próximo futuro, la brecha más profunda es la que separa a quienes crecen en familias y escuelas que fomentan usos críticos e inteligentes basados en los valores, emociones y sentimientos que todo el mundo decimos defender, pero no siempre practicamos. Las familias tienen un papel muy importante no solo por lo que dicen a sus menores sino principalmente por el ejemplo que les dan. Si dan crédito y difunden los bulos que reciben de los wasaps, de las redes en general o de los medios, será muy difícil que logren educar lo contrario. Saber buscar la información verdadera sobre el covid o cualquier otra enfermedad y saber distinguirla de los bulos, difunda quien los difunda, es cada vez más decisivo para la duración y la calidad de nuestras vidas.

Muchas escuelas desarrollan un excepcional trabajo de formación directa e indirecta de las familias para que mejoren la realización de esa tarea. De nuevo, aquí es básico además dar ejemplo tanto en su comunicación presencial como a distancia. No es lo mismo fomentar las lecturas y comentarios de las mejores obras de la literatura universal que bestsellers que tienen una calidad muy inferior. Tampoco es lo mismo fomentar los pocos videojuegos basados en los valores que escuelas y familias desean que tengan sus menores que tomar una postura pasiva que les entrega en unas manos que no se guían precisamente por esos valores sino por otros frecuentemente contrarios.

En épocas de confinamiento, hay escuelas que fomentan las relaciones a distancia entre su alumnado, el continuar sus amistades enriqueciéndolas con una nueva dimensión y perspectiva. Les enseñan en la práctica qué relaciones humanas a través de internet mejoran sus sentimientos y cuáles son tóxicas. Algunos centros educativos colaboran con las familias para que ayuden a sus menores a socializar en esa capacidad de elegir bien que será decisiva para sus vidas personales y profesionales. Con ese enfoque, la educación transforma algunas dificultades en oportunidades, colabora muy activamente en la realización práctica de los ideales de quienes nos dedicamos a la educación.